

Trabajo fin de Máster

Titulo CONFLICTOS ÉTNICOS ENTRE COPTOS Y MUSULMANES EN EGIPTO

Autor/a EUGENIA LABARGA GARCÍA

Universidad de LEÓN

Tutor/a SALVADOR TARODO

Curso 2014-15

Máster en Cooperación Internacional para el Desarrollo



UNIVERSIDAD
DE BURGOS



Universidad de León



UNIVERSIDAD
DE SALAMANCA



Universidad de Valladolid



ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN

1.1 Metodología

1.2 Estructura del estudio

II. BREVE HISTORIA DEL CRISTIANISMO COPTO

2. 1 El cristianismo copto bajo la dominación musulmana

2. 2 Principales características del cristianismo copto

2. 3 Ejemplos de violencia e intolerancia sufridas por el pueblo copto

2. 4 Problemas principales de los coptos en Egipto

2. 5 Diásporas a lo largo de la Historia de los coptos

III. EGIPTO, DESDE EL SIGLO XIX HASTA NUESTRO DÍAS

3.1 Sociedad y Economía

3.2 Los primeros partidos políticos. La caída de Sadat

3.3 Problemas estructurales del Egipto Moderno

3.3.1 La Gran Presa

a) Agricultura

b) Pesca

c) Industria

d) Cultura

3.3.2 La superpoblación. Macrourbes

3.3.3 Incipiente industrialización

3.3.4 Las nuevas relaciones de Egipto con Israel

3.4 Mubarak

3.4.1 Economía

3.4.2 Trabajo

3.4.3 Política

3.4.4 Finanzas

3.4.5 Relaciones con otros países musulmanes

3.4.6 Sociedad y Cultura

3.4.7 Terrorismo

3.5 La Primavera Árabe en Egipto

3.6. Políticas de la ONU sobre la minoría copta

IV. MINORÍAS RELIGIOSAS EN EL RECENTE CONSTITUCIONALISMO EGIPCIO

4.1 Constituciones de Nasser y Sadat

4.2 Constituciones actuales

VI. CONCLUSIONES

VII. BIBLIOGRAFÍA

VIII. ANEXOS

- **Constitución de la República Árabe de Egipto de 2011**
- **Constitución de la República Árabe de Egipto de 2012**
- **Constitución de la República Árabe de Egipto de 2014**

*A mi padre,
el científico humanista
Y a mi madre,
quien me enseñó a leer y el amor por todo lo escrito*

RESUMEN

El estudio versa sobre los conflictos étnicos entre egipcios coptos y musulmanes. El foco principal del trabajo son los cambios constitucionales de las minorías con las nuevas constituciones. Para llevar a cabo el estudio de los artículos constitucionales referentes a minorías religiosas es necesario un contexto básico previo. Para ello, se estudia la historia y las costumbres de esta comunidad y de su iglesia, así como la historia reciente de Egipto. Como introducción a las Constituciones promulgadas recientemente en Egipto (2011, 2012 y 2014), también se hará una breve explicación sobre las constituciones precedentes (Nasser y Sadat). Dentro del punto clave del estudio se tratarán los artículos concernientes a las minorías; así como el efecto que han tenido en Egipto las últimas revueltas.

En las conclusiones se detallan los cuatro puntos más significativos del estudio, donde se hace una valoración general. El último punto de las conclusiones, el más significativo, es la tesis del trabajo. En dicho epígrafe se explica que, pese a la mejora de la situación constitucional de esta comunidad, la realidad es que su vida cada vez se ve más amenazada. Sus problemas provienen generalmente del amplio y rápido avance del radicalismo islámico. Por ello, aunque tratan de mantener en pie su comunidad en su país de origen, cada día se ven más forzados a abandonar dicho país, donde han vivido desde la época de los faraones.

Fuente: Universidad de Hardvar. Karen I. King



Papiro de escritura copta

PALABRAS CLAVE: Iglesia Ortodoxa Copta, religión islámica, minoría religiosa, persecuciones, constitucionalismo, Historia de Egipto.

I. INTRODUCCION

El presente trabajo presenta un estudio sobre los problemas actuales, diferencias y desencuentros entre las comunidades coptas de Egipto y la mayoría que sigue la religión islámica; así como de establecer comparaciones con las Constituciones existentes y precedentes desde la época nasseriana hasta nuestros días. Esto significa que la época en la que se centra el estudio es desde el momento en el que los egipcios fueron liberados de las garras de colonialismos y pudieron poner su destino en manos de sus compatriotas. Veremos a lo largo del estudio cómo, con respecto a la religión y a la persecución de las minorías, estas Constituciones han ido cambiando dependiendo de quién ostentase el poder en cada momento, pero se centrará con especial atención a los cambios realizados desde la deposición del líder Mubarak, con las Constituciones de 2012, con el Gobierno de los Hermanos Musulmanes, y los cambios realizados en el presente tras las elecciones y el triunfo, de nuevo, de los militares egipcios.

Se ha delimitado espacialmente el estudio de forma que se reduce a la nación de Egipto. Aunque existe una gran población copta en Etiopía, la delimitación espacial se debe a los motivos de los cambiantes regímenes egipcios. En Egipto la comunidad copta representa una minoría y por ello el trabajo se centra en lo que estos cambios han supuesto en su condición dentro del país. Para poder contextualizar de forma correcta el trabajo, es necesario, hablar de la sucesión de gobiernos y los desencuentros entre las dos religiones que se han dado a lo largo de toda la historia de este país. Con ello no se pretende menospreciar los problemas que sufren hoy los coptos etíopes, ya que son tan graves o más como los que sufre dicha población en Egipto, pero se ha elegido esta nación porque las fuentes y los novedosos cambios podrían dar lugar a una investigación más profunda y amplia que si se realizase sobre la población copta de Etiopía.

En cuanto la delimitación cronológica y pese a que se haga referencia tanto a la época de Nasser como a otras épocas, ya que será esencial establecer una comparación con dicha época para realizar el presente trabajo, se centrará especialmente, como hemos mencionado en el primer párrafo, en las nuevas Constituciones egipcias y cómo afectan a las posibles persecuciones o vejaciones que pueda sufrir una comunidad por no compartir la religión mayoritaria del país. Otra de las razones que se han presentado como idóneas para llevar a cabo esta investigación es el hecho de ser algo novedoso y sin tesis previas sobre las que apoyarse, por lo que gran parte del trabajo serán razonamientos propios a partir de textos

obtenidos de fuentes fiables, pero con escasas referencias a investigaciones anteriores puesto que, recalando las anteriores palabras, de momento no se han encontrado.

Las otras dos cuestiones de delimitación del trabajo que sin dudas deben aclararse antes de exponer la tesis y las conclusiones son la delimitación formal y la delimitación material.

Para que no le quiepa ninguna duda al lector, explicamos la tercera de las delimitaciones, la relacionada con la forma de ensayo. Es decir, qué se ha buscado y a través de qué nos hemos ayudado para llegar a las conclusiones presentadas gracias a las fuentes en las que se apoya dicho estudio. A través de la historia reciente de Egipto y de la historia prácticamente desde sus comienzos de la minoría copta egipcia, buscamos entender en el Egipto de nuestros días a través de diversas fuentes (que se citarán en los párrafos en las que se les haga referencia) y cómo los coptos se muestran recelosos a los cambios, como veremos, para ellos ninguno ha significado una mejoría.

La última de las delimitaciones de este ensayo es la material. Tal vez sea la más importante pues es la que hace referencia al tema concreto sobre el que vamos a hablar: la minoría copta egipcia, su Iglesia desde su creación y las persecuciones que han sufrido a lo largo de los siglos; por supuesto todo ello enmarcado en lo que cada nueva Constitución les ha otorgado, sus derechos y deberes religiosos, así como los principales conflictos que han tenido con los musulmanes desde su invasión a Egipto en el siglo VII. La mayoría de los habitantes se convirtieron al Islam, bien por comodidad o bien porque la nueva religión impuesta por los árabes era para ellos la religión verdadera; sin embargo, una gran parte de la población se ha visto diezmada y aislada del resto del país (en la actualidad todavía existen unos siete millones de egipcios coptos) por continuar sus ritos y evitar la conversión religiosa, lo cual les ha costado muertos y heridos, vejaciones, pillaje en sus negocios, atentados, etc.; por lo que apenas la justicia los ha recompensado (como veremos muchos ataques a coptos en Egipto han quedado prácticamente impunes). Por ello, es importante esta parte del rompecabezas en la que se observa desde su punto de vista los cambios, tanto como nos ha sido posible, y cómo los ha percibido y percibe su comunidad en general.

1. Metodología

La metodología llevada a cabo en este trabajo se fundamenta en dos cuestiones fundamentales: profundizar en las Constituciones más recientes de la República Egipcia (la Constitución de 2011, la Constitución de 2012 y la más reciente de 2014) y cómo estas

Constituciones han afectado a la minoría copta en lo referente a aquellos artículos que delimitan los derechos y deberes religiosos.

Para llegar a las constituciones actuales, el estudio desarrolla, en capítulos previos, otros factores referentes a la sociedad y a la cultura de Egipto para poder abordar el tema legislativo. Entre ellos encontramos las cuestiones históricas y todo aquello relacionado con la minoría copta egipcia, la perspectiva actual y, por supuesto nos remitiremos a la época de Nasser y Sadat para establecer comparaciones en cuanto a los avances que se hayan podido suceder en Egipto en cuanto a la protección de esta minoría que, como repetiremos una y otra vez, se ha visto olvidada por la comunidad internacional y desgraciadamente no han tenido una ‘tierra prometida’ a la que escapar, sino que ellos son egipcios, y su tierra es su patria; no tienen otro lugar donde poder ponerse a salvo. Nadie, en la comunidad internacional ha conseguido regularizar esta situación y conseguir que cesen los ataques a esta minoría por cuestiones religiosas, ya que, aunque étnicamente se quieran hacer distinciones, tantos los seguidores del Corán como los Coptos provienen de la misma etnia y lo único que los separa es su religión.

Pero volvamos al comienzo de la metodología: el propósito principal del ensayo es conocer cómo afectan a una minoría los últimos cambios constitucionales. Se les protege a través de la Constitución de un método más efectivo que con las precedentes y de no ser así los cambios realizados por los últimos ejecutivos no contemplen la protección efectiva de esta minoría religiosa, que supone, sin embargo, un elevado tanto por ciento dentro de la población del país.

2. Estructura del estudio

La misión de este epígrafe, desde mi punto de vista, es explicar el por qué de cada uno de los puntos dentro del proyecto y la importancia conceptual que tiene cada uno de ellos para el desarrollo y las conclusiones finales acerca de los derechos de los cristianos Coptos en Egipto de acuerdo con la legalidad vigente y sus derechos reales, a los cuales se ven avocados pues aunque la ley pueda ser más o menos benévolas con su religión y sus costumbres, la mayoría de la sociedad resulta no serlo tanto.

Tras esta introducción, que recoge un resumen del proyecto, la metodología del mismo y este epígrafe, estructura del estudio; los siguientes puntos principales son las cuestiones históricas. Cómo las diversas situaciones vividas por el país han hecho de Egipto la nación que hoy conocemos. Un estudio sobre las constituciones previas a la actual,

estudiando brevemente las de Nasser y Sadat, pues el laicismo y la libertad religiosa son un contrapunto dentro de sus distintas visiones de Estado.

Dentro de las cuestiones históricas he creído muy importante presentar una historia del pueblo copto en Egipto (como hemos mencionado previamente en Etiopía es donde se encuentra la mayoría de los seguidores de esta religión, pero el fin del trabajo versa sobre los conflictos religiosos que han tenido lugar entre Coptos y musulmanes a lo largo de la historia reciente en Egipto y sólo en Egipto), cómo se han tratado sus problemas por parte de instituciones multilaterales como la ONU y cómo este pueblo ha tratado de resolver sus problemas. También me parece muy relevante el hecho de que los Coptos tengan que buscar asilo en otros países que no son el suyo. Han tenido que abandonar su tierra y todo por lo han trabajado y luchado toda su vida, el lugar en el que residen los miembros representativos de su Iglesia para poder seguir con vida. Para ellos no existió como para los judíos una tierra prometida en la que poder asentarse tras varios años de lucha incesante y además el apoyo incondicional de Occidente como su socio actual, como ocurre con Israel. Los Coptos son egipcios, en este caso concreto, y se ven avocados al exilio (aquellos que tienen la posibilidad del mismo y tienen medios para poder salir de su país y continuar con su vida fuera de allí) para poder sobrevivir.

Para ello se detalla en cada epígrafe su historia, desde su evangelización hasta la actualidad, determinados casos de violencia a los que se ha visto sometido dicho pueblo, así como los problemas que han tenido dentro su país a lo largo de la historia; sin olvidarnos de las diásporas que han sufrido a lo largo de los años y la dificultad de la reubicación de esta comunidad.

Con respecto al tercer punto de este estudio, también se ha considerado necesario dar un contexto no sólo desde el punto de vista copto, sino desde el punto de vista social: lo que ocurre en la actualidad en Egipto y el tratamiento a esta comunidad, así como las políticas y medidas de ayuda y cooperación que se han emprendido por parte de los organismos internacionales.

Los dos siguientes puntos que hemos tratado en el estudio son las constituciones, el tema principal; las dos primeras como referencia, Nasser y Sadat y en el punto siguiente las actuales desde la constitución aprobada por H. Mubarak.

Finalmente, he extraído las conclusiones de todo el estudio para presentarlas tras todo el proceso de investigación. He considerado oportuno incluir varios anexos que se

adjuntan para facilitar al lector la consulta de los textos normativos más importantes en los que he basado dicha investigación.

II. BREVE HISTORIA DEL CRISTIANISMO COPTO

La información sobre la historia del pueblo copto en Egipto no es muy abundante y carece de fuentes actualizadas, aunque teniendo en cuenta que en este epígrafe se van a describir hechos que ocurrieron desde el siglo I d.C. hasta sus costumbres, las cuales conservan desde su cristianización, lo importante es la fuente, mucho más que su actualización. La historia de los hechos recientes del pueblo copto se describe en epígrafes posteriores con bibliografía actual y contrastada. La información más reciente con la que se ha trabajado para este epígrafe es la *Claremont Coptic Encyclopedia*, del año 1991, cuyos derechos adquirió la *Claremont Graduate University, School of Religion*.

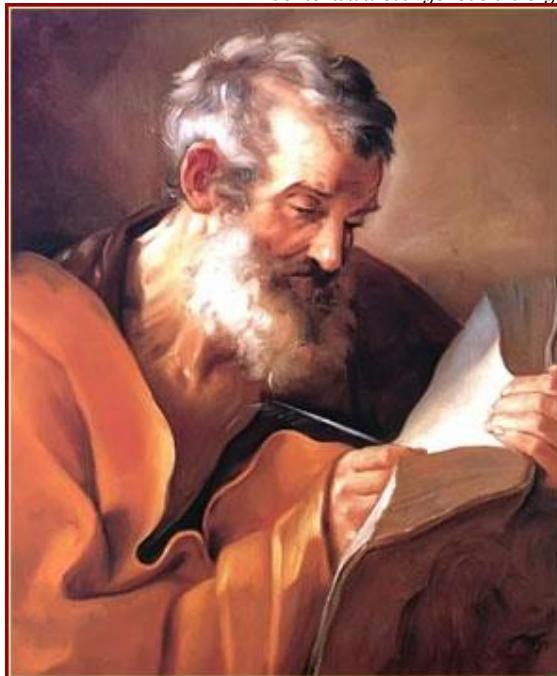
Comenzamos, cómo no, por el origen de la palabra a la que hace referencia todo el trabajo: copto. Esta palabra deriva de la palabra griega Aigyptos, que, a su vez, deriva de "Hikaptah", uno de los nombres de Memphis, la primera capital del Antiguo Egipto. El uso moderno del término "copto" describe a los cristianos de Egipto, así como la última etapa de la escritura en la antigua lengua egipcia. Además, se describe la técnica distintiva y la arquitectura que se desarrolló como una expresión temprana de la nueva fe (Kammerer, 1975).

La Iglesia de esta cultura se basa en las enseñanzas de San Marcos que trajeron el cristianismo a Egipto durante el reinado del emperador romano Nerón en el siglo I, una docena de años después de la ascensión del Señor, de acuerdo con los escritos de la Santa Biblia (teniendo en cuenta en todo momento que hablamos de la Iglesia Ortodoxa Copta). Fue uno de los cuatro evangelistas y el que escribió el evangelio canónico más antiguo. El cristianismo se extendió por todo Egipto dentro de medio siglo de la llegada de San Marcos en Alejandría como se desprende de los escritos del Nuevo Testamento que se encuentran en Bahnasa, en el Egipto Medio, que datan alrededor del año 200 d.C., y un fragmento del Evangelio de San Juan, escrito usando la lengua copta, que fue encontrado en el Alto Egipto y se puede datar en la primera mitad del siglo II (Kammerer, 1975).

Según W. Kammener, los coptos se encuentran integrados, por así decirlo, dentro de la nación egipcia moderna, aunque precisamente esta investigación versa sobre los problemas

que representan la difícil convivencia entre estas dos religiones y sus practicantes. Este pueblo ha sobrevivido como una entidad religiosa fuerte que se enorgullece de su contribución al mundo cristiano. El Concilio de Nicea, según dejó escrito uno de sus hijos predilectos, San Atanasio, el Papa de Alejandría durante 46 años, desde 327 d.C. hasta 373 d.C. Este estado es bien merecido, ya que, después de todo, Egipto fue el refugio en el que la Sagrada Familia buscó refugio de Judea: "Cuando él se levantó, tomó al niño y a su madre de noche y partió para Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: "De Egipto llamé a mi hijo" [Mateo 2: 12-23]. Las contribuciones de la Iglesia copta a la cristiandad son muchas. Desde el principio, jugó un papel central en la teología cristiana y especialmente para protegerla de las herejías gnósticas. La Iglesia copta produjo miles de textos, estudios bíblicos y teológicos que son recursos importantes para la arqueología. La Santa Biblia fue traducida a la lengua copta en el siglo II. Fueron cientos de escribas los que se necesitaron para escribir copias de la Biblia y otros libros litúrgicos y teológicos. Ahora las bibliotecas, museos y universidades de todo el mundo poseen cientos y miles de manuscritos coptos, como explica el experto en estudios coptos Aziz S. Atiya (Atiya, 1991).

Fuente: www.evangeliodeldia.org



San Marcos

De acuerdo con la institución más importante en estudios coptos que fundó en 1950 en El Cairo el profesor Aziz S. Atiya, la escuela catequética de Alejandría es la Escuela Catequética más antigua del mundo. Poco después de su creación alrededor de 190 d.C. por el erudito cristiano Pantanaeus, la escuela de Alejandría se convirtió en la institución más

importante de la enseñanza religiosa en la cristiandad. Muchos obispos prominentes de muchas áreas del mundo fueron instruidos en que la escuela bajo estudiosos como Atenágoras, Clemente, Dídimo, y el gran Orígenes, quien fue considerado el padre de la teología y que también era activo en el campo de comentarios y estudios bíblicos comparativos. Orígenes escribió más de 6.000 comentarios de la Biblia, además de su famoso Hexapla. Muchos estudiosos, como San Jerónimo visitaron la escuela de Alejandría para intercambiar ideas y para comunicarse directamente con sus eruditos. El alcance de la escuela de Alejandría no se limitó a temas teológicos, ya que la ciencia, las matemáticas y las humanidades también se enseñaron allí (Atiya, 1991).

El ascetismo nació en Egipto y fue crucial en la formación del carácter de la Iglesia copta de sumisión y humildad. El ascetismo comenzó en los últimos años del siglo III y floreció en el siglo IV. San Antonio Abad, primer monje cristiano en el mundo de acuerdo con los estudios teológicos, era un copto en el Alto Egipto. San Pachom, que estableció las reglas de la vida monástica, fue un copto. Y, San Pablo, primer anacoreta del mundo resultó ser también un copto. Otros padres del desierto coptos famosos incluyen San Makarios, San Moisés *el Negro*, y Santa Mina *la Milagrosa*. Los padres del desierto más contemporáneos incluyen al difunto Papa Cirilo VI y su discípulo, el Obispo Mina Abba Mina. A finales del siglo IV, había cientos de monasterios y miles de células y cuevas esparcidas por las colinas egipcias. Muchos de estos monasterios siguen siendo florecientes. El ascetismo cristiano deriva, directa o indirectamente, en el ejemplo de Egipto: San Basilio, organizador del movimiento asceta en Asia menor visitó Egipto alrededor del 357 d.C. de acuerdo con el profesor Atiya y sus discípulos, y su regla es seguida por las Iglesias Orientales; San Jerónimo, que tradujo la Biblia al latín, llegó a Egipto alrededor del año 400 d.C. y dejó detalles de sus experiencias en sus cartas; San Benito fundó monasterios en el siglo VI siguiendo el modelo de San Pachom, de forma más estricta. Y un sinnúmero de peregrinos visitaron a los "Padres del Desierto" y emulan sus vidas espirituales. Incluso hay evidencia de que los coptos tenían misioneros en el norte de Europa. Un ejemplo es el de Saint Moritz de la Legión Tebana, quien fue seleccionado en Egipto para servir bajo la bandera romana y acabó enseñando el cristianismo a los habitantes de los Alpes Suizos; en un pequeño pueblo, en uno de cuyos monasterios se conservan sus reliquias, así como algunos de sus libros y sus pertenencias. Otro santo de la Legión Tebana es Saint Víctor, conocido entre los coptos como "Boktor" (Atiya, 1991).

Bajo la autoridad del Imperio Romano de Oriente en Constantinopla (en comparación con el imperio occidental de Roma), los patriarcas y los Papas de Alejandría

jugaron papeles principales en la teología cristiana. Fueron invitados de todo el mundo para hablar de la Fe Cristiana. San Cirilo, el Papa de Alejandría, era el jefe del Concilio Ecuménico celebrado en Éfeso (en este concilio fue en el que se trató la concepción de Jesucristo), en el año 430 d.C. se dijo que los obispos de la Iglesia de Alejandría no hicieron más que pasar todo su tiempo en reuniones. Este papel de liderazgo, sin embargo, no le funcionó cuando la política comenzó a mezclarse con los asuntos de la Iglesia. Todo comenzó cuando el emperador Marciano interfirió con asuntos de la fe en la Iglesia. La respuesta de San Dióscoro, el Papa de Alejandría que se exilió después, a esta interferencia fue claro: "No tiene nada que ver con la Iglesia." Estos motivos políticos se hicieron aún más evidentes en Calcedonia en el año 451, cuando la Iglesia Copta fue injustamente acusada de seguir las enseñanzas de Eutiques, que creían en el monofisismo. Esta doctrina sostiene que el Señor Jesucristo tiene una sola naturaleza, la divina, no dos naturalezas, la humana y la divina (Atiya, 1991).

Fuente: www.domvob.wordpress.com



Fresco representando el Concilio de Éfeso

La Iglesia Copta nunca ha creído en el monofisismo en la forma en que fue retratado en el Concilio de Calcedonia. En este Consejo, el monofisismo significaba creer en que Jesucristo sólo tenía una naturaleza, la divina. Los Coptos creen que el Señor es perfecto en

su divinidad, y Él es perfecto en su humanidad, pero su divinidad y su humanidad se unieron en una sola naturaleza llamado "la naturaleza de la palabra encarnada", doctrina que fue reiterada por San Cirilo de Alejandría. Los Coptos, por lo tanto, creen en dos naturalezas "humana" y "divina" que se unen "sin mezcla, sin confusión y sin alteración". (Kammerer, 1975).

La Iglesia copta fue mal interpretada en el siglo quinto en el Concilio de Calcedonia. A pesar de todo, la Iglesia Copta se ha mantenido muy estricta y firme en su fe. Si se trataba de una conspiración de las Iglesias occidentales al exilio la Iglesia Copta como un castigo por su negativa a ser influenciados políticamente, o si el Papa Dióscoro no acababa de hacer un esfuerzo adicional enfatizando el hecho de que los coptos no son monofisitas, la Iglesia Copta siempre ha tenido claro que una parte de su obra es conciliar las diferencias "semánticas" entre todas las iglesias cristianas. Esto se expresa con acierto por el actual sucesor 117º de San Marcos, el Papa Shenouda III: "*Para la Iglesia Copta, la fe es más importante que cualquier otra cosa, y los demás deben saber que la semántica y terminología son de poca importancia para nosotros*" (Discurso en Alejandría, 1978) A lo largo de este siglo, la Iglesia Copta ha jugado un papel importante en el movimiento ecuménico. La Iglesia Copta es una de las fundadoras del Consejo Mundial de Iglesias. Se ha mantenido un miembro de ese consejo desde 1948 d.C. La Iglesia Copta es miembro del Consejo de Iglesias de toda África (AACC) y el Consejo de Iglesias de Oriente Medio (MECC). La Iglesia desempeña un papel importante en el movimiento cristiano mediante la realización de diálogos encaminados a resolver las diferencias teológicas con la Católica, Ortodoxa, Oriental, Presbiteriana, y las iglesias evangélicas (Kammerer, 1975).

Los estudios sobre la historia del pueblo copto en Egipto revelan que posiblemente su mayor gloria sea su cruz. Los coptos se enorgullecen de la persecución que han sufrido ya desde el año 68 d.C., cuando su patrón, San Marcos, fue asesinado el lunes de Pascua después de ser sacado a rastras de sus pies por los soldados romanos por todas las calles y callejones de Alejandría. Los coptos han sido perseguidos por casi todos los gobernantes de Egipto desde que los árabes los invadiesen en el siglo VII d.C. Sus clérigos han sido torturados y exiliados, incluso por parte de sus hermanos cristianos después del cisma de Calcedonia en el año 451 d.C. y hasta la conquista de los árabes de Egipto en el año 641 d.C. Para enfatizar su orgullo en su cruz, los coptos adoptaron un calendario, llamado el Calendario de los Mártires, que inicia su era el 29 de agosto de 284 d.C. en conmemoración de aquellos que murieron por su fe durante el imperio de Diocleciano, el emperador romano. Este calendario está todavía en uso en todo Egipto por los agricultores para realizar

un seguimiento de las distintas campañas agrícolas y en la Iglesia Copta en muchos puntos del planeta (Atiya, 1991).

2. 1 El cristianismo copto bajo la dominación musulmana

En todos los manuscritos sobre la historia de Egipto se detalla con bastante exactitud cuándo fue la conquista musulmana. Este pueblo comienza su conquista terrestre a través del Magreb y llegan a Egipto aproximadamente en el siglo VII d.C. En los cuatro siglos que siguieron a la conquista de Egipto por los árabes, la Iglesia Copta, en general, floreció y Egipto se mantuvo principalmente cristiano. Esto se debe en gran medida a la posición afortunada de la cual disfrutaron los coptos, por el Profeta del Islam, que tenía una esposa egipcia (la única de sus mujeres que tenía un hijo): "*Cuando se conquiste Egipto, se ha de ser amable con los coptos ya que son sus discípulos y parientes y amigos*". A los coptos, por lo tanto, se les permitió practicar libremente su religión y eran, en gran medida, autónomos, siempre que continuaran pagando un impuesto especial llamado "Gezya", que los califica como los protegidos "Ahl Zemma". Las personas que no pudiesen pagar este impuesto se enfrentaban con la opción de convertirse al Islam o la pérdida de su derecho civil a ser "protegidos", que en algunos casos significaba ser asesinado. A los coptos, a pesar de las leyes suntuarias adicionales que les fueron impuestas del año 750 al 868 d.C. y del 905 al 935 d.C. bajo el Dinastía abasí, prosperaron y su Iglesia disfrutó de una de sus épocas más pacífica. A lo largo de ese período, la lengua copta siguió siendo la lengua de la tierra, y no fue hasta la segunda mitad del siglo XI en el que los primeros manuscritos bilingües litúrgicos copto-árabes comenzaron a aparecer. Uno de los primeros textos completos en árabes es el texto del siglo XIII por Awlaad El-Assal, en el que se detallan las leyes, normas y tradiciones de los coptos en este momento, que resultaban ser cruciales, especialmente en todo lo relacionado con el plano cultural, 500 años después de la conquista islámica de Egipto. La adopción de la lengua árabe como el idioma utilizado en la vida cotidiana de los egipcios era tan lento que incluso en el siglo XV al-Makrizi admitía que el idioma copto todavía estaba en gran medida en el uso. Hasta este día, el idioma copto sigue siendo la lengua litúrgica de su Iglesia. (Atiya, 1991).

De acuerdo con los artículos de W. Kammerer, la cara cristiana de Egipto comenzó a cambiar a principios del segundo milenio DC, cuando los coptos, además del impuesto "Gezya", sufrieron discriminaciones específicas, algunas de las cuales eran graves e interfirieron con su libertad de culto. Por ejemplo, no había restricciones a la reparación de iglesias antiguas y la construcción de otras nuevas, en testificar en la corte, en el

comportamiento en público, en materia de adopción, sobre la herencia, sobre las actividades religiosas públicas, y en los códigos de vestimenta. Lentamente pero sin pausa, a finales del siglo XII, la cara de Egipto cambió de una mayoría cristiana a un país de mayoría musulmana y la comunidad copta pasó a ocupar una posición inferior, viviendo con cierta expectativa referente a la hostilidad musulmana, que estalló periódicamente en violencia. Es notable que el bienestar de los coptos estaba más o menos relacionado con el bienestar de sus gobernantes. En particular, los coptos sufrieron más en esos períodos cuando dinastías árabes estaban en sus momentos bajos (Cfr. 2.1.1. Ejemplos de violencia sufrida por los coptos) (Kammerer, 1975).

La posición de los coptos comenzó a mejorar a principios del siglo XIX con la estabilidad y la tolerancia de la dinastía de Muhammad Ali. La comunidad copta dejó de ser considerada por el Estado como una unidad administrativa y, hacia el año 1855, la marca principal de inferioridad copta, el impuesto "Gezya" se levantó, y poco después a los coptos se les permitió servir en el ejército egipcio. La revolución de 1919 en Egipto, la primera pantalla de base de la identidad egipcia en siglos, se erige como un testimonio de la homogeneidad de la sociedad moderna de Egipto con sus dos sectas musulmanas y coptas. Hoy en día, esta homogeneidad es lo que mantiene a la sociedad egipcia unida contra la intolerancia religiosa de los grupos extremistas, que a veces someten a los coptos a la persecución y el terror. Mártires de hoy en día, como el Padre Marcos Khalil, sirven como recordatorios del milagro de la supervivencia copta (Kammerer, 1975).

Cabe destacar que a pesar de la persecución, la Iglesia Copta como institución religiosa nunca ha sido controlada o se ha permitido a sí misma el control de los gobiernos en Egipto. Han mantenido esta posición por largo tiempo, es decir, que la Iglesia es una institución que no pertenece al gobierno y viceversa; esta separación ha permanecido como uno de los pilares de la Iglesia Copta de Egipto, la separación entre Estado y religión. Para ellos esta separación es sagrada ya que deriva de las palabras del mismo Señor Jesucristo, cuando él le pidió a sus seguidores someterse a sus gobernantes: "*Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios*". [Mateo 22:21]. La Iglesia Copta nunca se ha resistido de manera belicosa a las autoridades o invasores y nunca se alió con ningún poder, pues para todos ellos las palabras del Señor Jesucristo son claras: "Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman la espada perecerán por la espada." [Mateo 26:52]. Desde luego es un hecho que la supervivencia milagrosa de la Iglesia Copta hasta este día y edad es una prueba viviente de la validez y de la sabiduría de estas enseñanzas (Kammerer, 1975).

En la actualidad (2015) hay más de 9 millones de coptos (de una población de unos 57 millones de egipcios), que oran y comparten la comunión en misas diarias en miles de iglesias coptas en Egipto. A esto se suman a otros 1,2 millones de coptos emigrados que practican su fe en cientos de iglesias en los Estados Unidos, Canadá, Australia, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Austria, Holanda, Brasil y muchos otros países de África y Asia. No existen números exactos de la migración copta ni si quiera dentro de los archivos del Instituto Copto de El Cairo. Dentro de Egipto los coptos viven en distintas provincias y en ninguna de estas provincias son una mayoría. Sus tesoros culturales, históricos y espirituales están repartidos por todo Egipto, incluso en su más remoto oasis, el oasis de Kharga, en el desierto occidental. Como individuos, los coptos han alcanzado la un gran reconocimiento a nivel académico y profesional en todo el mundo. Una de esas personas es el Dr. Boutros Boutros-Ghali, el Sexto Secretario General de las Naciones Unidas (1992-1997). Otro es el Dr. Magdy Yacoub, uno de los cirujanos del corazón más famosos del mundo (Atiya, 1991).

2. 2 Principales características del cristianismo copto

Con respecto a sus costumbres y a sus ritos los coptos observan siete sacramentos: Bautismo, *Christmation* (Confirmación), Eucaristía, Confesión (Penitencia), Órdenes, Matrimonio, y Unción de los enfermos. El Bautismo se realiza pocas semanas después del nacimiento mediante la inmersión de todo el cuerpo del recién nacido en aguas especialmente consagradas tres veces. La confirmación se realiza inmediatamente después del Bautismo. La confesión se realiza de forma regular con un sacerdote personal, llamado el padre de la confesión y para ello es necesario recibir la Eucaristía. Es habitual que una familia entera tenga el mismo sacerdote como padre de la confesión, por lo que hace de ese sacerdote un consejero familiar. De los siete sacramentos, el matrimonio es el único que no se puede realizar durante una temporada de ayuno. La poligamia es ilegal, aunque reconocida por el derecho civil de la tierra. El divorcio no está permitido, salvo en el caso de adulterio; la anulación por bigamia u otras circunstancias extremas debe ser revisado por un consejo especial de Obispos. El divorcio puede ser solicitado por el esposo o la esposa aunque el divorcio civil no es reconocido por la Iglesia. La Iglesia Ortodoxa Copta no tiene y no le importa cualquier derecho civil de la tierra, siempre y cuando no interfiera con los sacramentos de la Iglesia. La Iglesia no tiene una posición oficial respecto a determinados temas polémicos (por ejemplo el aborto). Mientras que la iglesia tiene enseñanzas claras acerca de tales asuntos (el aborto interfiere con la voluntad de Dios), la posición de la Iglesia Copta es que tales asuntos se resuelvan caso por caso, estudiando cada uno de ellos por el

padre de confesión de la persona que tiene dicho dilema, en lugar de tener un canon establecido, ya que hace de este tipo de prácticas un pecado. Esto hace que sea una de las grandes diferencias con la doctrina del resto de las iglesias cristianas (Kammerer, 1975).

Hay tres liturgias principales de la Iglesia Copta: La Liturgia según San Basilio; La Liturgia según San Gregorio Nacianceno; y La Liturgia según San Cirilo I, el 24º de Papa de la Iglesia Copta. La mayor parte de la liturgia de San Cirilo es la utilizaba San Marcos (en griego clásico) cuando cristianizó Egipto en el siglo I d.C. Fue memorizado por los obispos y sacerdotes de la iglesia hasta que fue traducida a la lengua copta de San Cirilo. Hoy en día, estas tres liturgias, con algunas secciones adicionales (como pueden ser las intercesiones), se encuentran todavía en uso. De las tres, la Liturgia de San Basilio es la que con mayor frecuencia se utiliza en la Iglesia Ortodoxa Copta (Kammerer, 1975).

La adoración de los Santos está expresamente prohibida por la Iglesia. Sin embargo, la intervención de los santos es central en cualquier servicio copto (lo que a priori puede resultar una contracción). Cualquier iglesia copta lleva el nombre de un santo patrón. Entre todos los santos, la Virgen Santa María (Theotokos) ocupa un lugar especial en el corazón de todos los coptos. Sus apariciones diarias repetidas en una pequeña iglesia en el distrito Elzaytoun de El Cairo durante más de un mes en abril de 1968 fue presenciado por miles de egipcios, tanto coptos y musulmanes e incluso fue transmitido en la televisión internacional, dato considerado importante para la Iglesia Copta registrado por el profesor Atiya. Los coptos celebran siete fiestas sagradas principales y siete fiestas santas menores. Las principales fiestas conmemoran La Anunciación, Navidad, Epifanía, El Domingo de Ramos, Pascua, Ascensión y Pentecostés. La Navidad se celebra el 7 de enero. La Iglesia Copta hace hincapié en la Resurrección de Cristo (Pascua) tanto como su Adviento (Navidad). Pascua es, por lo general, el segundo domingo después de la primera luna llena de primavera. El calendario copto de los Mártires está lleno de otras fiestas que, generalmente, conmemoran el martirio de los santos más populares (por ejemplo, San Marcos, Santa Mina, San Jorge, Santa Bárbara) de la Historia copta (Atiya, 1991).

Los coptos tienen temporadas de ayuno más duraderas que cualquier otra comunidad cristiana. Durante el ayuno, los productos de origen animal (carne, pollo, pescado, leche, huevos, mantequilla, etc.) no están permitidos, así como del amanecer al anochecer se impone el ayuno. Estas reglas de ayuno estricto, por lo general, se matiza por parte de los sacerdotes de forma individual para dar cabida a una enfermedad o debilidad. Cuaresma, conocido como "el Gran Ayuno", se inicia con un breve período previo a la de una semana, seguido de un 40 días en los que se conmemora el ayuno de Cristo en la montaña,

seguido de la Semana Santa, la semana más sagrada (llamada Pascha) del calendario copto, que culmina con el Crucifijo del Viernes Santo y termina con la Pascua Alegre. Otras temporadas de ayuno de la Iglesia Copta incluyen, el Adviento, el Ayuno de los Apóstoles, el Ayuno de la Virgen Santa María y el ayuno de Nínive (Atiya, 1991).

El clero de la Iglesia Ortodoxa Copta está encabezado por el Papa de Alejandría e incluye Obispos que supervisan a los sacerdotes ordenados en sus diócesis. Tanto el Papa y los obispos deben ser monjes; todos ellos son miembros de la Copta Ortodoxa Santo Sínodo (Consejo), que se reúne regularmente para supervisar los asuntos de fe y de la pastoral de la Iglesia. El Papa de la Iglesia Copta, aunque muy respetado por todos los coptos, no goza de ningún estado de supremacía o infalibilidad. Hoy en día hay más de 60 obispos coptos que rigen las diócesis dentro y fuera de Egipto, así como en Jerusalén, Sudán, África Occidental, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. La responsabilidad pastoral directa de congregaciones coptas en cualquiera de estas diócesis recae sobre sacerdotes, que deben estar casados así como el deber de asistir a la escuela catequética antes de ser ordenados (Atiya, 1991).

Hay otros dos organismos no administrativos que participan en el cuidado de los asuntos de la Iglesia. El primero es el *Coptic Orthodox Lay Council*, popularmente electo, que apareció en el escenario en 1883 para actuar como enlace entre la Iglesia y el Gobierno. El segundo es un comité laico-clerical conjunto, que apareció en el escenario en 1928 para supervisar y controlar la gestión de las dotaciones de la Iglesia copta de acuerdo con las leyes egipcias. Toda esta información está registrada por el profesor Aziz S. Atiya en sus artículos como en la *Claremont Coptic Encyclopedia* (Atiya, 1991).

Todos los teólogos coinciden en el siguiente punto: todos los días, en todas las iglesias coptas de todo el mundo, los coptos, oran por la reunión de todas las iglesias cristianas. Rezan por Egipto, su Nilo, sus cultivos, su presidente, su ejército, su gobierno, y sobre todo su gente. Ellos oran por la paz del mundo y para el bienestar de la raza humana (Kammerer, 1975).

Fuente: *A Coptic Bibliography*



Representación del Nacimiento de Jesús según la Iglesia Copta

2.3 Ejemplos de violencia sufridos por los Coptos

< *Une religion qui tue est une religion malade* >

< Una religión que mata es una religión enferma >

Abdennour Bidar

Podemos encontrar a lo largo de la historia cientos de incidentes entre los cristianos coptos y los musulmanes. Si nos remitimos al último siglo, encontramos ejemplos sobrecogedores, muchos de los cuales ni si quieran han llegado a Europa y Occidente y de los cuales la Comunidad Internacional se ha inhibido completamente.

Las fuentes de las que disponemos nos pueden ofrecer datos fidedignos sobre los ataques sufridos por los coptos desde la década de los setenta (citado a través de Chaillot, 2011: 79). Aun así, las diversas fuentes consultadas afirman que los sujetos de estos ataques pueden ser de diversa clase, es decir, los atentados no van dirigidos a un grupo concreto dentro de la población copta.

Entre 1972 y 2003 se registraron más de doscientos cuarenta ataques a la comunidad copta en la más de cuatro mil de ellos fueron heridos o asesinados. (Chaillot, 2011: 79). Contamos con datos estadísticos que revelan que entre los años 1993 y 1997 los atentados se intensificaron, se volvieron más violentos en su mayoría, así como la mayor parte de ellos sucedieron en el alto Egipto (Chaillot, 2011: 80). Según Youssef Sidhom, responsable de la publicación semanal copta *Watani* (a través de Chaillot, 2011: 80), los ataques volvieron a ser especialmente cruentos entre los años 2008 y 2010 (a través de Chaillot, 2011: 80).

Es muy importante hacer constar que esta violencia, pese a sufrirla la comunidad en su totalidad en todo Egipto, puede verse acrecentada dependiendo de los gobernadores de las distintas regiones del país. Pese a verse vista invadida su tierra, su religión y su cultura, el pueblo copto nunca ha actuado en contra de sus gobernantes a excepción de la revolución de 1919, en la cual exigían ser egipcios de propios derecho, no de segunda clase.

De acuerdo con un informe de la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales (EIPR), una ONG egipcia con buena reputación, calcula que se produjo una elevada violencia sectaria bajo el mandato del gobernador Minya; con un porcentaje mucho más elevado que otras regiones al cargo de otros gobernadores. De acuerdo con los datos proporcionados por esta ONG los casos de violencia contra los coptos entre 2008 y 2009 aumentaban diariamente. Contamos, asimismo, con un informe del año 2008 de Amnistía Internacional en la que se detallaba que en el año citado el número de ataques sufridos por la población copta en Egipto se elevó por encima de años anteriores.

Con respecto a la información anterior, existen otras muchas fuentes de información que tratan este tema como El Comité Nacional para Combatir la Violencia Sectaria en el Cairo, informes de la Libertad Religiosa Internacional EEUU y una publicación en inglés hecha en El Cairo titulada *L'Arab West Report*. De acuerdo con ciertos análisis, durante la década de 1970 se conoció una elevada cantidad de atentados sectarios contra los coptos, con el desarrollo de movimientos islámicos. Contemplamos que se desarrollan en esta época los ataques por parte de grupos a la comunidad cristiana copta.

Entre 1977 y 1980 se han dado ataques a la comunidad copta, en algunos casos armados y de gran violencia: se asesinó a coptos quemando iglesias en el Cairo. En Alejandría y otras partes de Egipto. En 1980, en Alejandría, se tiró una bomba en la iglesia de San Jorge el 6 de enero durante la liturgia ante Navidad y otra explotó en manos de los terroristas que iniciaron el ataque previamente mencionado.

En el año 1981 se cometió el asesinato de Sadat, que como consecuencia trajo consigo una elevada cantidad de atentado por parte de los musulmanes hacia otras comunidades religiosas o diferentes confesiones. Parece ser que a los extremistas este asesinato les dio el motivo que necesitaban para llevar a cabo sus planes contra la comunidad cristiana copta en particular y cualquier otra confesión religiosa en general. Tras esta serie de atentados en disturbios se acusó al Papa Shenouda III, de manera errónea, de incitar al secesionismo de Egipto con la creación de un estado copto en la parte que fue antiguamente el Alto Egipto. Un día antes de su muerte, A. Sadat retiró a este Papa de sus

funciones y fue condenado a vivir en la soledad completa el resto de sus días. La década de los años 80, por tanto fue muy convulsa desde sus comienzos¹ ya que tras el asesinato del presidente Sadat las muestras de violencia, aunque con pausas y distinta intensidad dependiendo de la región, fueron muy intensas.

Con respecto a la década de los 90² la violencia por parte de grupos musulmanes extremistas se incrementó fuertemente, pues tenía la ventaja de verse fuertemente armados. Durante esta década los atentados se sucedieron por parte de estos grupos en el sur de Egipto, exigían que los cristianos coptos volviesen a pagar el impuesto “Gezya” bajo pena de muerte. Se cometieron incendios en iglesias coptas así como otra serie de atentados en comercios regentados y propiedad de cristianos coptos. Sin embargo hay que tener en cuenta que aunque los coptos eran una minoría en El Cairo su religión poseía 21 iglesias en la capital. A lo largo de esta década los incidentes violentos serán la por todo el país asesinando y mutilando a cristiano coptos por su confesión. Los más graves sucedieron en 1992³, en 1994 (con la quema de un monasterio)⁴, par de en 1995 pues varios copto se negaron a pagar el impuesto especial *Gezya*, en 1997 en la ciudad de Al-Frikiya y en 1998 en la ciudad de Al-Kosh, de mayoría copta, fueron asesinados dos cristianos.

Durante de los años 2000, la violencia ha seguido intensificándose en todas partes del país, siendo ésta mucho más cruenta y a mayor escala, dado que los grupos extremistas dentro de Egipto cuentan cada vez con mayor número de seguidores y con armas más modernas para llevar a cabo ataques y atentados. Por ello, aunque durante este nuevo siglo los coptos siguen tratado de ser una parte de la sociedad moderna egipcia, se han dado una gran cantidad de diásporas (especialmente a países angloparlantes) por parte de este colectivo (Cfr. 2.1.3 Diásporas a lo largo de la Historia de los coptos).

Por supuesto, cabe destacar entre los disturbios más recientes todos los cometidos durante la PRIMAVERA ÁRABE, aunque siendo estrictamente fieles a los hechos, los coptos, aunque afectados, también muchas personas de religión musulmana tuvo incidentes durante este periodo de reivindicaciones y cambios de gobierno. Lo más importante a tener en cuenta con respecto a este hecho histórico es que los coptos no lo iniciaron ni lo llevaron a cabo aunque como hemos dicho se han visto afectados por los disturbios presenciados por el mundo a lo largo y ancho de Egipto.

¹ Consultar en: http://www.paginasdigital.es/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=2156&te=17&idage=4087&vap=0

² Consultar noticias en: <http://web.eldia.es/internacional/2010-01-08/1-Asesinados-cristianos-egipcios-celebracion-Navidad-copta.htm>

³ Consultado en: http://elpais.com/diario/2011/01/02/internacional/1293922807_850215.html

⁴ Consultado en: http://elpais.com/diario/1994/03/13/internacional/763513212_850215.html

Fuente: www.jihadwatch.org



Fuente: actualidad.rt.com



Protestas por la defensa de la religión copta y ataque a una iglesia de esta misma religión

2. 4 Problemas principales de los coptos en Egipto

< *De nos jours, tout est religieux: les libres à l'école, les médias >*

< En nuestro tiempo todo es religioso: desde los libros a la escuela y los medios de comunicación >

Youssed Sidhom

< *On peut manifester une tolérance, par charité ou par amour de la paix, lorsque quelqu'un attaque nos droits individuels (Haq Khas). Mais pour ce qui est de droits collectifs, on n'y peut rien car ils ne nous concernent pas personnellement. Ils concernent la société tout entière, c'est pourquoi on doit agir pour que le fort ne dévore pas le faible >*

< Podemos mostrar tolerancia, caridad o amor por la paz, cuando alguien ataque nuestro derecho individual (*Haq Khas*). Pero en términos de derechos colectivos, nada se puede hacer, ya que no nos conciernen personalmente. Se refieren a toda la sociedad, y es por eso que debemos actuar para que el fuerte no devore a los débiles >

Papa Shenouda III

Pese a los ataques sufridos por parte de la comunidad cristiana copta en Egipto, se siguen tomando medidas cada día para tratar de reestablecer la paz entre ambas comunidades religiosas.

Estas medidas se traducen en conversaciones constantes entre los representantes de las dos comunidades junto con representantes del gobierno egipcio. Una de las medidas que se tomó, por ejemplo, fue escoger la celebración de la navidad ortodoxa, el 7 de enero, para la celebración de una fiesta nacional en 2003. A partir de 2011 esta fecha ha sido reconocida como fiesta nacional por el gobierno del país.

El problema principal para la práctica del culto de los cristianos coptos ha sido la imparable islamización de Egipto y llevar esta islamización hacia sus extremos más radicales, especialmente desde la década de 1990. Por ley, en Egipto, los coptos tienen derecho a ir libremente a la iglesia y a practicar su religión; no obstante sus quejas van en aumento por vejaciones diarias, insultos, atentados e incluso muertes.

Los problemas diarios a los que se enfrentan los cristianos coptos no son diferentes a los de otras minorías en el mundo: discriminación, problemas para encontrar un puesto de trabajo, problemas para su reconocimiento y ascenso profesional, para poder educar a sus hijos dentro de su religión, etc.

Lo que respecta a los problemas profesionales de los coptos se denunció por un informe que apareció en una edición de *Le Figaro* en 2007, publicado por la Oficina Internacional de Trabajo, *Discrimination at Work in the Middle East and North Africa*, (citado a través de Chaillot, 2011) señala que los coptos a penas se encuentran en puestos de responsabilidad: no es fácil que puedan llegar a tener un puesto en el Senado o en la cúpula del gobierno; las escuelas militares y de policía se siguen mostrando reticentes a aceptar cristianos coptos entre sus filas y es tremadamente complicado que alguno de ellos pueda llegar a ser profesor universitario. Claramente se encuentran excluidos de los puestos clave del país.

Esta exclusión y discriminación hacia la comunidad copta, no es sino otra forma de violencia, aunque denominada “violencia silenciosa”. En el epígrafe anterior hablábamos de los atentados y ataques que ha sufrido el pueblo copto principalmente desde los años 70; en cuanto a los problemas principales que sufren en Egipto (como si los atentados contra familias y comunidades enteras y las muertes de sus hermanos de confesión no fueran suficiente) son claramente los de cualquier minoría del mundo en un país con una religión

mayoritaria distinta (puede ser un caso religioso o de valores políticos, pero ese es otro tema que no se tratará en este trabajo): la negación de puestos de trabajo de responsabilidad, poder educarse con la misma calidad que cualquier otro egipcio sin tener por ello que dejar de profesar su fe, derecho a hacer una carrera universitaria con las mismas oportunidades que el resto, etc.

Podemos observar ejemplos de casos concretos. Por ejemplo en el terreno financiero, prácticamente en ninguna ocasión en caso de ataque a algún establecimiento regentado por coptos se obtiene una compensación económica por parte de los damnificados. Generalmente el gobierno siempre encuentra una excusa para apoyar el ataque sufrido y denegar, así, la ayuda que tanto necesita este pueblo. Otro ejemplo, dentro del terreno de la sanidad, es que desde 2008 y de acuerdo con un informe ratificado por la Orden de Médicos prohíbe realizar implantes a personas con distinta religión (citado a través de Chaillot, 2011)

Por supuesto, los problemas que tienen que ver con el terreno religioso siguen siendo importante y complejos. La construcción de iglesias cristianas coptas en Egipto es un asunto complicado. Dependiendo de la región se necesita una orden gubernamental u otra serie de trámites burocráticos nada sencillos de conseguir; en algunos casos los gobernadores de estas regiones ni consiguiendo dichos trámites se avienen a la construcción de los templos. En lo que se refiere a los terrenos pertenecientes a la iglesia y a los monasterios cristianos nos encontramos que suceden los mismos problemas.

Durante el régimen de Mubarak la libertad de expresión así como la libertad de prensa estaban controladas. Egipto es una república pero la minoría copta siempre ha sufrido discriminaciones desde la llegada de los árabes hasta nuestros días. Esto quedaba patente en las páginas web, blogs, prensa y cadenas de televisión controladas por el gobierno del país.

Otro gran problema que se plantea para la religión cristiana es la imposibilidad de un musulmán a cambiar de religión, bajo pena de apostasía, de acuerdo con el artículo 98 (f) del Código Penal. El tema de la religión dentro de la República de Egipto sigue siendo uno de los temas más espinosos. A partir de 2011 la Corte Suprema de Justicia decreta que los musulmanes de origen copto que quieran retomar su religión son libres de hacerlo (Chaillot, 2011). No obstante, esto no les garantiza que no vayan a sufrir discriminaciones por parte del pueblo musulmán por haber pertenecido en un momento de su vida a esta citada

condición. En el caso de que una persona de fe cristiana decida casarse con una persona de fe musulmana, pasará a abrazar su religión, así como toda su descendencia.

En los ejemplos que hemos presentado, observamos claramente cómo la supremacía musulmana pervive por encima de la minoría cristiana. Además de todo esto hemos de añadir a los ejemplos de corrupción dentro del sistema burocrático y de otras instituciones del país. Todo ello conlleva, con ejemplos claros dentro de los gobiernos musulmanes de Egipto, a favorecer a la mayoría que profesa el Islam en detrimento del pueblo copto.

2. 5 Diásporas a lo largo de la Historia de los coptos

< Nous devons montrer que nous servons l'Égypte, que nous ne sommes pas des inconnus, des étrangers, et que nous n'essayons pas toujours de quitter le pays >

< Debemos mostrar que servimos a Egipto, que no somos unos desconocidos ni extranjeros y que nunca trataremos de dejar este país >

Angèle Boutros Sama'an

< Il ne faut pas garder silencieux l'appel au secours pour l'équité >

< No debemos mantener un grito silencioso de ayuda para la equidad >

Michael Meunier,

Presidente de la Asociación Copta de los Estados Unidos

Pese a que este término se ha utilizado generalmente con el pueblo judío y el gitano, es vital tener en cuenta que existen otros muchos pueblos y etnias que se han visto obligados a abandonar sus países por los conflictos acaecidos con la población mayoritaria.

El pueblo copto, en su conjunto, no había sufrido diásporas destacables hasta el año 1953, año de la revolución, en el que cristianos coptos comienzan a abandonar el país dependiendo de sus posibilidades económicas (aquellos que tenía una mejor posición o un negocio más floreciente siempre lo tuvo más fácil que aquellos con menos recursos).

Aunque llevan emigrando en grupos importantes desde hace más de medio siglo, esta migración se ha visto intensificada desde los atentados en Alejandría en 2011 y con el ascenso del islamismo radical dentro de Egipto. En 2009, en un discurso realizado en El Cairo por el presidente Obama⁵, se nombró la persecución de las minorías y los problemas que tienen parecer en sus lugares de origen frente a represalias por su etnia o confesión. La iglesia copta, por su parte, a modo de respuesta, no ve otra solución que la resistencia pacífica a los intentos de agresión por parte de la etnia mayoritaria de Egipto que la resistencia pacífica para poder conservar sus hogares así como su fe.

El pueblo copto es consciente que desde su exilio pueden hacer bien poco para presionar a los gobiernos de Egipto en pos de mejorar la situación política, social y económica de su pueblo dentro del país. Sin embargo, ahora nos encontramos dentro de una era de revolución tecnológica que, al menos, ayuda a través de internet, las redes sociales y los medios de comunicación a elevar esa queja y esa preocupación para que el resto del mundo seamos conscientes de lo que realmente está ocurriendo en Egipto.

Desde los Estados Unidos, donde un gran número de comunidades coptas se han instalado desde la década de los 50 (existen iglesias ortodoxas coptas en prácticamente todos los estados, aunque podemos citar las más importantes o las que reciben un mayor número de feligreses: Arizona, Florida, Ohio, Tennessee o Georgia), se publican semanarios, periódicos y noticias a través de internet para poder hacer llevar al mayor número de personas posible la situación que vive la comunidad copta en Egipto con la imparable crecida del radicalismo musulmán. Estas publicaciones son más numerosas por parte de la Iglesia Ortodoxa Copta de Estados Unidos. Ya en 1981 comenzaba a elevar su preocupación por la situación que vivía la comunidad copta en Egipto.

No se cuentan con estadísticas exactas del número de cristianos que han abandonado Egipto desde la década de los 50, sin embargo es menester remarcar la idea de que el número ha ido aumento con el paso de los años. Las comunidades coptas más numerosas se asientan en Estados Unidos, Canadá y Australia, donde cuentan con iglesias y guías espirituales para poder llevar a cabo sus ritos religiosos. Muchas de estas personas, con cierto poder y renombre dentro de la comunidad copta dentro del exilio han tratado de alzar la voz de alarma para que la comunidad internacional sea consciente de lo que está pasando en Egipto y cómo cada vez más cristianos se ven obligados a dejar el país, a veces sin ser posible llevarse a todos los miembros de sus familias y por supuesto dejando atrás sus negocios y todo aquello por lo que habían trabajado familias enteras y a los negocios a los

⁵ Encontramos este discurso en: <http://www.washingtonpost.com/>

que habían dedicado sus vidas y ahorros; es decir, sin la ayuda de estas comunidades en países extranjeros muchos de los cristianos que se han visto obligados a abandonar su país de origen se verían en la más absoluta pobreza, desprotegidos y de nuevo siendo una minoría.

Gracias a obispos coptos, especialmente en Estados Unidos (en Ohio concretamente) donde se ha establecido una comunidad copta importante la desprotección a los recién llegados sería prácticamente inexistente.

Hoy en día todavía quedan alrededor de 9 millones de cristianos coptos en Egipto que siguen luchando por sus derechos y libertad para practicar su religión a través de manifestaciones y resistencia pacífica. Sin embargo, la situación para ellos, debido al avance del Estado Islámico, se hace cada vez más peligrosa e insostenible. Seguimos observando con cifras poco exactas la dispersión por todo el mundo de esta comunidad y, desafortunadamente, parece que esta tendencia va a continuar, sobre todo entre aquellas que tengan la posibilidad de ponerse a salvo en una país donde se respete su culto y su libertad religiosa, como son aquellos países donde han sido bien recibidos y ya hay comunidades cristianas coptas organizadas.

III. EGIPTO, DESDE EL SIGLO XIX HASTA NUESTROS DÍAS

3.1 Sociedad y Economía

De acuerdo con el historiador Afaf Lutfi al-Sayyid Marsot, la diferencia en la política extranjera (fundamentalmente con Israel) entre Nasser y Sadat fue apreciada desde un primer momento por todos los ciudadanos del país. La nueva administración, encabezada por el nuevo presidente consideraba que era necesario volver la mirada a Occidente para mejorar su situación, en ese momento bastante delicado. Dentro de las opciones, la más importante a ojos del presidente, era considerar una alianza con los Estados Unidos, para intentar que el gobierno de este país presionase a los israelíes para evitar la ocupación de territorios árabes. De este conflicto, los cairotas inventaron una historia que reflejaba de manera muy gráfica este cambio: *“La historia cuenta que el primer día de mandato Sadat iba en la limusina presidencial, esperó hasta que el coche alcanzara un cruce y preguntó al chofer: «Llegados a este punto, ¿qué camino tomaba el rai's?» «Torcía a la izquierda», fue la respuesta. «Pues indica con el intermitente hacia la izquierda y gira a la derecha», dijo Sadat”*. El pueblo no perdió su ironía como lo demuestra el hecho siguiente: a los pocos meses, cuando las conversaciones (para el desalojo de Israel del Sinaí) parecían no llegar a ninguna parte,

Sadat decidió salir del punto muerto con una invasión limitada del Sinaí, lo cual para él significaba un punto de presión para el desalojo de estas tierras a la par que conduciría a una negociación (la cual, esperaba, tendría como consecuencia la evacuación de las tierras ocupadas); en 1971 anunció al pueblo que ése era el año de tomar decisiones. A medida que el año avanzaba y no había resultados claros, el pueblo de nuevo se tomó sus afirmaciones a burla: *“que el nuevo “mis” había cambiado el calendario y doblado o triplicado los días del año”* (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

Sadat celebró una cumbre con el rey Hussein de Jordania y con el presidente sirio Hafiz al-Assad. Allí acordaron tomar medidas contra Israel. Desde ese momento, los oficiales egipcios y sirios planearon lanzar un ataque coordinado contra Israel con el fin de recuperar los territorios ocupados. Los saudíes habían proporcionado el dinero para rearmar sus ejércitos y los rusos les proporcionaron misiles tierra-aire; y, lo que era más importante, el personal soviético entrenó al ejército egipcio en el uso de las armas y sus pilotos tripularon los aviones que detuvieron las incursiones israelíes en Egipto. Sin embargo, y “sin razón aparente” (más bien podríamos decir sin razón conocida por el pueblo), en julio de 1972, Sadat anunció que había pedido a todo el personal soviético que abandonara Egipto. Esto resultó ser una debacle para el ejército, ya que si bien los rusos no eran demasiado populares, necesitaban su tecnología y su preparación para tener éxito en los próximos ataques que planeaban contra Israel. A este hecho se sumaba que al dejar Egipto, los soviéticos se llevaron consigo el equipo electrónico de vigilancia y de intercepción de telecomunicaciones, ambos vitales para Egipto y su voluntad de terminar con el avance israelí (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

Las razones de Sadat, desconocidas por su pueblo, eran fundamentalmente contar con el apoyo americano. Esperaba que expulsando a los soviéticos conseguiría que el gobierno americano se prestase a concederles los medios y la ayuda necesaria para evitar un conflicto armado con Israel. Cuando el gobierno americano le negó dicha ayuda, como esperaba el gobierno egipcio, Sadat tuvo que retomar su plan original de librarse una guerra limitada. El resto del año se empleó en mejorar las relaciones con los soviéticos, o al menos de retomar relaciones diplomáticas perdidas a causa de la súbita decisión del presidente de Egipto, con la intención de que éstos siguieran proporcionando al país las armas que necesitaban (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

En el año 1973, la época de Ramadán, el mes sagrado de los musulmanes en el que se practica el ayuno desde el amanecer al anochecer, coincidió con la fiesta judía del Día de la Expiación (el Yom Kippur), los israelíes, convencidos de la imposibilidad de Egipto de una

victoria en un ataque, se sorprendieron ante un ataque simultáneo de las fuerzas egipcias y sirias invadiendo las posiciones israelíes con una victoria por parte de las fuerzas árabes en este ataque relámpago. Tras el ataque las fuerzas invasoras se dispersaron y, los altos mandos israelíes llegaron a pedir a su gobierno la rendición (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

Aunque dicho ataque acabó con el mito de la imbatibilidad israelí, no supuso la victoria de los árabes, ya que una parte de las fuerzas israelíes atravesaron las líneas egipcias y rodearon al Tercer Ejército. Las dos potencias árabes transportaron por avión armas para Egipto, mientras, dieciséis días después de que se hubieran desatado las hostilidades, las Naciones Unidas decretaban un alto el fuego el 22 de octubre. Los israelíes hicieron caso omiso del decreto del alto el fuego, ya que seguían con la firme intención de terminar con dicho conflicto con su victoria militar. No obstante, los árabes consiguieron la victoria simbólica de atravesar Suez y tomaron la línea Bar Lev, y eso demostraba que estaban alcanzando a Israel tanto desde el punto de vista militar como del tecnológico. Este hecho hizo que las fuerzas militares israelíes se cuestionasen si cabía la posibilidad de perder el siguiente asalto (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

Más adelante, algunos generales egipcios acusaron a Sadat de haberles impedido aprovechar la ventaja militar inicial que habían conseguido respecto a Israel; algunos incluso creían que Sadat había pactado con el gobierno americano que se mantendría a cierta distancia del Sinaí, ya que con esto pretendía demostrar al ejecutivo americano (aliado natural de Israel) que deseaba acabar con el punto muerto al que habían llegado y que no tenía intención de destruir Israel; pero también había quien pensaba que el avance egipcio se detuvo cuando Israel amenazó con lanzar un ataque nuclear contra la Gran Presa (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

A pesar de todo, los árabes terminaron esta guerra con un sentimiento de satisfacción. Los estados árabes productores de petróleo habían impuesto un embargo del crudo que, pese a no tener un impacto grave en los países occidentales ni causar un daño considerable en el abastecimiento de petróleo, se consideró por parte de las compañías petrolíferas como un problema grave. Lo que más daño hizo a las economías occidentales y orientales fue el subsiguiente incremento del precio del petróleo, iniciado por el Sha de Persia, que continuó con el aumento de precio del crudo por el resto de los principales países árabes productores de petróleo. Miles de millones de petrodólares fluyeron hacia los países productores de petróleo y, en consecuencia, el Sha pudo comprar armas y equipo

para poder desempeñar su papel de policía de la zona. Los países árabes productores de petróleo también comenzaron a comprar armas (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

Tras la guerra, la imagen de Sadat dentro de Egipto y del mundo árabe cambió; empezó a ser tratado con respeto y a ser considerado un líder destacado. Quedó atrás la primera impresión que había causado, que Sadat no estaba destinado a ser un gran gobernante y a partir de dicho conflicto se había convertido en un “*mis*” por propio derecho (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

Aunque la guerra de 1973 acabó en un punto muerto en el que se encontraba Egipto con Israel, no permitió la recuperación del Sinaí, ni mucho menos la resolución del problema palestino, otro de los objetivos declarados de la guerra. En 1974 se llevó a cabo la firma de un acuerdo: los israelíes se retiraron a unos cuantos kilómetros al este de Suez y de una parte de los Altos del Golán, arrasando la ciudad de Qunaitra antes de devolvérsela a los sirios. Sadat se unió a los americanos y afirmó repetidas veces que ellos tenían prácticamente la totalidad de posibilidades de conseguir la paz. Renunció al tratado de amistad que había firmado con los soviéticos, que dejaron de proporcionarle armas o componentes de repuesto. El arsenal de armas del ejército egipcio se fue deteriorando progresivamente, ya que los americanos todavía no les habían proporcionado armas; esto sólo ocurriría tras los acuerdos de Camp David (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

Con respecto a la economía, el ascenso al poder de Sadat también fue significativo para el país. Se notó mucho en la vida civil, ya que se produjeron importantes cambios sociales. El nuevo presidente tenía muy claro que para la recuperación del país era necesario transformar la economía del país para acercarse de una forma más cercana al capitalismo. Esta tendencia ya había comenzado durante los últimos días de gobierno de Nasser y Sadat aceleró su implantación. Aunque se conservó el sector público, poco a poco se fue reduciendo a favor de la empresa privada, ya que sus seguidores, o al menos en su mayoría, pertenecían a la burguesía, mientras que los seguidores de Nasser eran principalmente personas pertenecientes a la clase obrera y a la clase intelectual. La burguesía estaba decidida a expandir la empresa privada y no tardó en desarrollarse un amplio grupo de empresarios e intermediarios. El gobierno y la nueva élite empresarial albergaban la esperanza de atraer el capital y la tecnología occidentales, aunque, desafortunadamente para ellos y la economía del país, fracasaron estrepitosamente. Esto resultaba interesante para esta nueva clase, pues con ello pretendían aliarse con los países árabes de elevado capital y, junto con la mano de obra egipcia que resultaba muy barata, mejorar la situación económica del país. El principal temor de inversores extranjeros para

depositar su capital en Egipto se debía a la posibilidad de una nueva invasión por parte de Israel, por lo que los empresarios egipcios no lograron llevar a cabo este cometido. Algunos países árabes invirtieron fondos en Egipto para construir edificios de apartamentos de lujo, pero no era una inversión demasiado productiva y se centraba en un sector muy concreto; generó muy poco empleo fijo y provocó que se disparara la inflación. El régimen pensaba que, en cuanto la paz llegara a Egipto, el país se convertiría en un paraíso para las corporaciones multinacionales como ya lo habían sido Taiwán, Singapur y Corea del Sur. Por tanto, se podía decir que Sadat había iniciado la Guerra de Octubre con el propósito de que Egipto fuera un país seguro y capaz de llevar a cabo una política económica de *infītah* («puertas abiertas»), como reacción a la política proteccionista de puertas cerradas que caracterizó al anterior gobierno (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

Mientras tanto, la deuda exterior de Egipto continuaba ascendiendo y el país no era capaz de afrontar el pago de los intereses. Una parte importante de la ayuda extranjera, procedente de los Estados Unidos, se empleó para pagar los subsidios, principalmente en bancos de alimentos, lo cual supuso que quedase muy poco dinero para invertirlo en proyectos a medio y largo plazo (por supuesto, nada en investigación y desarrollo) para que éstos pudiesen ayudar a la recuperación económica de la nación. El Fondo Monetario Internacional le sugirió al gobierno egipcio que acabara con los subsidios para poder emplear los fondos recibidos en proyectos, según su criterio, más provechosos para la nación. En enero de 1977, el gobierno anunció que dejaría de pagar los subsidios. Esto provocó una inquietud creciente entre el pueblo, por miedo al hambre y las consecuencias que la escasez de alimentos podría acarrear; por ello los disturbios para conseguir alimentos no tardaron en producirse, en primer lugar en El Cairo y más tarde en el resto del país. Estos disturbios no se limitaron a la pelea por conseguir algo que comer, sino que el pueblo comenzó a quemar clubes (una ostentación y signo para ellos de la riqueza extranjera), coches de lujo y se manifestó de forma salvaje (e ilegal) contra el mandato presidencial de Sadat. Para sofocar las revueltas no hubo más remedio que sacar el ejército. Todos estos incidentes, unidos a otros acontecimientos, convencieron a Sadat de que no tenía más remedio que tomar medidas más radicales; no tenía otra alternativa salvo acudir a Jerusalén y negociar con Begin y con el gabinete israelí para encontrar la manera de salir del atolladero en el que se encontraba (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

La visita a Jerusalén fue una sorpresa para el mundo entero, que alabó el valor y la sabiduría de Sadat por haber dado un paso tan importante. Para sus conciudadanos, en cambio, la visita se justificó como una medida imprescindible que había que tomar antes de

poder establecer la paz y la prosperidad. No todos en Egipto tenían claro que dicha reunión fuese a dar sus frutos (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

Finalmente y tras meses de negociaciones, en 1978 llegó la paz con Israel. El pueblo de Egipto, especialmente en El Cairo, la acogieron con gran entusiasmo, puesto que la guerra con Israel los había agotado física y económica; los ataques y contraataques con Israel parecieron no tener fin. Como en todas las guerras a lo largo de la historia, el pueblo egipcio en su totalidad se había visto afectado por una u otra guerra, la pérdida de algún familia en prácticamente cada una de las familias del país había sido uno de los resultados de la misma. A la visita a Jerusalén le siguieron los acuerdos de Camp David, firmados en septiembre de 1978. Estos acuerdos separaron a Egipto del mundo árabe, lo cual resulta sorprendente teniendo en cuenta el apoyo de Sadat a la burguesía egipcia (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

El resto de los países árabes esperaban el resultado de la visita a Jerusalén, porque pensaban que Sadat realmente estaba negociando una paz para todos, pero Camp David demostró que lo que en realidad le preocupaba era recuperar el Sinaí, y lo único que había estado haciendo era llegar a acuerdos para conseguir una paz individual; cuando esto se supo en el resto del mundo árabe Egipto quedó relegado y La Liga Árabe le condenó al ostracismo, rompiéndose sus relaciones con el resto de esos países, incluso hubo egipcios que pensaron que se había pagado un precio demasiado alto por apenas “unas migajas” (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

El deseo de Sadat de recuperar el Sinaí era tal que las concesiones a los israelíes fueron realmente importantes (especialmente las cláusulas que fijaban el intercambio de embajadores y la «normalización» de las relaciones entre los dos países), pero su pueblo no lo entendía, y desaprobaron las cláusulas que concernían a los palestinos, que encañaban más el problema en lugar de resolverlo, y no veían la razón de tanta precipitación y de tanta generosidad por parte Egipto, que había conseguido un tratado que les apartaba de hostilidades, pero que también les apartaba del resto del mundo árabe, que además quedó mucho más debilitado, pues con Egipto había perdido su principal fuerza de combate, y que desde entonces, los israelíes se volvieron más intransigentes y beligerantes hacia los demás estados árabes y hacia los habitantes de Cisjordania y más “amables y comprensivos” con los egipcios (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

Gracias a los acuerdos el turismo empezó a llegar a Egipto en forma masiva, recibía a diario la visita de aviones y autobuses abarrotados de israelíes, que no eran recibidos precisamente con simpatía y amistad, a menos que fuera bajo presión gubernamental

aunque también es cierto que muy pocos egipcios volaban a Israel y muchos menos recibían amistosamente a los israelíes (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

SOCIEDAD

Pero lo que Sadat “podría” pensar que había sido una “buena idea” se convirtió en una creciente animosidad de su pueblo hacia el régimen e incluso hacia su persona. Las consecuencias económicas que trajeron los acuerdos de Camp David no fueron en absoluto favorables a los egipcios; la política de puertas abiertas y el gran desarrollo del turismo había disparado la inflación y las consiguientes penurias para el sector que vivía de los ingresos fijos, como los burócratas y los militares, haciendo que floreciera una nueva clase de intermediarios, que amasó una inmensa riqueza y que derrochaba el dinero dando muestras de un consumismo exacerbado (los modelos llegados de París y los juguetes electrónicos llenaban los escaparates), chocando esta nueva forma de entender la vida social con la austерidad que reinó bajo el gobierno de Nasser (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

Se disparó el consumismo, lo que permitió que gran cantidad de trabajadores de cuello blanco emigraran a los países ricos en petróleo (oficialmente, se calcula que entre dos y tres millones de egipcios trabajaban en el extranjero), lo que también ayudaba a que aquellos que habían quedado relegados pudieran percibir mayores ganancias como consecuencia de la escasez de artesanos. Los profesionales también acudieron a los países ricos en petróleo y se produjo un nuevo fenómeno, el de los *fallahin* que emigraban al extranjero a trabajar en proyectos de construcción, pero solo aquellos egipcios con cierto grado de preparación cultural y tecnológica, obligando a Egipto a quedarse con una mayoría de personal sin preparación e incluso sin alfabetización, es decir, mano de obra sin cualificar (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

Este éxodo de emigrantes supuso para el país unos ingresos importantes: el gobierno calculó que los egipcios que trabajaban en el extranjero remitían cerca de dos mil millones de dólares al año. Pero este dinero generalmente, no se invirtió de manera productiva, sino que se gastó en artículos o en bienes de lujo. La burguesía fomentó el florecimiento de tiendas y restaurantes que ofrecían bienes y productos extranjeros. Los *fallahin* invirtieron en la tierra, lo cual hizo que su precio se disparara. El número de rascacielos de lujo creció rápidamente, al tiempo que se ignoró completamente la creación de viviendas para las clases medias y bajas (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

El consumo exagerado llegó incluso a los productos más elementales, los productos locales desaparecieron de las tiendas para dejar paso a las importaciones extranjeras más

caras. Por ejemplo, aparecieron multitud de establecimientos que vendían comida rápida, como los que hay en los Estados Unidos, pero a precios exorbitantes, mientras que las tiendas locales apenas tenían clientes. Parecía que la occidentalización, interpretada como un afán desmesurado por el consumismo, estaba inundando el país con la bendición del gobierno y de su presidente (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

Las revueltas de 1977 no fueron en balde; los Estados Unidos entregaron a Egipto un subsidio de dos mil millones de dólares anuales, destinados íntegramente a proporcionar alimentos de primera necesidad con el fin de evitar que se repitieran aquellos disturbios. Además se descubrió petróleo en cantidades respetables, de tal modo que Egipto se convirtió en un país productor y pudo satisfacer las propias necesidades del país y, al mismo tiempo, exportar crudo por valor de otros dos mil millones de dólares. Además el canal de Suez y el turismo aportaron otros mil millones de dólares. No obstante, el gobierno no era capaz de equilibrar su presupuesto y dependía de los envíos de dinero que hacían los egipcios que se encontraban en el extranjero. En ese momento la opulencia coexistía hombro con hombro con la pobreza más lamentable y comenzó a abrirse una enorme brecha entre los nuevos ricos, que al parecer ascendían a los 27.000 millonarios, y los pobres (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

3.2 Primeros partidos políticos. Inicio de la caída de Sadat

Pero los egipcios no solo estaban descontentos en lo concerniente a su nivel económico y social, sino que el descontento se ampliaba y a pasos agigantados en lo que hacía referencia a la política, porque las promesas iniciales de Sadat estaban muy lejos de ser cumplidas. Es cierto que al principio de su mandato como había prometido el régimen liberal retiró la censura de los medios de comunicación, pero la volvió a aplicar para acabar con cualquier crítica hacia el presidente y hacia sus acciones (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

Debido a estas nuevas formas de autoritarismo, empezaron a formarse una serie de plataformas políticas (*manabir*) como un primer paso hacia la creación de partidos políticos, que no tardaron en convertirse en una realidad. Estos partidos naturalmente criticaban la política del gobierno, por lo que estaban sometidos a una fuerte censura y sus imprentas eran sistemáticamente saqueadas o cerradas (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

Cuando Fuad Sirga al-Din, político del antiguo régimen, funda el Nuevo Partido Wafd, y critica la política de Sadat, se convierte en un proscrito. La Asamblea sólo tenía permiso para aprobar las medidas que tomaba el gobierno o para mostrar su oposición tan solo de la

manera en la que aceptaba el presidente. Sin duda podemos observar que mientras Sadat se convierte en una figura más famosa dentro de la escena internacional, simultáneamente comienza a perder contacto con su propio pueblo. Para Él Egipto es una gran familia y él es el padre de la misma, padre autoritario y totalmente patriarcal que no tolera la menor oposición o, ni siquiera, el menor debate, hasta el punto de que casi nunca consultaba a su gabinete, o lo consultaba y luego hacía todo lo contrario a lo que éste le había aconsejado (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

Pero este trato en cierta forma humillante no solo lo llevaba a cabo con el pueblo, sino que dispensó el mismo tratamiento a los militares o al Ministerio de Asuntos Exteriores. Naturalmente las críticas aumentaban de forma importante lo que le llevó a ordenar a la Asamblea que aprobara una ley que convirtiera en delito atacar a su política o a la de sus asociados más próximos. Esa famosa «ley de la vergüenza» incluso hizo que fuera ilegal para los egipcios que se encontraban en el extranjero mostrar su oposición al gobierno (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

En 1981 se aplica la Ley con el fin de arrestar a un grupo variopinto de personas y encerrarlas en la cárcel. Entre esos detenidos se encontraban algunos miembros de grupos militantes musulmanes, feministas como la doctora Nawal al-Saadawi, cuyo único delito fue criticar la dominación masculina que existía en el país, Hasanain Haikal, un notable periodista, distintos periodistas, intelectuales y profesores universitarios. La detención de 1.500 personas conmocionó al país, especialmente cuando fue seguida por un discurso en el que Sadat declaró que había elaborado una lista que contenía otros 15.000 nombres (esta detención traerá consecuencias muy graves, como veremos más adelante, incluso podemos considerarla como el inicio del plan de asesinar al Jefe del Estado) (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

El pueblo de Egipto que antes había ensalzado a su líder y Jefe de Estado empezó a despreciarlo, debido a su estilo de vida y el de sus parientes, a la indiferencia que mostraba hacia la opinión pública y sobre todo por su dejadez hacia sus hermanos musulmanes a favor del establecimiento de vínculos más estrechos con los Estados Unidos e Israel. Hoy podríamos pensar que si los israelíes no hubiesen sido tan exigentes y despegados, la figura de Sadat no habría terminado tan mal (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

A su llegada al poder, Sadat por necesidad había sacado de la cárcel a los Hermanos Musulmanes y los había convertido en sus aliados contra la ideología nasserista que imperaba por entonces fomentando el desarrollo de la corriente religiosa en el país, siempre con la esperanza de utilizarla para sus propios fines, pero lo cierto es que, ayudó a

crear un movimiento que desde luego Él no comprendía ni controlaba (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

Ya desde el año 1967 se había observado un aumento del fervor religioso, tanto de los musulmanes como de los coptos. Las asociaciones religiosas encontraron nuevos adeptos entre los jóvenes y entre los ancianos, dentro de las universidades y en todos los ámbitos de la vida, lo que llevó a un cambio de las costumbres; por ejemplo en el modo de vestir de las personas de la calle: las mujeres optaron por llevar largas túnicas de manga larga y un velo cubriendo la cabeza que recordaba a los hábitos de las monjas. Los hombres, por su parte, también adoptaron un atuendo más modesto que las camisas abiertas, los pantalones prietos y las cadenas de oro que imperaban en ese momento. Poco a poco, las organizaciones islámicas comenzaron a mostrar su oposición a las corrientes de occidentalización que llegaron al país a partir de 1977. Fueron estos grupos musulmanes los que se convirtieron en una verdadera oposición, con la diferencia de que su oposición se expresaba en términos tradicionales. Sin duda Sadat gobernaba con la misma autocracia que había mostrado Nasser, aunque aparentemente con un grado de represión menor, lo que no era cierto, si la observación del régimen daba esa impresión sin duda se debía a que en este momento la oposición era silenciada, de tal modo que los canales de los que disponen los ciudadanos para expresar su descontento quedaron bloqueados, por lo que no tuvieron más remedio que acudir a los grupos religiosos como una salida para expresar su descontento y para exigir que se produjeran cambios en el gobierno. Al mismo tiempo, los grupos religiosos expresaron su rechazo hacia la occidentalización, pero no hacia la modernización; expresaron su rechazo hacia la política de puertas abiertas y hacia sus consecuencias los resultados de la paz con Israel y, por encima de todo, hacia la corrupción que había invadido al gobierno a todos los niveles, especialmente en los niveles superiores (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

Israel aprovechando su alianza con Egipto asentaba sistemáticamente repetidos golpes a los árabes, (el estallido del reactor nuclear en Iraq, los distintos bombardeos sobre el Líbano que culminaron con la ocupación de ese desafortunado país, el aumento de los asentamientos en Cisjordania y el abuso hacia los palestinos residentes), llevó al pueblo egipcio a desarrollar un enorme grado de insatisfacción hacia el gobierno y hacia su política. Muchos egipcios estaban convencidos de que todos esos acontecimientos eran una consecuencia directa de los acuerdos de Camp David, que permitieron a los israelíes campar a sus anchas y que, al mismo tiempo, impedían cualquier protesta o medida por parte de

Egipto por miedo a que los israelíes no evacuaran la zona del Sinaí que debían desocupar en abril de 1982 (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

La religión empieza a invadir no solo los corazones sino las mentes de los grupos musulmanes, hasta el punto de considerar que esos actos eran un castigo por haberse relacionado con extranjeros y que sólo un retorno a sus tradiciones y a sus valores religiosos podía hacer que regresara al poder un gobierno con las siguientes cualidades: (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

- equitativo,
- que renunciara a la corrupción y al abuso de poder, que era la nota predominante del régimen,
- que mantuviera las distancias con Occidente y actuara movido por sus propios intereses, y no siguiendo los dictados de las potencias occidentales.

Cuando el descontento va aumentando entre la gente, esta necesita buscar un canal para expresar ese descontento; en el Egipto de aquel momento este canal solo podía encontrarse en la religión, lo que llevó a la aparición de una gran cantidad de asociaciones inspiradas por la religión, mientras algunas solo tenían motivaciones políticas y formaron un grupo de oposición contra el partido del poder (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

Las nuevas asociaciones religiosas son en realidad grupos alternativos que tratan de conseguir que los afiliados a los mismos puedan conseguir los elementos de los que carecen como: ideales, medios de movilizarse contra el poder, conseguir el freno a la corrupción e imponer unos principios religiosos que se convertirían en la ideología que marcaba el comportamiento a seguir en todas las actividades, tanto si se trataba de las relaciones del hombre con su Dios como si se trataba de las relaciones del hombre con el vecino. Al principio están formados por pocas personas, y además están separados entre ellos, pero van formando una nueva corriente emergente de activismo religioso (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

Aunque eran varios, se pueden agrupar en dos tipos: los que tratan de reformar la corrupción y para ello desean implicarse en la vida política del país a través de la participación de un partido político, aceptando el sistema de valores existente en la sociedad, y un segundo tipo, podríamos decir más “fundamentalistas” que rechazan el sistema de valores de la sociedad y tratan de destruirlo y colocar en su lugar un nuevo sistema, y que podríamos compararlos con los anarquistas de la época (recurren a la violencia y a los

asesinatos para atraer el apoyo y la atención del pueblo). Son una minoría dentro de los musulmanes, que por el contrario interpretan la religión de una forma muy distinta y tienen otra idea de lo “religiosamente correcto” (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

Para algunos expertos estos grupos más “exigentes” representan en realidad la revuelta de las masas, no hay teoría en el fondo de sus exigencias, nunca han explicado, ni desarrollado, qué clase de gobierno esperan instituir, hablan utilizando términos sencillos y parecen tener una opinión muy ingenua de lo que es un gobierno y sus instituciones. Están formados por las gentes más sencillas que se rebelan, por una parte contra la pequeña burguesía que por su parte llevaron a cabo los golpes de Estado militares, y por otra contra la alta burguesía que a su vez habían propiciado los movimientos nacionalistas y organizaron revueltas con la intención de acabar con el gobierno de la autoridad colonial (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

Sadat, como la mayoría de los jefes de estado autoritarios, que ya en este momento de su mandato había perdido totalmente el contacto con su pueblo, cuando empezaron a mostrarse este tipo de revueltas y surgir disidencias amparadas por asociaciones religiosas, pensó erróneamente que esos grupos estaban imitando a Jomeini y a la Revolución iraní, y se negó a aceptar que eran un problema puramente doméstico engendrado por las inquietudes y los problemas internos; por su parte esta minoría militante convencida de que aquellos que no estaban con ellos estaban contra ellos y de que no se les debería tratar como a musulmanes, sino que debían ser ejecutados como no creyentes que corrompián la forma de gobierno musulmana, asesinaron a Sadat. El desencadenante se originó ante la detención de 1.500 ciudadanos, que motivó a los grupos radicales a pasar juntos a la acción. Durante un desfile militar, algunos radicales consiguieron romper el cordón de seguridad que rodeaba a Sadat y, durante un momento en el que todos prestaban atención a una exhibición aérea, se precipitaron hacia los graderíos y le dispararon a quemarropa (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

Este asesinato fue vivido de diferente forma en oriente y occidente: mientras conmovió al gobierno de los Estados Unidos y a su pueblo como si hubieran perdido a uno de los suyos, lo que se explica por el gran servicio que les había prestado a ellos y a Israel firmando el tratado de paz con el último, apenas tuvo importancia para los egipcios, que siendo un pueblo que no se avergüenza de mostrar sus sentimientos y emociones en público, no derramaron una sola lágrima por el fallecimiento de su líder. La prensa americana glorificó a Sadat y censuró cualquier indicio de oposición expresada por su

propio pueblo, de tal modo que su asesinato supuso un duro golpe para la opinión pública americana, que lloró la pérdida de su hombre en Egipto (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

Mientras la muerte de Nasser, produjo un verdadero delirio, a pesar de que había perdido guerras y permitido que su país fuera invadido por una ocupación extranjera, el asesinato de Sadat fue seguido por un sentimiento de indiferencia aunque había traído la paz al país y había recuperado los territorios conquistados. Ésa es una de las grandes ironías de la historia. Es verdad que tanto Nasser como Sadat habían gobernado como autócratas, con el apoyo de un pequeño grupo de personas que cumplieron sus órdenes, pero que también consiguieron extender el mecenazgo por virtud de los puestos que ocupaban y desarrollaron una importante red de clientes. El aparato que rodeaba a ambos presidentes gobernaba en nombre de un pequeño grupo y sobre todo de sus intereses personales, con independencia de si con ello estaban dañando o beneficiando al país. Ese estilo de gobierno personal, que está motivado básicamente por el capricho (aunque algunas veces es incluso el resultado del pensamiento racional), no permite la menor oposición y no crea ningún canal de comunicación manifiesto y reconocible con la población. Por tanto, la oposición se tiene que llevar a cabo de manera indirecta, incluso ilegal a veces, a través de los canales tradicionales o de los contactos personales. Ese sistema obliga al gobierno a legislar a través de una serie de decretos excepcionales y desde luego no ayuda al gobierno de la ley y de la justicia. Al margen de que el autócrata pueda tener incluso algunos méritos individuales, la característica principal de un gobierno así es su naturaleza personal y su falta de continuidad. Es un gobierno donde abundan los aduladores o los hombres cuyo consejo casi nunca se busca y casi siempre se pasa por alto, de tal manera que los cambios frecuentes de ministros son la norma general. Por último, es un gobierno que ejerce cierto grado de represión, con el fin de evitar todo tipo de crítica al Jefe y a su pequeño grupo o asamblea que le ayuda, represión que a su vez trae consigo una reacción violenta (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

3.3 Problemas estructurales del Egipto Moderno

3.3.1 La Gran Presa

Los problemas a los que se enfrenta cualquier gobierno egipcio son variados:

- a) *Agricultura*: La agricultura, ya no funciona como en la época de los faraones, según todos estudiábamos: el Nilo arrastraba en sus crecidas limo que dejaba en sus orillas según se acercaba a su desembocadura enriqueciendo aquellas riberas y fertilizando la zona. Ahora se ha deteriorado como

consecuencia de la subida del agua del subsuelo, como consecuencia de la construcción de la gran presa y de la falta de un sistema de drenaje que compense la subida de las aguas. Los sedimentos no pueden pasar a través de ella (la presa), por lo que la tierra necesita un uso extensivo de fertilizantes para reponerlos pero *El fallah* medio no se puede permitir comprar fertilizantes, así que la cosecha disminuye en calidad y en cantidad. La otra consecuencia que conlleva la pérdida de los sedimentos es que éstos solían proteger al delta de la penetración de las aguas del Mediterráneo, que actualmente están erosionando el delta (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

- b) *Pesca*: por su parte los bancos de peces, que acudían en masa a la abertura del delta para alimentarse de los sedimentos, han desaparecido, arruinando así la industria pesquera (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).
- c) *Industria*: Aunque la gran presa y el lago Nasser acogen a una gran variedad de peces que podrían proporcionar a la población de Egipto todas las proteínas que necesita, pero para ello es necesario crear una serie de industrias dedicadas a la pesca y al envasado. Alrededor del lago se podía establecer un nuevo sistema de agricultura, pero para ello sería necesario realizar una inversión importante, algo que no parece que vaya a suceder a corto plazo (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).
- d) *Cultura*: Los principales yacimientos arqueológicos se han deteriorado gravemente como consecuencia del aumento del nivel de humedad que destruye la piedra (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

Sin embargo la presa a pesar de estas desventajas, ha tenido una gran ventaja, que suple según mi parecer los anteriores puntos negativos: ha salvado a Egipto de padecer la sequía que ha afectado a Sudán (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

3.3.2 La superpoblación. Macro Urbes

El aumento de población (cada año nacen más de un millón de bebés), y los problemas agrícolas (los habitantes del campo emigran a las ciudades atraídos por la posibilidad de conseguir un puesto de trabajo en las fábricas, en obras de construcción o, incluso mejor, en países extranjeros ricos en petróleo y con unos sueldos diez veces mayores que los que pueden ganar en su país), han llevado a una gran acumulación de personas en grandes urbes. De ese modo, las ciudades crecen a ritmo vertiginoso y usurpan

cada vez más hectáreas de tierra cultivable, al tiempo que los proyectos para ganar terreno al mar no pueden mantener el ritmo de la cantidad de tierra agrícola que se pierde cada año (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

Este abandono del campo por parte de los hombres ha obligado a que las tareas agrícolas tengan que ser llevadas a cabo por las mujeres, mientras ellos buscan trabajo fuera de casa (preferiblemente en el extranjero) con el fin de enviar dinero. Estos envíos ayudan a mejorar la economía. Pero estos ingresos no son seguros. Los egipcios empleados fundamentalmente en la construcción y obra pública en los países ricos en petróleo, llegará un momento en que ya no sean necesarios en esos territorios, lo que provocaría un regreso de dos millones de egipcios de vuelta a su país, lo que sería algo desastroso. El problema de posibles desempleados se agrava si tenemos en cuenta que también el ejército proporcionara una cantidad importante de ellos. En este momento, los jóvenes egipcios tienen empleo porque se enrolan en el ejército al alcanzar la mayoría de edad o después de graduarse en la universidad. Cuando el ejército reduzca su tamaño, ¿dónde van a encontrar empleo todos esos jóvenes? El problema del desempleo ha sido endémico desde hace décadas. La pobreza, unida al desempleo, es un cóctel explosivo. Aunque no existe la seguridad social, la pensión por jubilación ni el seguro médico, los egipcios seguirán teniendo cada vez más bebés como un medio de asegurar su vejez y de ser mantenidos por al menos uno de sus hijos (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

3.3.3 Incipiente industrialización. Dependencia del capital occidental

En la época de Sadat se inicia una incipiente industrialización. La política de puertas abiertas y los términos de inversión favorables han atraído:

- A algunas industrias a Egipto y el gobierno parece haber acudido a Occidente para encontrar ayuda económica que le permita financiar su proceso de industrialización; lo que si en un principio es bueno mirando a largo plazo sería funesto porque si se confirma esta política, eso llevaría a que el país tuviera que depender del capital de Occidente, lo que también podría conducir a la prosperidad y no necesariamente al empobrecimiento. Pero los sindicatos están dirigidos por el gobierno y hacen muy poco por el trabajador en lo que se refiere a las negociaciones salariales o a la mejora de las condiciones laborales; aunque bien es cierto que existen indicios que revelan un aumento de la conciencia sindical, que muy bien podría conducir a la militancia laboral en todos los frentes (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

- La política de puertas abiertas hace muy poco por proteger a las industrias nacionales que son incapaces de competir con las importaciones extranjeras que inundan el mercado. Los importadores prefieren adquirir productos de lujo o de consumo, porque así pueden aumentar los márgenes de beneficios en sus ventas, lo cual nos lleva a la cuestión de saber durante cuánto tiempo el país puede mantener un nivel de consumismo tan elevado sin aumentar su nivel de producción (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).
- Por último, cuáles serían las consecuencias que acarrearía experimentar un incremento del nivel de inversiones extranjeras, una vez repatriadas las ganancias obtenidas de las inversiones. Se ha legislado una serie de términos preferenciales con el fin de atraer las inversiones extranjeras, con el resultado de que las ganancias finales tendrán que salir del país. ¿Las multinacionales, aliándose con la clase intermediaria, llegarán a dominar el gobierno tal y como han hecho con algunos países del Tercer Mundo? (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

3.3.4 Nuevas Relaciones de Egipto con Israel

Hemos visto en el punto anterior los problemas económicos y sociales a los que se enfrenta el Egipto de Sadat, pero no son ni los únicos ni los más graves. La brecha que se abrió en los acuerdos de Camp David no se ha cerrado. Los problemas con Israel y con el resto de los países árabes están más vivos que nunca. Estos vecinos y antiguos aliados le insultaron después de la firma llevando cabo descalificativos personales. Egipto, sin el apoyo de los demás estados árabes, es un país pequeño, superpoblado y pobre, que depende de ellos: (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

1. Para su mercado diario (a lo largo de la historia el país ha necesitado a los demás países árabes para que desempeñen el papel de mercado natural, un mercado que solía adquirir el 80 por 100 de la producción egipcia).
2. Necesita al mundo árabe como una válvula de seguridad para su exceso de población.
3. Necesita que el dinero árabe se invierta en su país
4. Egipto, a la cabeza del mundo árabe, es una potencia a tener en cuenta, tanto desde el punto de vista estratégico como desde el punto de vista militar.

Del mismo modo, el mundo árabe sin Egipto carece de liderazgo y de influencia política. El mundo árabe necesita la experiencia de Egipto en muchos campos, aunque sólo sea para llenar las escuelas que se extienden desde Argelia hasta los estados del Golfo con profesores de árabe, médicos y otros profesionales. Los países árabes que años atrás necesitaron la actuación del inmenso ejército egipcio para que combatiera contra Israel, ahora ya no pueden utilizarlo como consecuencia del tratado de paz firmado por ambas partes (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

3.4 MUBARAK

Hosni Mubarak (1981-2011) sucedió a Sadat como presidente de Egipto, después del corto mandato del interino Sufi Abud Taled; fue nombrado vicepresidente de la República por Sadat y preparado para convertirse en su sucesor (fue elegido por este para formar parte de su séquito con el fin de asegurarse de que la aviación estaba controlada por el gobierno, tal y como ya lo estaban el ejército y la policía); era un oficial del ejército del aire con fama de ser una persona eficiente e íntegra, elegido por Nasser para reconstruir dicho ejército después de que éste fuera diezmado en 1967. No estaba identificado con ninguna de las facciones del poder que operaban bajo el gobierno de Nasser ni durante los primeros años de mandato de Sadat. La eficiencia de Mubarak y su actitud sensata hacia el trabajo pronto se pusieron de manifiesto y se convirtió en una figura imprescindible como negociador con los países árabes, a los que les agradaba su estilo y respetaban su actitud discreta. Gracias a ese estilo, Sadat escogió a Mubarak como vicepresidente y como contraste a su personalidad extravagante, y dado el estado autócrata en el que se vivía el resto del país asumió que Mubarak algún día sucedería a Sadat, a menos que una figura desconocida apareciera entre bastidores. El régimen de Mubarak se enfrentó a unas circunstancias difíciles: (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

3.4.1 Economía

La situación económica podía ser delicada, pero no irreversible, y el régimen trató de enderezar la economía y reparar los abusos de una política de puertas demasiado abiertas limitando la importación en exceso de bienes de consumo y equilibrando las estadísticas comerciales. También trató de fomentar el desarrollo de las inversiones productivas que permitieran mejorar la economía a largo plazo y proporcionar puestos de trabajo. Pero en cuanto al intento de remediar los problemas financieros del país, las decisiones fueron erróneas: el paso lógico que puede dar un gobierno para aumentar el capital era cobrar impuestos a sus ciudadanos más ricos, pero en ese momento el único grupo al que se ha conseguido cobrar esas tasas era al de los burócratas, que, para empezar, estaban mal

pagados. La adopción de unos métodos de recaudación de impuestos más rigurosos podría haber hecho que la burguesía dejara de dar su apoyo al gobierno y también se correría el riesgo de ahuyentar al capital extranjero. Una parte importante del capital extranjero que llegaba a Egipto procedía de la gran cantidad de bancos que habían florecido a lo largo de la última década. Algunos de esos bancos se llamaban «bancos de paraísos fiscales» y no estaban sujetos a las normas monetarias egipcias, lo cual suponía una posible amenaza para el bienestar económico del país (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

3.4.2 Trabajo

La rueda de cualquier burocracia gira lentamente y la egipcia era particularmente pausada en este momento, pues los que la componían no habían acabado de entender del todo las nuevas leyes, (ni siquiera las entendían las personas que las habían redactado), así que el país titubeaba entre un intento de imponer un libre mercado y un intento de aferrarse al sector público. La participación de Egipto en la Guerra del Golfo supuso un estímulo para su economía y permitió que se cancelara su deuda de 4.500 millones de dólares con los Estados Unidos, lo cual le permitió refinanciar algunos de sus préstamos, haciendo que se redujera notablemente el porcentaje de capital empleado en pagar los intereses por los préstamos extranjeros; no obstante, el porcentaje del interés todavía era bastante elevado y entorpecía las inversiones en la industria y en la agricultura dentro del país. La deuda exterior de Egipto ascendía aproximadamente a los 30 mil millones de dólares (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

3.4.3 Política

Por fin, a partir de 1984 se permitió la participación de los partidos políticos de todas las tendencias, excepto de los que tenían un tinte religioso. Pero las competencias del presidente seguían estando fuera de los límites que las democracias occidentales consideraban normales: (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

- El Presidente todavía era el encargado de elegir al Primer Ministro y todo el gabinete es responsable sólo ante su presidente y no ante el Parlamento.
- Cada vez que han tenido lugar elecciones a la presidencia, Mubarak ha sido el único candidato que se ha presentado, salvo en la recientemente celebrada quinta elección, en la que Ayman Nour se enfrentó en las urnas con él.

La prensa ahora es más liberal y han aparecido periódicos de la oposición, y existen consultas al pueblo, como las votaciones que se produjeron en las últimas elecciones que demostraron que la población está desencantada con la política y se está alejando de las urnas. Ésa es una señal de insatisfacción con el régimen y de que se está apartando de él. La causa principal radica en la situación económica, en una sensación de que el futuro no es más brillante y de que el gobierno no representa realmente a su pueblo ni a sus necesidades (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

3.4.4 Finanzas

Las negociaciones con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional no afectaban al hombre de la calle y, por tanto, lo apartaban de su horizonte. El hombre de la calle sólo veía cómo aumentaba constantemente el coste *de la vida* y cómo escaseaban los puestos de trabajo para sus hijos (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

3.4.5 Relación con otros países musulmanes

La situación internacional separaba a muchas personas que no le perdonaban el hecho de haber participado en la Guerra del Golfo contra un hermano musulmán para ayudar a los ricos kuwaitíes; muchos de los cuales se encontraban hospedados en los hoteles de lujo de El Cairo. Otros que habían estado en Iraq y que habían sido expulsados del país por Saddam Hussein, quien prometió enviarles su dinero pero que nunca cumplió su promesa, se sintieron encantados de que le dieran una lección a Saddam. El resultado de la guerra en la que Saddam permaneció en el poder pero Iraq fue destruido, cambió la actitud de la gente, que era incapaz de entender por qué Iraq había sido devastado de esa manera tan radical y por qué su gobierno perdonó esos excesos por parte de Occidente contra un país árabe musulmán. Esto alimentó las sospechas sobre cuáles eran las intenciones de Occidente hacia el mundo musulmán en general. Estas sensaciones de agravio se vieron exacerbadas por los activistas que predicaban que Occidente es enemigo de los musulmanes, basándose en la prensa occidental que estaba plagada de titulares que hablan acerca del «peligro musulmán» (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

3.4.6 Sociedad y Cultura

La mayoría de la población no estaba occidentalizada. Su cultura y sus valores tienen sus raíces en el Islam como religión y como civilización y no querían perder sus señas de

identidad imitando a Occidente y a sus valores, sino que deseaban disfrutar de los beneficios que ofrece la tecnología occidental al tiempo que mantenían su identidad y sus valores culturales (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

Nuevamente en época de Mubarak volvíamos a encontrarnos el eterno problema de los canales de comunicación entre los gobernantes y los gobernados. Éstos eran prácticamente inexistentes. Los intelectuales, que deberían haber actuado como el conducto de comunicación entre los dos grupos, abdicaron de su función cuando sirvieron al Estado, tal vez por el miedo que padecieron durante el régimen de Nasser o por convicción propia. En la época de Mubarak, estaban tratando de hacerse oír. La única razón para que el gobierno les prestase atención era que algunos elementos de la población amenacen con recurrir a la violencia. Tras el terremoto que tuvo lugar en invierno de 1992, se dio una manifestación pública. Fue un brote de disturbios que se produjo a raíz de la poca ayuda que el gobierno estaba prestando a las personas que padecieron las consecuencias del terremoto. Las zonas más devastadas se encontraban en barrios populares donde las viviendas están superpobladas y los edificios casi nunca siguen las normativas oficiales y, por tanto, están mal construidos o son tan antiguos que al primer temblor se vienen abajo. Como Egipto apenas había padecido terremotos en los últimos años, el gobierno reaccionó con lentitud; después hizo promesas de construir inmediatamente nuevas viviendas que no se llegaron a cumplir o que se construyeron en áreas remotas. Por tanto, la población manifestó su desprecio hacia esas promesas y convocó una manifestación pública masiva. Las manifestaciones populares hicieron que el gobierno recordara los acontecimientos de 1977, cuando Sadat se vio obligado a convocar al ejército para detener a las masas exaltadas e impedir que ocasionaran mayores daños a El Cairo. Estos hechos fueron aprovechados sabiamente por los grupos fundamentalistas que se situaron en un primer plano, ofreciendo ayuda y socorro a los necesitados, expandiendo así su popularidad entre las masas. Teniendo en cuenta la existencia de los crecientes grupos activistas islámicos, que suele convocar manifestaciones y protestas, el gobierno tiene que aprender a diferenciar entre una verdadera manifestación popular y una que esté dirigida por agentes provocadores que esperan acabar con las fuerzas de seguridad del gobierno (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

En esta época, el fundamentalismo islámico había invadido el país, especialmente entre sus mujeres. Las calles empezaron a poblarse de gran cantidad de mujeres ataviadas al estilo musulmán procedentes de todas las clases sociales, aunque también es verdad que eran unos días en que las mujeres tenían más acceso a los puestos de trabajo que nunca. La aparente anomalía que representaba un vestido modesto y el pelo tapado en una mujer que

ostentaba el cargo de ministra del gabinete o de vicepresidenta de un banco se explicaba simplemente por el hecho de que la persona en cuestión estaba demostrando a través de su vestuario que era una musulmana devota. Hay muchas razones que explican por qué las mujeres optaron por lo que ellas llaman una forma de vestir «musulmana»: (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

- razones económicas; pues aunque algunas mujeres (vestidas como musulmanas) han logrado llegar a dirigir con éxito importante empresas, como fábricas de tejidos, la mayoría se enfrenta a un problema importante como es la consideración que los hombres tienen hacia ellas, como competidoras y por tanto la lucha que ellos llevan a cabo para que carezcan de defensa y ayuda en sus centros de trabajo (por los sindicatos) frente a patronos y jefes: cuando llegó a globalización y se convirtió en la base de la actividad económica (que no en otros ámbitos), los diversos grupos sociales la recibieron de distinta manera. Las clases obreras de tradición artesanal se preocuparon al pensar que sería su ruina, porque naturalmente no se veían capaces de competir con los productos importados más baratos, a menos que encontraran trabajo en las fábricas. Algunas «ericas» prefirieron contratar a mujeres porque no tenían sindicatos, podían ofrecerles un salario más bajo y estaban menos protegidas.
- razones sociales; han conseguido la aprobación de una ley que permite a las mujeres presentar una demanda de divorcio⁶, aunque las condiciones que van asociadas a esa demanda acarrean una pérdida de todos sus derechos legales financieros. También pueden llegar al Parlamento y hay varias ministras en el gabinete al frente de ministerios clave.
- religiosas; querían regresar a sus raíces sociales y religiosas y rechazar las trampas que escondía la occidentalización, pero no las de la modernización (utilizan herramientas modernas pero rechazan la forma de vestir occidental). En los últimos años, las mujeres se han vuelto más poderosas y existen grupos de ellas que interpretan el Corán, un coto reservado hasta

⁶ En el siglo XVIII, las mujeres podían solicitar el divorcio basándose en el *darar*, que es un daño infligido hacia ella misma en caso de que el matrimonio no se anulara. De hecho, el juez no tenía derecho a negar el divorcio. Podría parecer que la era moderna era mucho más severa por lo que concierne a los derechos conyugales de las mujeres, al tratar todavía a las mujeres como una propiedad del marido, un concepto introducido en el siglo XIX.

hace poco tiempo a los hombres, y tratan de establecer la igualdad con los hombres no sólo en el puesto de trabajo.

Los enfrentamientos sociales ante la implantación de la globalización no se limitaron a los géneros (hombres-mujeres), sino también se extendió a las clases. Mientras las clases medias disfrutaron del privilegio de contar con productos importados a precios más bajos las clases bajas sufrieron cada vez más penalidades y el aumento de la inflación. Por ello, las clases que estaban a favor de la globalización eran las de los compradores y la de los múltiples empresarios que producían bienes de exportación. El bienestar económico iba en aumento, la nueva clase de empresarios estaba ganando dinero, incluso el mercado de valores, cerrado desde la época de Nasser, estaba en alza (consecuencia del vacío cada más grande que existía entre los sectores ricos y pobres de la población) (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

Algunos atribuían el nuevo bienestar económico a la influencia de Gamal Mubarak, (hijo del presidente Mubarak) un hombre de negocios, y que llevó a cabo la modificación de algunas leyes que favorecían al sector privado. Sin embargo, estos logros no tuvieron como resultado que la mayoría de los egipcios lo aceptasen como sucesor de su padre a la presidencia. Se temía que se produjese una presidencia hereditaria, como ya ocurrió en Siria (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

Al final de la época de Mubarak en Egipto se observaban algunos indicios de bienestar, como la existencia de una clase de jóvenes empresarios que habían fundado compañías y fábricas que producían todo tipo de productos y no sólo para su exportación. Muchos de ellos, han expandido con éxito sus inversiones fuera de Egipto. Una nueva clase adinerada está haciendo ostentación de su opulencia por medio de un consumo flagrante y vistiendo los atavíos de los nuevos millonarios, mientras que la mayoría del país vivía en el nivel de la pobreza o por debajo de él. Ésa es una de las razones básicas que explican el ascenso del fundamentalismo islámico, y el concepto de que sólo Dios proveerá, ya que ninguna otra figura en el país lo va a hacer. Y esa razón del aumento de los pobres y la máxima diferencia que se observaba con los ricos, también ha sido en parte la responsable del ascenso del terrorismo (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

Políticamente han cambiado algunas cosas, aunque aparentemente más en la forma que en el fondo: en realidad existen partidos políticos, pero si exceptuamos los de corte religioso, el único que tiene peso es el que apoya al presidente, el Partido Nacional Democrático, mientras que el resto tienen poca importancia. De hecho, el Parlamento es un

grupo de hombres sumisos. También la censura se supone que está erradicada, pero cuando un cineasta, Saad al-Din Ibrahim, realizó un documental en donde se mencionaba la existencia de votos fraudulentos en unas elecciones pasadas, fue acusado de «difamador» y encarcelado por el gobierno. Al final fue puesto en libertad gracias a la influencia del mundo occidental, especialmente de los Estados Unidos. Sin embargo, muchos estaban de acuerdo con él en que las elecciones fueron un fraude, lo que en parte explica por qué apenas la mitad de la población se molestó en acudir a votar (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

Ha crecido la desidia y el escepticismo (en eso si se parecen a occidente). Parecen ser las dos grandes lacras de la vida política y las masas sólo se pueden movilizar si aparece una nueva ideología y surge una nueva figura con ideas frescas. Mientras eso sucede, el retorno a la religión y a la dependencia del Todopoderoso para que cambien las cosas sigue siendo la norma imperante (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

Cuando los Estados Unidos obligaron a Mubarak a llevar a cabo una serie de reformas, éste enmendó el Artículo 76 de la constitución, que permitía a otro candidato, Ayman Nour, optar a la presidencia junto a Mubarak. Nuevamente engañó a su pueblo cuando a lo largo de su decimocuarto mandato, Mubarak dejó entrever que no se iba a presentar a un decimoquinto, pero después cambió de opinión y se presentó a los comicios, y para evitar demasiadas quejas redujo la presión sobre la prensa y sobre los partidos de la oposición, permitiéndoles cierta capacidad de maniobra. Pero una vez que concluyeron las elecciones y Mubarak ganó, metió en la cárcel a Ayman Nour acusándolo de falsificar los votos de las elecciones y sometió nuevamente a la prensa y a los partidos políticos. También amplió la ley de Emergencia, que se había establecido en 1981 tras el asesinato de Sadat, durante dos años más. En la actualidad, el gobierno sigue tratando de intimidar a los políticos y a los jueces, que defienden la independencia del poder judicial. Una vez más, las reformas prometidas se han denegado y la represión se ha vuelto a instalar. Por esa razón, no es extraño que el hombre de la calle sea un verdadero escéptico (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

3. 4. 7 Terrorismo

El terrorismo ha atravesado por diversas etapas a lo largo de la historia reciente de Egipto:

1. Al principio, en 1992 y hasta 1997, centró su objetivo en los extranjeros. Los terroristas atacaban a los turistas porque introducían dinero en el país, y eso ayudaba al gobierno. Su discurso era el siguiente: si ahuyentamos a los

turistas, el gobierno caerá en la bancarrota y eso le obligará a llevar a cabo cambios. Ésa es, por supuesto, la mentalidad de los anarquistas (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

2. Más tarde, en 1993, los terroristas atacaron directamente al gobierno tratando de asesinar a los ministros de su gabinete. La persecución de los grupos fundamentalistas por parte del gobierno y el arresto y encarcelamiento generalizado de 20.000 sospechosos hicieron que se pusiera punto final a esos intentos, especialmente cuando uno de los principales grupos anunció en 1999 su renuncia a recurrir a la violencia (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).
3. En el año 2000, el turismo trajo al país aproximadamente cuatro mil millones de dólares. Se adoptaron algunas medidas represoras y durante un par de años no se produjeron más actos terroristas (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).
4. Los atentados en el mar Rojo del 2004 y 2005 tenían como objetivo los turistas israelíes, aunque también fallecieron turistas de otras nacionalidades. El atentado más reciente del 2006 mató a más egipcios que turistas y se llegó a sospechar que se trataban de elementos extranjeros que se infiltraron fácilmente en el Sinaí. Sin embargo, no es fácil saber quién estaba detrás de esos atentados, aunque se arrestaron a algunos beduinos (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).
5. La conclusión que se puede sacar de estos atentados es que parecieron ser contraproducentes, ya que perjudicaron más al egipcio medio que se gana la vida con el turismo que al propio gobierno. Si el objetivo de los terroristas era levantar al pueblo contra el gobierno, no han tenido ningún éxito y, al contrario lo que sí han conseguido es que gran parte de la población se ponga en su contra (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

Egipto no es un país fácil de gobernar, en realidad nunca lo ha sido y mucho menos desde la invasión árabe en el siglo VII (Cfr. II. BREVE HISTORIA DEL CRISTIANISMO COPTO) ya que padece muchos problemas, entre ellos, por citar algunos, no dispone de los recursos necesarios y cuenta con una población que crece con demasiada rapidez (por supuesto, como la mayor parte de los países en el mundo no cuenta con un sistema de control demográfico) y está principalmente formado por jóvenes. Las soluciones fáciles no existen. Algunos creen que la corrupción, que parece haberse convertido en un mal endémico en las

altas instancias, es la raíz del problema, pero ése no es más que una de las muchas dificultades que existen (A. L. al-Sayyid Marsot, 2007); los principales escollos son de carácter económico, a los que se añade la inefficiencia del gobierno (deberíamos especificar dentro de esta idea que se considera inefficiencia el gasto masivo en determinadas partidas y apartar las más acuciantes para el pueblo), la necesidad de invertir de manera masiva en la industria y de repartir la riqueza de manera más equitativa. Estos problemas, hemos de tener en cuenta una vez más, no son característicos de los países en desarrollo sino que con la crisis económica del 2010 en occidente estamos viendo cómo muchos países occidentales son incapaces de frenar su caída. También existe la necesidad de que impere una nueva ideología o al menos una nueva forma de hacer política para que ésta pueda atraer el interés de los jóvenes y hacer que se olviden de su separación de su gobierno, es decir, es necesario que exista un mayor grado de liberalización y un gobierno que se considere abiertamente el representante de todos los sectores de la sociedad, y no sólo de los más favorecidos (A. L. al-Sayyid Marsot, 2007). Para conseguir todo esto es necesario dedicar mucho tiempo y esfuerzo, no sólo de capital. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta el dato de que los egipcios son un pueblo muy resistente; Ha sido un país capaz de soportar un incremento de población de más de 20 millones en sólo una década sin que sus cimientos se vengan abajo lo cual demuestra una gran entereza por su parte. El tiempo demostrará si los gobiernos han sido capaces de aprender a ser más responsables y a estar más sensibilizados con su pueblo y veremos si la población actuará dentro de los parámetros del sistema en lugar de recurrir a la violencia y de maniobrar fuera del mismo (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

Ya en 2005, entre la mayor parte de la población, se había establecido un gran escepticismo, convencidos de que el nuevo mandato no traería apenas ninguna diferencia comprado con los anteriores. Hemos comprobado, ya que ha desembocado en una revolución conocida como la Primavera Árabe y que precisamente comenzó en esta nación, la República Árabe, que Mubarak fue incapaz de desarraigarse de sus viajas políticas e implantar nuevos decretos para la libertad de su pueblo y hacer de su mandato uno más liberal; para que el gabinete de gobierno sea responsable ante el Parlamento que, por supuesto, debería ser elegido popularmente y a través de unas elecciones auténticas y limpias, donde la corrupción sea erradicada y la inefficiencia (no sólo presente en Egipto sino hemos de mencionar en muchos países occidentales perdida a causa de la desesperanza) sea otro lastre eliminado. De no ser así y como se ha comprobado a lo largo y ancho del mundo, Mubarak no consiguió inspirar a su pueblo, mas por el contrario, su último mandato terminó en una Revolución (Sayyid Marsot, 2007: 169-191).

3. 5 La Primavera Árabe en Egipto

De todas las fuentes actuales más fidedignas, nos remitiremos para explicar de una manera breve y concisa aunque detallada, la primavera árabe en Egipto a través de los informes de Amnistía internacional (Informe de Amnistía Internacional, nº110, 2011).

Egipto, un país en el que viven unos 85 millones de personas, experimentó en 2011 enormes cambios tras inspirarse en una visión compartida, sin tener en cuenta cultos, etnias, ideas políticas u otras diferencias dentro de la sociedad, la revolución del pueblo contra la corrupción y la pobreza. El pueblo por fin ha decidido reivindicar su libertad y su dignidad (Informe de Amnistía Internacional, nº110, 2011).

Sin embargo y pese a la presión interna del pueblo egipcio y a la presión externa por parte de los países occidentales porque llegue una democracia real a las naciones a las que está llegando este movimiento, el cambio sólo podrá producirse si los gobernantes y la cúpula del gobierno abordan los problemas más acuciantes de la población: la pobreza, la justicia y las leyes represivas; medidas fundamentales para devolver la dignidad y la seguridad al pueblo egipcio que ha participado en este levantamiento (palabras del secretario general de Amnistía Internacional que visitó El Cairo durante los disturbios) (Informe de Amnistía Internacional, nº110, 2011).

En la intervención de secretario de amnistía Internacional ante los medios de comunicación, afirmó durante su conferencia de prensa final, que la mejora de la situación en el país no pasa sólo por reformar el sistema jurídico y las leyes de protección ciudadana sino que todo esto necesitaba un cambio mucho más profundo por parte de la cúpula del ejecutivo del país: un cambio de comportamiento frente a los derechos y libertades del pueblo y las prácticas, en muchas ocasiones abusivas que, en definitiva, es por lo que la gente, en las calles, es por lo que estaba luchando (Informe de Amnistía Internacional, nº110, 2011).

Los egipcios que llevan a cabo “sentadas” en la plaza de Tahrir, epicentro de El Cairo, y en otras ciudades. Frente al movimiento en muchos países de tradición islámica, en Egipto hemos podido observar cómo elevan sus quejas de manera pacífica, hasta que intervienen las fuerzas de seguridad. Según representantes de los medios de comunicación que asistieron a los actos de Amnistía Internacional, la visita de Salil⁷ se produjo en un momento en el que la población egipcia necesita de alguien que apoye desde el exterior, se ocupe de

⁷ Secretario General de Amnistía Internacional. Estas conversaciones y declaraciones se llevaron a cabo en El Cairo, en 2011. Cfr. <https://www.es.amnesty.org>

los abusos cometidos por los militares y trate de obtener compromisos de reformas políticas, sociales y económicas, pero no a “precio de saldo”, como los egipcios han llegado a esperar de los gobiernos extranjeros (amnistía Internacional, nº110, 2011). Con la intervención de potencias extranjeras en la revolución (o eso esperaba el pueblo egipcio) lo que pretendían era ni más ni menos que recuperar la confianza entre el estado y la ciudadanía. En todas sus comparecencias ante los medios, Salil subrayó que Egipto no podrá avanzar a menos que las víctimas de violaciones de derechos humanos que han sufrido en los últimos tres decenios obtengan justicia y puedan ver la buena disposición del gobierno para emprender las acciones legales pertinente con el fin de recuperar la confianza entre el Estado y la ciudadanía, así como en el sistema político egipcio que ofrece seguridad ciudadanía dentro de la Constitución sea cual sea su religión etnia o ideario político. El secretario general de Amnistía Internacional elevó una petición, casi de súplica, al gobierno para que se deshiciera de los viejos hábitos que tan sólo conducía a “la sospecha y a la desconfianza” entre la población del país y su gobierno. Salil también advirtió el peligro que suponía para el gobierno que regentaba el poder en ese momento la continuidad de las leyes de excepción y la permanencia de juicios militares, ya que para la ciudadanía no era más que otra fuente más de desconfianza y por la que elevar más quejar a su gobierno. Estas prácticas por parte del ejecutivo de Mubarak arrojaban dudas sobre la seriedad del gobierno en su posición de transición hacia un nuevo Egipto. En su reunión con Salil, el general de división Abdel Fattah al Sisi, jefe del Departamento de Inteligencia Militar y miembro del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que asumió el poder tras la caída de Mubarak, dijo a Amnistía Internacional que estaba de acuerdo en lo relativo a la necesidad de cambiar la cultura de las fuerzas de seguridad (A. L. al-Sayyid Marsot, 2007). Asimismo, dio garantías a Amnistía Internacional de que se habían impartido instrucciones de no usar la violencia contra los manifestantes y de proteger a las personas detenidas frente a los malos tratos, casos que más tarde se comprobarían y no habían respetado dicho acuerdo. Ni si quiera amnistía Internacional u otras oficinas o Altos Comisionados de las Naciones Unidas posee datos fidedignos de los maltratos sufridos a detenidos en las manifestaciones durante esta revolución (Informe de Amnistía Internacional, nº110, 2011).

Uno de los temas más escabrosos que tuvo que tratar Salil fue plantear el tema de las pruebas de virginidad, ya que un gran número de mujeres, condenadas y civiles, habían denunciado estas prácticas por parte de militares, primera a Amnistía Internacional y más tarde al canal televisivo estadounidense CNN, el general Al sisi salió en defensa de estas pruebas ya que se habían llevado a cabo para demostrar la inocencia del ejército y demostrar que dichas prácticas no se había llevado a cabo. Además de todo ello, aseguro a

Salil que no volverían a detener a mujeres. Amnistía Internacional hizo pública una declaración y señaló que consideraba que todas esas pruebas eran constitutivas de tortura. Hubo comentarios de egipcios criticando al general y diciendo que su justificación era inaceptable. En lo que se refiere a los abusos cometidos por los militares, el general Al Sisi dijo a Amnistía Internacional que las personas que denunciasen abusos debían hacerlo ante el fiscal militar y también que podían incorporar sus denuncias a la “página del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en Facebook” (A. L. al-Sayyid Marsot, 2007).

Durante su visita, en las entrevistas concedidas a los medios de comunicación, Shetty, otro miembro de las Naciones Unidas, advirtió que a menos que Egipto aborde la cuestión de la pobreza y las desigualdades económicas, el país estará creando una bomba de relojería. El secretario general de Amnistía Internacional señaló asimismo que las protestas que tienen lugar desde enero están “estrechamente interrelacionadas con los elevados índices de pobreza”. “Egipto no es un país pobre, es un país de ingresos medios que tiene recursos. (Informe de Amnistía Internacional, nº110, 2011).

Pero, debido a que el poder ha estado concentrado en manos de unas pocas personas, desde 1950 el país había pasado de ser una monarquía a una república dirigida en todas sus épocas por una cúpula militar, los recursos están distribuidos de manera muy desigual”, afirmó otro alto cargo enviado por las Naciones Unidas para seguir el desarrollo de los acontecimientos, que también visitó el asentamiento precario de Manshiyet Nasser, que en 2008 se vio afectado por desprendimientos de rocas que causaron la muerte de más de 200 personas y dejaron sin hogar y en la indigencia a un número muy superior (Amnistía Internacional, nº110, 2011). Shetty, este cargo de Naciones Unidas enviado para hacer una análisis de la situación que atravesaba el país, pidió a las autoridades que ofrecieran señales claras de los cambios prácticos que se estaban acometiendo en el país para abordar el derecho a una vivienda adecuada, alimentación, agua y servicios sanitarios, en lugar de recurrir a una nueva ley para criminalizar las huelgas, algo más propio de dictaduras que de democracias. Pero para la población egipcia, lo cierto es que el gobierno provisional de momento no acometió plan alguno para erradicar la pobreza. De hecho, hay dudas acerca de cuánto lograron en realidad los representantes del gobierno con los que Salil se reunió (Informe de Amnistía Internacional, nº110, 2011).

Las protestas continúan el 28 y 29 de junio, tan solo unos días después de que la delegación de amnistía Internacional abandonase el país. Durante estos dos días de enfrentamiento tuvo lugar una batalla callejera entre ciudadanos egipcios y su Ministro del Interior al que atacaron con piedras para recibir a cambio gas lacrimógeno y que se salgó

con más de 1.000 heridos por ambas partes en este conflicto⁸, según la declaración oficial del Ministerio de Salud (Informe de Amnistía Internacional, nº110, 2011).

Posteriormente se convocó una sentada en todo el país para protestar contra la ausencia de ningún tipo de respuesta positiva a sus exigencias por parte del gobierno, la lentitud de la justicia y la falta de libertad.

Durante la visita de Salil a la ciudad de Suez, algunas personas hablaron de la injusticia que sienten cada vez que ven caminando libremente por la calle a un policía que está acusado de haber matado a un miembro de su familia. Estas personas agregaron también que históricamente han estado desatendidas en el plano económico por el gobierno egipcio en comparación con El Cairo. Sus quejas podrían explicar el hecho de que Suez haya sido escenario de las protestas más violentas desde el 8 de julio del 2011, que en ese momento se amenazó con el cierre del canal, el cual representa la fuente de ingresos número uno de Egipto (Amnistía Internacional, nº110, 2011).

Salil señaló al término de su visita que, incluso con las mejores intenciones, cambiar los comportamientos de las instituciones de Egipto para que respondan a las necesidades de su población constituye un enorme desafío (Informe de Amnistía Internacional, nº110, 2011).

Así pues, la impresión que recibimos en occidente es que el pueblo está decidido a continuar su lucha y su presión al gobierno hasta que consigan que se haga justicia. El problema de esta revolución es que cada vez la defensa por parte del gobierno es más contundente, hay cada vez más detenidos y más heridos y no se logran respuestas ni cambios (amnistía Internacional, nº110, 2011).

Como dijo Salil en una de sus comparecencias ante la prensa en El Cairo: "Amnistía Internacional debe seguir apoyando a las víctimas en su lucha por la justicia y para obtener indemnizaciones" (Informe de Amnistía Internacional, nº110, 2011).

Han pasado los años desde aquella primera protesta en la plaza Tahrir y los enfrentamientos han continuado. Con épocas de mayores altercados y épocas de mayor paz conciudadana. Mubarak fue depuesto como presidente de Egipto y otros dos lo han seguido. Nuevas Constituciones se han aprobado, pero el pueblo sigue en pie de guerra, sin saber qué hacer para mejorar la calidad de vida de la sociedad egipcia. El pueblo copto, además de todo esto, ha tenido que aprender a sobrellevar la escalada incipiente de atentados por parte de fanáticos y terroristas y a tener en cuenta que la prioridad principal del pueblo

⁸ Se puede consultar en www.theguardian.com

egipcio es comer y poder tener un trabajo digno. Las minorías parecen haber quedado relegadas a un segundo plano (Informe de Amnistía Internacional, nº110, 2011).

3.6 Políticas de la ONU sobre la minoría copta

< Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique le droit de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion o usa conviction seul ou en comun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites >

< Toda persona tiene el derecho de libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho implica el derecho de cambiar de religión o de convicción así como la libertad de manifestar su religión o convicción solo o en común, ya sea en público o en la intimidad, a través de la enseñanza, de las prácticas, el culto y de la realización de ritos >

Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 18

< Le mécanisme d'Examen périodique universal est plein de promesses en ce qu'il ouvre un nouveau chapitre dans la promotion des droits de l'homme et en souligne l'universalité >

< El mecanismo de examen periódico universal es prometedor ya que marca un nuevo capítulo en la promoción de los derechos humanos y subraya la universalidad >

Ban Ki- Moon, Secretario General de las Naciones Unidas

La relación de las Naciones Unidas con Egipto comienza en el 1945, cuando dicho país pasó a formar parte de la institución; de esta manera Egipto, como el resto de los países que conforman la institución, tenía y tiene la obligación de respetar y hacer respetar dentro de sus fronteras la Carta Internacional de Derechos Humanos. Hay que tener muy en cuenta, que pese a su deber, en 1966 el Consejo Islámico prepara su Declaración Universal Islámica, que no garantiza los derechos de las minorías. Aceptar dicha declaración va en contra de las obligaciones contraídas con las Naciones Unidas, pero hemos de recalcar que muchos de los países integrantes de dicha institución no cumplen en absoluto con sus deberes para con la Carta Internacional de Derechos Humanos.

Pasamos directamente a 2008, puesto que en este año las Naciones Unidas ponen en marcha (aunque en período de examen) un nuevo intento de hacer cumplir los Derecho Humanos sobre el terreno, creando el Consejo de Derecho del Hombre de las Naciones Unidas. Cada uno de los exámenes realizados contenía un documento final con una lista de recomendaciones a cada estado sometido a examen. El departamento de las Naciones Unidas encargado de realizar el examen a cada país en el que se consideraba que no se cumplía con los Derechos Humanos, el Consejo de los Derechos del Hombre, hacía una llamada a la responsabilidad de estos estados de respetar plenamente las conclusiones del documento final y poner en marcha mecanismos para preservar los derechos del hombre y las libertades fundamentales (Asamblea General de las Naciones Unidas – Consejo General de Derechos Humanos: Egipto, 2010)

El examen de Egipto finalizó en 2010. De un total de 65 recomendaciones presentadas en el documento de dicho año el gobierno egipcio aceptó la mayoría aunque rechazó 14 de ellas. El examen de dicho documento por parte de la administración egipcia duro 3 horas y comenzó con el discurso de Mufid Shihab, Ministro de Asuntos Jurídicos y de la Asamblea de Representantes, quien se dirigía a la delegación egipcia compuesta de 14 miembros que podían expresarse libremente. Tras los debates concernientes al proceso de examen egipcio el Presidente de Asuntos Jurídicos egipcio se reafirmaba en la idea de que el país aceptaba de buen grado dicho examen y que comprendía su utilidad. Sin embargo encontramos ejemplos por parte de ONG egipcias, como la iniciativa egipcia para los derechos personales de que el gobierno egipcio había presentado información falsa sobre la discriminación religiosa.

Sobre la relación entre los musulmanes y los coptos, Mufid Shihab expresó que estas habían sido “sanas y positivas durante decenios” y que “las tensiones que se habían manifestado recientemente estaban principalmente asociadas al radicalismo y extremismo”.

Tras la lectura por parte de los estados miembros de las recomendaciones que se le había hecho a Egipto hubo distintos comentarios y quejas, por ejemplo Austria y Finlandia mostraron su preocupación por la minoría copta y la imposibilidad de practicar la libertad religiosa en Egipto. Otro ejemplo fue el de Holanda quien recomendó “eliminar todas las disposiciones legislativas y políticas que pudiesen establecer una discriminación a fieles de otras religiones diferentes al Islam y adoptar una Ley unificada relativa a los lugares de culto”; y los Estados Unidos de América recomendaron “modificar las leyes y las prácticas gubernamentales discriminatorias concernientes a miembros de minorías religiosas”.

En conclusión, tras el examen de la institución que llevo a cabo el análisis, cabe destacar los comentarios escritos en el año 2000 por Scott Kent Brown (citado a través de Chaillot, 2011) De acuerdo con sus ideas si el Gobierno Egipcio tiene una respuesta lenta a las amenazas de violencia contra los coptos y no lleva a cabo investigaciones adecuadas sobre quien ha cometido estos actos de violencia, el Estado Egipcio está violando sus obligaciones con el Pacto Internacional relativo a los derechos civiles y políticos. Si el Gobierno Egipcio no tiene en cuenta los casos de violencia y no hace nada para pararlos, esto significará que los culpables seguirán quedando impunes. Por tanto, es necesario reformar el sistema legal egipcio para proteger los derechos de todos los ciudadanos, y para que se elimine toda forma de discriminación es necesario reformar su Constitución, su justicia y su legislación.

IV. MINORÍAS RELIGIOSAS EN EL RECIENTE CONSTITUCIONALISMO EGIPCIO

4.1 Constituciones de Nasser y Sadat

La principal aclaración necesaria para comprender el devenir de las Constituciones egipcias desde el período de M. Naguib (primer presidente de Egipto como república después de ser una monarquía constitucional (durante la década de 1950) es que ha sido la cúpula militar quien ha dirigido los gobiernos de Egipto. Tras el golpe militar que sufrió el país en ese año y que posteriormente condujo Gamal A. Nasser, se derogó la anterior Constitución y se estableció una nueva de transición en el año 1953, en la que se estableció que la figura principal del gobierno sería el Presidente, que hasta la Constitución de un gobierno fijo sería el líder militar que había llevado a cabo la revolución.

En esta Constitución de transición en la época de Gamal A. Nasser, la cúpula del gobierno (formada por militares) habían asumido el control del país así como de los medios de comunicación (a partir de la promulgación de la Constitución de 1953 los partidos políticos fueron prohibidos en Egipto).

Tres años después, en 1956, Nasser trató de modernizar el país a través de una nueva Constitución, que se sometió a referéndum nacional en 1958. Esta Constitución fijaba una serie de principios fundamentales que serían la base para la posterior Constitución de 1971. En la Constitución del año 1956 ya se establecía, en el artículo 1 que Egipto se declaraba como un Estado árabe soberano, una República independiente y parte integrante de la nación árabe. En cuanto a su religión, en el artículo 3, se establecía que era el islam y su

lengua oficial el árabe. Curiosamente, cabe mencionar, que frente a las Constituciones de otras naciones árabes, la de Nasser establecía que “La soberanía pertenece al pueblo” en lugar de a Dios⁹, así como la pertenencia del Jefe del Estado, la Constitución no prevé la pertenencia de éste a la religión islámica.

Las constituciones redactadas en la época en la que Gamel A. Nasser fue Jefe del Estado en Egipto, destacan cómo la religión islámica es la única que proporciona los valores y principios sobre los cuales se desarrollará la vida civil en el país. Con ello queda patente que, pese a haberse establecido constituciones en las que, aparentemente, no se denigra a la minoría cristiana dentro del país, en la práctica sucede todo lo contrario. “La tradición política egipcia basada en una doctrina que identificaba en el islam sobre todo un principio ordenador del espacio público se adaptaba mal en la Unión con Siria, país caracterizado por un elevado pluralismo religiosos y político en el que el elemento prevalente es el árabe en el sentido étnico-cultural y menos islámico” (U. Haider-Quercia, 2013).

Tras la muerte de Nasser, A. Sadat promulgó una nueva Constitución en el año 1971, tratando de llevar a cabo un programa de reformas para hacer el sistema más liberal y pluralista (más parecido al Estadio sirio del momento), aunque, en realidad, la base del sistema seguía siendo un régimen militar dictatorial.

La Constitución aprobada por el ejecutivo de A. Sadat e el 1971 constituye un modelo de referencia para todo el mundo islámico, ya que fue considerada un paradigma con respecto a las constituciones anteriores en el país. En ella se pueden observar determinadas características y problemáticas que son recurrentes en el constitucionalismo islámico. De acuerdo con U. Haider-Quercia, existen cuatro elementos fundamentales a tener en cuenta: la afirmación del principio según el cual el islam es Estado y religión; el tendencia predominio de la cúspide del ejecutivo; el papel determinante del militar en la vida pública y por último el papel de la jurisdicción en el establecimiento del equilibrio en “Sharia”¹⁰ y Constitución. Esta Constitución trataba de racionalizar una forma de gobierno, siempre sobre el papel, que podría considerarse como semipresidencial o multipartidista. No obstante, como hemos mencionado previamente, esto sólo era sobre el papel y A. Sadat, al aprobar dicha Constitución entró en serias contradicciones como tratar de permitir una autonomía con respecto al ejecutivo, la cual, en realidad, no existía para otras

⁹ En el texto de la Carta constitucional las referencias al valor del Islam son, en su conjunto, genéricas. Ello no impide, sin embargo, que el Islam asuma un carácter estatal: la enseñanza de la religión islámica es, por ejemplo, obligatoria para todos los niños y, en consecuencia, también para aquellos pertenecientes a culturas diversas, en particular cristianos. (U. Haider.Quercia, 2013)

¹⁰ Cuerpo de Derecho islámico. Constituye un código detallado de conducta, en el que se incluyen las normas relativas a los modos de culto, los criterios de la moral y de la vida.

administraciones dentro del país. Además de lo mencionado previamente, la Constitución de 1971 introducía una fuerte legitimación popular de la figura del Presidente, quien, hasta las reformas llevadas a cabo en el año 2005, era nombrado por la Asamblea del pueblo y posteriormente sometido a confirmación mediante referéndum popular; así mismo se sometía a votación popular algunas cuestiones que el Presidente considerase que atañían directamente al pueblo, lo cual daba imagen de ser un gobierno más democrático.

En cuanto al ámbito político se refiere, la Constitución del mencionado año, se detallaba en el artículo 5 que “el sistema político de la República Árabe de Egipto es un sistema multipartidista”. Pese a este artículo, la creación de partidos políticos en el país seguía bajo un estricto control, ya que su creación y desarrollo en la práctica resultaban prácticamente imposibles.

A partir de la década de los 80, Egipto sufre una Regresión en cuanto a derechos civiles, ya que se trata de volver a la tradición de la década de los 50, en el período nasseriano. Se vuelven a “islamizar” las instituciones y se trata de llevar esta tendencia a la vida civil y pública; a todo lo que atañe a la totalidad de la población. En esta década, 1980, la Sharia se eleva a principal fuente de legislación (A. Baldinetti, 2005) acompañada por la creación de una segunda Cámara en el Parlamento que representaba la asamblea constitutiva islámica, única institución de derecho público dentro del Corán.

Encontramos en los párrafos anteriores muchas contradicciones en la Constitución promulgada por A. Sadat y las posteriores medidas. También en la década de los 80 trató de llevar a cabo, a pesar de restaurar la *Sharia* en el Parlamento, un proceso de laicización de la sociedad egipcia que trataba de permitir a las mujeres mayores libertades en su vida cotidiana y un mayor acceso a la educación.

Todos estos derechos que promulgaba la Constitución de 1971 y las ulteriores reformas llevadas a cabo en la década de los 80 tenían un gran número de limitaciones. Dentro de los mismos, haciendo referencia al tema que nos concierne, la comunidad copta, la libertad religiosa se veía coartada dentro de la propia Constitución, continuando, así, la escalada de violencia contra este pueblo y quedando impunes los culpables siempre que perteneciesen a la comunidad islámica del país.

Este episodio en la historia de Egipto se cierra con el asesinato de A. Sadat en 1981, lo cual llevó a Hosni Mubarak a tomar posesión del cargo de Presidente de la República Árabe de Egipto.

A modo de conclusión la sociedad que pretendía construir Nasser era una mucho más socialista y enfocada a las clases bajas del país, con todos los proyectos de nacionalización que llevó a cabo, mientras que Sadat decidió emprender un cambio radical frente a la política de su antecesor, con el que viceministro. Aparentemente las políticas de Nasser podrían haber beneficiado a la comunidad copta, ya que los apoyos de Sadat eran los burgueses de origen musulmán y prefirió contar con los socios de países árabes con capital elevado para la inversión en sus proyectos de modernización de Egipto; sin embargo, ninguno de los dos presidentes prestó demasiada atención a las minorías del país y a los ataques y las discriminaciones que éstas estaban sufriendo en ese momento y llevaban sufriendo a lo largo de los siglos.¹¹

4.2 Constituciones actuales

Una vez finalizado el epígrafe en el que se explican los procesos que dieron lugar a las constituciones egipcias desde la década de 1950, es imperativo dedicarnos de lleno a las constituciones actuales, en las que incluimos desde la promulgada por H. Mubarak hasta la constitución vigente en el año 2015 en Egipto aprobada en el año 2014. Los artículos concernientes a este estudio, religión y conflictos étnicos, se presentan en inglés (obtenidos en este idioma de la fuente original a consultar en la bibliografía; las Constituciones completas se adjuntan en los anexos) y su traducción al castellano para establecer, posteriormente, una comparación entre las tres constituciones y los artículos que conciernen a las libertades religiosas y étnicas.

Antes de analizar los artículos concernientes a las Constituciones más recientes de la República Árabe de Egipto (2011, 2012 y 2014), se hace conveniente una introducción sobre el ascenso al poder de Hosni Mubarak, al morir asesinado su predecesor, A. Sadat.

Teóricamente, H. Mubarak ostentaría el cargo de Presidente de la República Árabe de Egipto tan sólo de forma transitoria. Sin embargo, y como hemos podido leer en el punto referente a la historia moderna de Egipto, estuvo en el cargo durante treinta años, ya que pudo beneficiarse de la derogación de un límite de mandatos que había introducido su predecesor. No llegaron por parte del Presidente Mubarak reformas institucionales hasta 2005 y de nuevo introdujo reformas en 2007, aparentemente con el fin de implicar a la población en la esfera política; además trataban de presentar la imagen del Presidente, con

¹¹ Nótese que pese a no estas incluído con epígrafe dentro de otros puntos del trabajo, se le ha dado una importancia especial, ya que se trata de relatar la sociedad en las épocas de ambos Presidentes egipcios. No se ha ahondado más, pues en el punto III se trata con mayor profundidad las políticas llevadas a cabo por ambos, Nasser y Sadat.

un mayor control y limitación de poderes en su figura. Sin embargo, Mubarak mantuvo, hasta su caída, un papel totalitario. En teoría, Mubarak ascendió al poder tras el asesinato de su predecesor en el estado de emergencia, el cual le permitiría ostentar el cargo un año hasta convocar nuevas elecciones. Sin embargo, Mubarak practicó el estado de emergencia sirviéndose de reformas y enmiendas a la Constitución de Sadat y, como se menciona previamente en el párrafo, no introduce reformas hasta los años 2005 y 2007.

Aunque la Constitución contemplaba unas elecciones democráticas, era favorable al candidato que ostentaba el papel de Presidente. Un particular cierre del sistema venía operado por el régimen también en relación con "cualquier actividad política" y "cualquier partido político" fundados "sobre bases religiosas" (art. 5, apartado 2º), lo cual censuraba el ascenso al poder de organizaciones como los Hermanos Musulmanes. A lo largo de su extenso mandato, Mubarak se siguió aprovechando de las reformas introducidas por Sadat para llevar a cabo, por ejemplo, consultas manipuladas.

Los jueces de la Corte Constitucional, nombrados entre juristas de particular relevancia, con el acuerdo del presidente, en realidad no se encontraban en una situación de independencia del poder político (U. Haider-Quercia, 2013). De acuerdo con la Constitución "los actos del Presidente eran sometidos a control de legitimidad constitucional y en una serie de pronunciamientos dicho órgano ha declarado legítimo el gobierno autoritario de emergencia, permitiendo que en el seno de los tribunales de seguridad y de los tribunales militares se desarrollara un sistema paralelo de jurisdicción en el que eran vulnerados una serie de derechos civiles, entre ellos, e del juez natural".

La caída de Mubarak se produce en el año 2011 con su dimisión como Presidente de la República Árabe de Egipto. En ese momento se produce una ruptura del poder constitucional del país con las fuerzas armadas, que han tomado Egipto al margen de la constitucionalidad. Tras estos sucesos, las fuerzas armadas necesitan recurrir al poder jurídico para redactar una nueva Constitución (que será una constitución *ad interim* – declaración constitucional). Ésta constaba de 63 artículos, aunque en su mayoría se habían tomado de la Constitución del año 1971 en la versión que reformó Mubarak en 2005/2007.

La transición tras la dimisión de Mubarak en el poder, las cúpulas militares siguieron varios pasos para hacerse con el poder. El primero de ellos fue asumir un papel predominante en el conjunto de los poderes públicos (U. Haider-Quercia, 2013). El artículo 56 de la proclamación versa <que el Consejo Supremo de las Fuerzas armadas gestiona los asuntos de estado y tiene competencia sobre la legislación, sobre la aprobación de la política

general del Estado y del Presupuesto del Estado, sobre la selección de miembros designados de la Asamblea del pueblo, sobre la convocatoria del Parlamento y sobre la probación y derogación de las leyes >. Por supuesto y para no renunciar al poder ni dejar vacíos legales que impidiesen su supremacía dentro del país, conservaron el artículo 5 de la Constitución del año 1971, el cual dispone que están prohibidas actividades o partidos políticos que hagan referencia a cualquier forma de autoridad religiosa o estén constituidos sobre fundamento religioso.

Así mismo, llevaron a cabo una renovación en las funciones de Sharia, ampliando la función de la Cámara alta del Parlamento (Shura). Mientras que en la Constitución vigente durante la presidencia de Mubarak esta Cámara emitía declaraciones no vinculantes, tras su ceso en el poder se le otorga el poder de requerir su aprobación para poder llevar a cabo reformas constitucionales. Puede que la reforma más importante que se llevó a cabo en este período fue la que estipulaba la necesidad de redactar una nueva Constitución. Para ello las Cámaras debían nombrar a los cien miembros de la Asamblea Constituyentes seis meses después de la constitución de las mismas, a quienes se encargaría la labor de redactar el proyecto de nueva Constitución que posteriormente debería ser aprobada por referéndum confirmativo (convocado, claro está, por el Presidente).

Durante el período de transición, se produjo más un conflicto entre las fuerzas militares y el Islam popular. Por supuesto, las minorías, como los cristianos coptos, se hallaban en medio de los mismos. Aunque los miembros de la Asamblea constituyente deben ser nombrados por el parlamento, la Constitución *ad interim* no especifica el modo de su elección. Esta ambigüedad trajo consigo el problema de que en la primera ronda de nombramientos, un setenta por ciento de los representantes perteneciesen a las Fuerzas islámicas. Por ello, el Tribunal administrativo derogó esta elección a favor de la oposición, ya que se consideraba no representativo de todas las comunidades dentro de la nación (especialmente las mujeres, los jóvenes, las minorías, las corrientes liberales y las corrientes seglares). En abril de 2012 se disuelve esta primera Asamblea constituyente ya que se consideró oportuno que los miembros del Parlamento no podían elegirse a sí mismos como miembros de la comisión que tendría la tarea de elaborar una nueva Constitución. Para superar el escollo, se introdujeron nuevas medidas sobre cómo elegir a los miembros de la Asamblea para que los distintos grupos de la sociedad se vieran así representados. Pese a este cambio en la normativa, en la segunda composición de la Asamblea surgió de nuevo el mismo problema y de nuevo las fuerzas de la oposición, que había intentado llevar a cabo la tarea de configurar una nueva Carta constitucional, se negaron a continuar con su trabajo

pues sentía que el problema persistía, ya que la mayor parte de los miembros electos pertenecía a partidos islámicos.

El punto más importante dentro de esta etapa de transición fue la elección de Mohamed Morsi (candidato de los Hermanos Musulmanes para ocupar el cargo de Presidente de la República Árabe de Egipto) en 2012. Es la primera vez en la historia de Egipto que se elegía a un civil como Presidente. Sin embargo, con el nuevo ejecutivo y las reformas y enmiendas que introduce, el Presidente concentra la totalidad de los poderes legislativo y ejecutivo en su persona. Pocos días antes de terminar los trabajos constituyentes, el Presidente Morsi publica una declaración constitucional que prohíbe examinar el recurso de evitar la disolución de la Asamblea constituyente y que reconoce su poder para legislar hasta la elección de una nueva Asamblea del pueblo, así como que estas decisiones ni pueden ser sometidas a ningún examen judicial (U. Haider-Quercia, 2013).

A Morsi se le presentaban nuevos problemas para poder llevar a cabo las reformas que consideraba necesarias para ostentar el poder, casi absoluto, en el país. Era necesaria, en apariencia someter a referéndum las nuevas medidas constitucionales y esta votación debía estar supervisada por un determinado número de jueces. De nuevo otro fracaso pues la mayor parte de los jueces renunciaron a estar presente en dichas votaciones ya que las minorías y la oposición quedarían en una situación comprometida y discriminatoria. Finalmente, en una segunda ronda, como ya sucedió con la Asamblea constituyente, se aprobó la Constitución y las nuevas medidas introducidas por el nuevo ejecutivo, aunque la sociedad, en su mayoría, seguía exigiendo una mayor democratización de las instituciones y del país.

La Constitución aprobada en el año 2012, pese a tener un fuerte arraigo islámico como se presenta en el artículo 2 el cual permanece redactado exactamente igual a las Constitución de Sadat en el año 1971, se presenta como una Carta Magna ordenada y en la que se encuentran presentes los derechos de todos los ciudadanos, incluyendo a las minorías cristiana y judía dentro de Egipto en su artículo 3; sin embargo no existe ningún artículo (ni en esta Constitución, ni en su antecesora ni en su predecesora) sobre el resto de las minorías existentes dentro de la nación. Esta Constitución garantiza al pueblo su libertad, sus derechos y su dignidad. Sin embargo, las violaciones sistemáticas de la misma hacen que se cuestione su aplicación práctica en todos los casos (especialmente en lo referente a las minorías o a la oposición al régimen establecido por los Hermanos Musulmanes con Morsi a la cabeza). La importancia que se le da a la ley islámica y a su religión recogidas dentro de la Constitución muestran el fuerte carácter confesional del país,

pese a introducir un artículo que tiene en cuenta a las minorías. Es menester recalcar que en ninguna de las Constituciones que se tratan en este punto se habla del laicismo como opción pese a que la Constitución garantiza la libertad de expresión y religión en varios de sus artículos. Esto presenta una gran contradicción, pues los dos primeros artículos expresan claramente que Egipto es una República Árabe, su lengua es el árabe y su religión el Islam.

Tras la caída de Morsi en julio de 2013 a causa de un golpe de estado en el que las Fuerzas Armadas vuelven a tomar el control de Egipto, se redacta la más reciente de las constituciones de este país; en enero de 2014 se aprueba por referéndum popular. Los resultados de la misma son anunciados por Nabil Saleeb (Presidente del Tribunal Supremo) el 18 de enero. La participación electoral no fue muy elevada ya que de los 53 millones de personas con derecho a voto en la nación, sólo ejerció su derecho al voto un 38,6 por ciento, de los cuales un noventa y ocho por ciento votó a favor de la nueva Carta Magna. Ésta entró en vigor el 19 de enero, tras ser aprobada por el Presidente en funciones Adly Monsour.

Dentro de este punto del estudio se ha hablado de las Constituciones previas, por lo que ahora se pondrán de relieve los aspectos más relevantes de la nueva Constitución, tanto positivos como negativos.

Dentro de los elementos positivos y desde el punto de vista de los expertos, puede que esta sea la Constitución que logre reformar las instituciones de la nación a través de la asignación del presupuesto total del Estado a obras públicas (un tres por ciento del PIB) como la salud, la educación o la investigación. Otro elemento positivo de esta nueva Constitución es que destaca el concepto de dignidad humana (por ejemplo, el artículo 52 prohíbe toda forma de tortura y no se sujeta el delito de tortura a un plazo de prescripción), a diferencia de la Constitución previa (año 2012) que no condenaba expresamente la trata de personas (esta nueva Carta Magna dedica un artículo a dicho asunto) y el artículo 64 defiende el derecho absoluto a la libertad de creencia. Otra novedad con respecto a las Constituciones previas es la garantía a la mujer el derecho a ostentar cargos públicos y funciones administrativas de importancia en el país. Por último, cabe destacar dos méritos importantes que ha conseguido llevar a buen puerto la Constitución egipcia de 2014: la posibilidad de, a través de un proceso establecido por la propia Constitución, destituir al presidente; el segundo de ellos es que protege la independencia del Tribunal Constitucional Supremo, ya que el Presidente de la República Árabe de Egipto no tiene el derecho de rechazar los cargos nombrados por la asamblea correspondiente (Asamblea General).

Por lo que respecta a los elementos negativos de la nueva Constitución egipcia de 2014, muchas voces afirman que no está exenta de problemas. Veamos algunos de ellos: los

militares son presentados de forma distinta a los civiles en lo que respecta a su presupuesto (el artículo 204 limita el debate sobre el presupuesto destinado a Defensa y esto debilita el poder del Parlamento); también se establece una diferencia a la hora de nombrar al ministro de Defensa, ya que el Presidente no tendrá potestad para aprobar su nombramiento en solitario y tendrá que contar con la aprobación del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Se otorga el privilegio a los militares de procesar a civiles ante tribunales militares, mediante el artículo 204, sea cual sea el delito que presuntamente haya cometido el civil, lo cual plantea la cuestión de si esto supondría un juicio justo para la persona procesada. Pese a establecer que un tres por ciento de su PIB iría destinados a sanidad, educación e investigación, la realidad de la Constitución es que no plantea ningún mecanismo real a través del cual se adquiera dicho presupuesto. Para finalizar con la exposición de los aspectos negativos de la Constitución de 2014, finalizaremos con uno de los problemas que más voces críticas ha atraído: la atribución de un poder excesivo al Presidente de la República Árabe de Egipto; poderes que se habían derogado junto con la Constitución del año 2012.

A continuación se presentan los artículos que se han considerado más relevantes para este estudio en inglés (tal y como se presenta en las Constituciones adjuntas como anexos) y su traducción al español para que el lector pueda, después de la introducción a las tres Constituciones comprobar la veracidad de las fuentes consultadas.

ARTÍCULOS RELATIVOS A LA RELIGIÓN, ÉTNIAS Y DISCRIMINACIONES DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ÁRABE DE EGIPTO DE 2011

En relación a las minorías religiosas, dentro de esta Constitución nos encontramos con cuatro artículos que son de nuestro interés. El primero, que permanecerá inalterado en las Constituciones ulteriores (artículo 2) promulga que la religión es el Islam y la lengua el árabe, así como que los principios de la ley serán los de la ley islámica. En esta Constitución los ciudadanos tienen derecho a formar asociaciones y cooperativas, así como sindicatos y partidos, siempre y cuando no sean en base a ninguna religión (artículo 4). Constitucionalmente se recoge el derecho a la igualdad y a la no discriminación (artículo 7) así como garantiza la libertad de credo y de prácticas religiosas (artículo 12).

ARTÍCULOS RELATIVOS A LA RELIGIÓN, ÉTNIAS Y DISCRIMINACIONES DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ÁRABE DE EGIPTO DE 2012

Dentro de la Constitución de 2012 encontramos un mayor número de artículos referentes a los derechos de las minorías religiosas. El artículo 2 permanece exactamente

igual que en la Constitución anterior, declarando el poder y la presencia del Islam en la República Árabe de Egipto. En cambio, tanto en esta Constitución como en la ulterior enmienda de la Carta Magna, aparece un artículo interesante, aunque sólo con respecto a las religiones abrahámicas. Este artículo (artículo 3) defiende la ley cristiana y la ley judía, pero sólo obrará en asuntos relacionados con el estatuto personal. También están recogidos la justicia social, la igualdad y la libertad para todos los ciudadanos del país (artículo 8) así como la seguridad e igualdad de oportunidades (artículo 9) con el Estado como garante. El estado también se presenta como defensor de la ética, la moral y el orden público (artículo 11) y asegura prometer la cultura y las características lingüísticas de la sociedad (artículo 12). Con ello se nos da a entender que protegerán el árabe como lengua pero, ¿qué hay de los idiomas minoritarios? No tenemos una respuesta. La libertad personal está recogida en el artículo 34 como inviolable, independientemente de la situación de la persona y en el artículo 43 se recoge la libertad de creencias también como un derecho inviolable, con el Estado como garante.

ARTÍCULOS RELATIVOS A LA RELIGIÓN, ÉTNIAS Y DISCRIMINACIONES DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ÁRABE DE EGIPTO DE 2014

El artículo 2 permanece inalterado. Presenta las mismas palabras que en las Constituciones ulteriores y ocupa el mismo lugar (artículo 2). El artículo 3 al que hacíamos referencia como novedad en la Constitución de 2012 se presenta en el mismo lugar y de la misma manera en este Constitución de 2014; sigue refiriéndose al estatuto personal de cada fiel; es decir, tienen libertad de credo, pero la ley estatal es la ley islámica; eso es algo importante dentro del estudio. La solidaridad y la independencia social están protegidas y garantizadas por el estado (artículo 8), así como la igualdad de oportunidad para todos sin que exista ningún tipo de discriminación (artículo 9). De acuerdo con el artículo 64 de esta Constitución, la libertad de creencias es absoluta para todo el pueblo, aunque esta libertad siempre se verá regulada por ley (nos remitimos al artículo 2, la ley es la ley islámica, por lo que cualquier minoría en caso de litigio tendría las de perder si es por algún asunto o tema religioso).

Existen otra serie de artículos que podríamos haber incluido pues se refieren a las libertades y a la seguridad ciudadana, pero no hablan específicamente de la libertad religiosa o de culto o de la protección a las minorías étnicas o religiosas.

Para terminar este punto central del trabajo, nos remitiremos a un estudio llevado a cabo por el Centro Árabe de Investigación y Estudios Políticos, comparando las Constituciones de 2012 y de 2014 en la República Árabe de Egipto. Este estudio versa sobre

las diferencias (escasas) y similitudes entre ambas Constituciones, pese a haber sido aprobadas por regímenes muy diferentes.

La Constitución de 2014 se aprobó en enero de dicho año a través de un referéndum popular. Resulta irónico que salvo algunos artículos de la nueva Constitución, en su mayoría se asimila bastante a la aprobada durante el mandato del Presidente Morsi (perteneciente a los Hermanos Musulmanes). Otro de los puntos que llama la atención de todos aquellos que se dedican a estudiar las Constituciones es que en ningún momento y tras la revolución de la primavera árabe, se ha discutido sobre el malestar del pueblo para poder reflejar sus necesidades, derechos y deberes dentro de la Carta; así como la autoridad totalitaria de la figura del presidente y la acumulación de todos los poderes en sí mismo, algo totalmente antidemocrático; una de las grandes reclamaciones del pueblo egipcio: la democratización de las instituciones, la eliminación de la corrupción y la separación de poderes. Parece que de nuevo, lo que pretende el nuevo gobierno es aparentar una limpieza en las instituciones, pero su hoja de ruta hasta la fecha no ha dado señales de cambio. Se trata de legitimar sus acciones por y para el bien del pueblo y, en teoría, llevar a cabo las reformas sólo a través de consultas populares.

Sobre la Constitución de 2012, comenzaremos mencionando los puntos de vista ideológicos más importantes que llaman la atención y las modificaciones realizadas *a posteriori* de su redacción.

Existen dos puntos de vista con respecto a las dos últimas Constituciones aprobadas en Egipto. Cada una de ellas se redactó con dos élites en el gobierno de ideología muy distinta: la de 2012 con los Hermanos Musulmanes en el ejecutivo, mientras que la de 2014 se llevó a cabo bajo la supervisión de la élite militar, dirigida por el general Al-Sisi. Pese a que ambos textos contienen una gran cantidad de artículos idénticos, ninguno de los dos rigurosas a la hora de Fender por igual a la sociedad. Ambas tienen una tendencia arbitraria a primar la ideología de las personas en el poder. Aunque la última de las Constituciones egipcias no se dictó por las autoridades militares, como ha ocurrido en Egipto de forma sistemática desde la década de los años 50, sí se ve influenciada por los deseos de dichas autoridades.

La tendencia política que subyace a las disposiciones de ambas constituciones no se puede entender sin revisar el proceso que tiene lugar en la Asamblea Constituyente de 2012. En ese momento, los partidos islámicos, encabezados por la Hermandad Musulmana, trataron de introducir artículos que consiguiesen ganar el apoyo de la élite, incluida la

policía y el poder judicial; una tendencia que, desafortunadamente, ha continuado en el reciente proyecto de constitución. Sin embargo, contrariamente a lo que los medios promueven, la Asamblea Constituyente elegida en 2012 llevó a cabo serias discusiones constitucionales entre las diversas fuerzas sociales y políticas, que abordan temas como el presupuesto militar y el poder judicial, la estructura del gobierno, el tribunal constitucional y público enjuiciamiento. Esta discusión tuvo lugar antes de la polarización de la Asamblea, provocando una crisis en la escena política el país. Fue necesario convocar de nuevo nombramientos para la Asamblea para agilizar la redacción de la Constitución.

Pese a que, aparentemente, existió un consenso entre la sociedad egipcia a la hora de ratificar la Constitución de 2012, nuevos artículos, modificaciones y enmiendas daban un poder casi absoluto al Presidente y a su cúpula, así como a la Sharia y la implantación del Islam a todos los niveles: social, económico, político, etc.

El proyecto de Constitución 2014: El "Estado profundo" escribe su Constitución

El proyecto de Constitución 2014, en contraste con el de 2012, fue antidemocrático. Para empezar, todos los miembros del Comité encargados de enmendar la Constitución fueron nombrados, no elegidos, y los opositores al golpe de Estado fueron despedidos. El reciente proceso de redacción de una nueva Constitución también carecía de transparencia y se llevó a cabo prácticamente en su totalidad a puerta cerrada. Las similitudes entre las dos constituciones son indiscutibles, aunque el Comité ha prestado especial atención a la hora de reformular una serie de artículos en la forma, pero no en el contenido. Esto sólo puede entenderse como un deseo de socavar a sus predecesores en el cargo o como un intento de hacer que se vea un proyecto de Constitución elaborado de forma completamente diferente de la anterior. Los principales cambios en esta nueva Constitución se componen de lo siguiente:

Identidad egipcia

Se redactaron de nuevo y reconsideraron los artículos referentes a la identidad egipcia, mientras que el artículo sobre la Sharia se restauró tal y como se había escrito para la Constitución de 1971. Asimismo, se suprimieron las referencias específicas acerca de la blasfemia contra los profetas, lo cual demostró la presión a la que se había visto sometido el Comité redactor por parte de los salafistas¹² (encabezados por el partido político Nour). Irónicamente se introdujeron artículos contra la blasfemia de apóstoles y profetas.

¹² Movimiento sunnita que reivindica el retorno a los orígenes del Islam, fundando en el Corán y la Sunna

La Presidencia egipcia

En comparación con la Constitución de 2012, se han restaurado determinados poderes a la figura del Presidente en Egipto (por ejemplo los artículos 123, 146 y 147). En la nueva Constitución el gabinete se acerca más a un consejo ejecutivo de las políticas dictadas por el presidente o el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas del Consejo de Seguridad Nacional. En 2012, la Asamblea Constituyente se encargó de distribuir el poder entre el Presidente y el Primer Ministro, como se refleja en los artículos 140 y 159, que requieren de la Presidencia y el Gabinete de Ministros para participar en la toma de decisiones y supervisar su aplicación, en un esfuerzo para frenar la tendencia de que los presidentes se desplacen hacia el autoritarismo.

Al mismo tiempo, la nueva Constitución ha despojado a la presidencia de algún poder, afianzando así los privilegios del "estado profundo". En 2012, en un intento de ganar la lealtad de los militares, se le concedió al estamento militar autonomía relativa (artículo 196). Al Presidente se le dio el derecho de aprobar su propio presupuesto y así como el derecho de consulta por parte del gabinete sobre los proyectos presentados relativos a dicho presupuesto (artículo 197). A los militares también se les dio el derecho de supervisar el sistema judicial militar y poder de dictar sentencias en los delitos que dañan a las fuerzas armadas (artículo 198). Además, la Autoridad de Litigios del Estado y la Fiscalía Administrativa, que fueron objeto de gran controversia dentro de la Asamblea Constituyente debido a su carga innecesaria dentro del presupuesto del Estado, estaban afiliados a las fuerzas armadas. Se debe consultar al ejército, de acuerdo con la nueva Constitución, en el caso de declararse la guerra.

El proyecto de Constitución 2014 mantiene los privilegios anteriores y los fortalece hasta el punto de que el Estado está ahora a merced de sus propias instituciones. En el nuevo proyecto de Constitución, el presupuesto militar ocupa el primer lugar en el presupuesto general del Estado (artículo 203); y la aprobación del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas se ha establecido como condición para el nombramiento del Ministro de Defensa durante dos mandatos presidenciales desde el momento en el que la nueva Constitución entró en vigor (artículo 234 de Transición). Se ha retirado a las fuerzas policiales de estar bajo la autoridad del Presidente (artículo 206), dando lugar a la creación del nuevo Consejo Supremo de la Policía, al cual se debe "consultar en las leyes relativas a la misma" (artículo 207). Estos dos últimos artículos han evitado que policías y personal del

Ministerio del Interior tuviesen posibilidad de reestructurar el Ministerio de Interior y Policía, una exigencia fundamental de la revolución 25 de enero.

El Poder Judicial

El nuevo proyecto establece que todos los poderes relacionados con el poder judicial permanecerían tal y como estaban antes de la Constitución de 2012. Por el contrario, la Constitución 2012 censuró determinadas leyes que regían los derechos políticos y las elecciones presidenciales, legislativas y locales (artículo 177). Este artículo fue escrito después de que el Tribunal Constitucional interfiriese durante el período de transición, lo que provocó la disolución de la Cámara de Representantes y el Consejo de la Shura, y dejando a la Asamblea Constituyente con un poder muy limitado, con el argumento de que las leyes que regulan sus privilegios eran inconstitucionales; interrumpiendo así la proceso democrático durante el período de transición. Permitir que este órgano conserve sus poderes sería una manera de recompensar al Consejo Constitucional, el cual fue la punta de lanza en la lucha política durante el período electoral del primer presidente después de la revolución. Ese mismo tribunal era un instrumento para evitar de manera legal el camino a la democratización de las instituciones y del país. Ese mismo tribunal era un instrumento para "legalmente" interrumpir el camino de la democratización. Vale la pena mencionar que la forma de nombramiento de los órganos no judiciales era un medio de exclusión utilizado por el poder ejecutivo contra los jueces de la oposición.

La separación de los Partidos Políticos y Religión

Se incluyeron artículos con una clara vocación de represalia en esta nueva Constitución, los cuales podrían ser utilizados en contra de la oposición islámica. El artículo 74 prohíbe expresamente la creación de partidos políticos sobre los principios de una religión, el cual se introdujo junto con otro artículo que compromete al Estado a enfrentarse a toda forma de terrorismo y eliminar sus cimientos (artículo 237).

Religiosas y culturales

Se han introducido artículos para reinstaurar al pueblo Nuba, para tener en cuenta las culturas de las comunidades locales (artículo 235) y para permitir la renovación y construcción de iglesias (artículo 235). Es innegable que estas disposiciones son positivas y deberían haberse tenido en cuenta en las leyes de transición antes del golpe de Estado, sin

embargo, también pueden verse como una maniobra política cuyo fin es fortalecer las bases sociales del golpe.

Los miembros del Partido Nacional Democrático

La constitución 2012 contiene un artículo impidiendo a la dirección del disuelto Partido Democrático Nacional su participación en la vida política o su imposibilidad de presentarse a unas elecciones presidenciales o legislativas durante diez años a partir de la entrada en vigor de la Constitución. La nueva Constitución no hace mención alguna a este asunto.

Derechos y Libertades

Con un simple vistazo a los artículos constitucionales que hacen referencia a las libertades y a los derechos civiles, es sencillo comprobar que no están a la altura de una Constitución que promueve, en su seno, la democracia. Los derechos de libertad de prensa, reunión, partidos políticos y sindicatos, aunque presentes en esta Constitución de 2014, se encuentran restringidos por pequeños detalles legales que coartan la libertad ciudadana.

En general, con la excepción de la modificación de los artículos relacionados con el Estado y sus funciones, está claro que el resto de las modificaciones se hicieron para fortalecer los cimientos del estado existente, incluyendo el ejército, el Ministerio del Interior, y el poder judicial; para reforzar su independencia y su inmunidad contra cualquier futuro oponente. El resultado de la votación, por lo tanto, no va a influir en la reestructuración o reforma del Estado, lo cual inhibe la vía democrática. En última instancia, el Comité, aparentemente con el apoyo de la mayoría de la población, ha sacrificado un estado civil en favor de las enmiendas de mediana importancia que se ajustan a las necesidades de la élite y sus luchas con los islamistas.

El problema con las Constituciones de Egipto

Las cifras iniciales disponibles de la Comisión Suprema de Elecciones en Egipto revelan que alrededor del 15% de los votantes expatriados participó en el referéndum para el proyecto de constitución realizado en 2014, representando alrededor de un tercio de los participantes en el referéndum popular para la aprobación de la Constitución de 2012. Esto podría sugerir la renuencia de los ciudadanos ejercer su derecho al voto, bien sea por razones de apatía política o por el deseo de boicotear el referéndum. En cualquier caso, la posibilidad de una baja participación proyectaba una sombra de duda sobre la legitimidad de la nueva Constitución, sobre todo porque el porcentaje de votación fue la justificación de

la oposición egipcia para dudar de la legitimidad de la Constitución de 2012. En el pasado, el Frente de Salvación Nacional atacó el referéndum bajo el pretexto de que la participación electoral era baja, ya que los resultados de la constitución 2012 revelaron que sólo dos terceras partes de todos los ciudadanos egipcios con derecho a voto lo habían ejercido. Con el boicot del referéndum por parte de la Hermandad Musulmana y sus aliados, se espera que la nueva Constitución obtenga un mayor apoyo. Esto significa que la mayoría de los votantes son partidarios de esta constitución, lo cual no es sorprendente dada la de los medios de comunicación egipcios tratando de instar a los ciudadanos a la "movilización" a para aprobar una nueva constitución que conduzca a la estabilidad, la reconstrucción, el desarrollo y la prosperidad.

La batalla que rodea la nueva constitución no está vinculada al número de personas que la apoyan sino con el porcentaje de participación. Dado el hecho de que el régimen actual depende principalmente de los números como una forma de mostrar su conducta política, tales como el número de manifestantes, se puede esperar que continúe con su política de "movilización", y manipular las tasas de participación para legitimar la constitución.

El nuevo régimen deberá enfrentarse a la primera prueba: ¿Va a cumplir con sus propias reglas? Para ilustrar esto, a pesar de que hay una serie de artículos que detallan la confrontación con la oposición egipcia, como la cláusula antiterrorista, una serie de otras leyes emitidas por el gobierno y el presidente interino Adli Mansour se convertirán automáticamente en artículos inconstitucionales, incluyendo la ley de huelga y la decisión de cerrar una serie de canales vía satélite. Parece que la visión del mundo árabe con respecto a los países en los que se redactan constituciones es que no existe la injusticia, aunque hayan sido golpistas quienes gobiernen y hayan redactados dichas Constituciones. Aparentemente no se considera vivir bajo el yugo de una tiranía.

VI. CONCLUSIONES

Copto (del griego egipcio) hace referencia a los egipcios que profesan algún tipo de fe cristiana: Iglesia Copta, Iglesia Ortodoxa Copta, Iglesia Católica Copta e Iglesia Evangélica Copta. Este trabajo trata en su mayoría el estudio del cristianismo copto (10% de la población egipcia). En su mayoría pertenecen a la Iglesia Ortodoxa Copta; sin embargo, en muchas ocasiones, los textos de todas las iglesias coptas se entremezclan ya que sus orígenes fueron los mismos.

1.- Devenir Histórico

El pueblo copto egipcio “es conocido” como “los egipcios viejos” (algunos de ellos consideran que sus antecesores fueron los constructores de las Pirámides), procedentes del Egipto gobernado por los faraones. En el siglo I DC, los discípulos de Jesús de Nazaret emigran a zonas colindantes de Jerusalén para cristianizar otros pueblos. A Egipto llega San Marcos -El Evangelista- con la “buena nueva” y en unos años, prácticamente toda la población egipcia, abrazó la nueva religión.

La Iglesia Ortodoxa Copta nace con la escisión en el siglo V DC del resto de la Iglesia Católica, debido a las disputas cristológicas, adoptando los coptos el monofisismo (doctrina teológica de acuerdo con la cual Jesús sólo tiene naturaleza divina y no humana).

En el siglo VII DC los árabes invaden Egipto con su nueva religión, el Islam. Tras su conquista, la gran mayoría se ven abocados a convertirse al Islam dado que las condiciones impuestas por sus nuevos gobernantes para mantener su religión cada vez eran más severas. Sin embargo, un grupo importante, y a pesar de las dificultades impuestas por sus invasores, mantienen su fe cristiana, surgiendo lo que hoy conocemos como cristianos coptos.

A lo largo de estos trece últimos siglos, el pueblo copto egipcio ha mantenido su religión (cristianismo), su cultura y su propio idioma, lo que les ha supuesto un mayor esfuerzo para salir adelante. Esto demuestra una gran perseverancia por su parte puesto que, para ellos, las condiciones de vida cada vez eran más penosas y complicadas.

En el momento actual, esta Iglesia tiene su Papa en Alejandría y es autónoma del resto de las distintas confesiones de la cristiandad. Su Papa no depende ni del Papa de Roma ni de ninguno de los patriarcas ortodoxos.

El pueblo copto ha gozado de épocas de tranquilidad después de la invasión árabe, aunque la vida cotidiana les ha resultado complicada. En la actualidad su situación se ha vuelto cada vez más precaria, debido, principalmente, al avance del islamismo radical desde Oriente Medio hasta el Norte de África.

2.- Estructura comparada de las religiones Copta y Musulmana

Podemos encontrar similitudes en las creencias de ambos pueblos. Los dos siguen una religión cuyo centro es un único dios, es decir, una religión monoteísta. También podemos afirmar que ambas tienen ritos específicos recogidos en sus sagradas escrituras,

aunque, por supuesto, completamente diferentes la una de la otra; pero que practican de forma regular y con gran obediencia en los dos casos. Sin embargo, es mucho más aquello que las diferencia que lo que podría hacerlas similares, lo cual, inevitablemente, las aleja.

Sin duda, lo más sobresaliente en la comparación de ambas religiones es su enfoque en relación con una fe distinta a la propia. Mientras que los musulmanes y su “guerra santa” mantienen una gran belicosidad y agresividad para dominar e imponer su fe a las poblaciones conquistadas, el pueblo copto egipcio se ha caracterizado por tratar de evitar las confrontaciones a toda costa a lo largo de toda su existencia. Desde su inicio ha sido una comunidad pacífica y muy entregada a sus deberes como cristianos. Aceptaron sin lucha la invasión árabe, así como todas las condiciones (impuestos, guetos, restricciones para construir sus iglesias o celebrar sus ritos, etc.). Incluso, en algunas ciudades, tienen su propio “barrio copto” (los Zabbaleen son importantes recolectores de basura en El Cairo).

Este pacifismo y seguimiento incondicional de las doctrinas cristinas (“amar al prójimo como a uno mismo”) ha tenido como resultado que en sus veinte siglos de existencia no haya existido ningún tipo de radicalismo por parte de los cristianos coptos de Egipto. No obstante, cabe destacar que en 1919 hubo una revolución por parte de esta minoría como consecuencia de los abusos sufridos a lo largo de los siglos. Sin embargo, no les sirvió para mejorar sus condiciones de vida dentro del país. Aunque no hayan conseguido encontrar un lugar de reunión con su religión invasora, los coptos rezan por que llegue ese momento, celebran fiestas en fechas señaladas para los musulmanes y tratan de convivir con sus vecinos con el mayor de los respetos. La Iglesia Copta sigue un calendario propio, denominado *El Calendario Alejandrino*, el cual proviene del calendario egipcio. Éste contiene la introducción del sexto día en el decimotercer mes cada cuatro años para compensar el año bisiesto.

Otra diferencia no menos importante que la anterior es la separación total entre Iglesia y Estado que estable la doctrina copta y que han mantenido a lo largo de su historia; mientras que en el Islam podemos observar cómo a lo largo de los siglos esta interferencia se da cada vez más en los países con un mayor número de seguidores a las doctrinas del Corán.

3.- Aspectos políticos en la inserción de los coptos en la sociedad egipcia

Los coptos han vivido más de trece siglos bajo la dominación árabe. No obstante, han conseguido que se “respete” su idioma, su religión, sus costumbres y su cultura. La sociedad copta es muy variada dependiendo de la región egipcia en la que residan. Pueden

dedicarse a la agricultura o a la ganadería y vivir de una forma muy humilde o, por el contrario, vivir en las grandes ciudades del país y regentar negocios muy prósperos, como joyerías (los cuales se ven cada vez más amenazados y por ello la creciente migración de los egipcios coptos a otros países donde ya existen comunidades coptas significativas).

En las grandes ciudades, especialmente en El Cairo, los coptos se han dedicado durante siglos a recoger la basura de la ciudad, siendo el colectivo más despreciado dentro de la sociedad egipcia. A pesar de las pésimas condiciones de su trabajo consiguen reciclar el 80% de los residuos que recogen mientras que las empresas dedicadas a este menester apenas reapruechan un 20%.

Podríamos pensar que dentro de una comunidad agrícola situada en alguna de las regiones más deshabitadas de Egipto, sus habitantes serían tolerantes con los defectos de su vecino, pues al ser menos y necesitarse más, cabría esperar dicho comportamiento; mientras que en las grandes ciudades podemos tender hacia la idea de los disturbios y la discriminación. La realidad es que los coptos sufren agresiones y discriminaciones allá donde viven, no importa el lugar o región de Egipto. La mayoría musulmana no tolera que sus vecinos sigan profesando una fe distinta a la suya.

Se ha observado a lo largo del estudio que la primordial (quizás la única) fuente de conflicto entre musulmanes y egipcios coptos es la religión, porque coinciden en otros puntos tan importantes como la importancia de tener familias numerosas, el mantenimiento del patriarcalismo aun en el siglo XXI, la relegación de la mujer a un segundo plano, etcétera.

En los puntos del trabajo dedicados a las constituciones, desde la caída de la monarquía del rey Faruq, hemos podido ver cómo cada una de ellas mejoraba el estatus de los cristianos coptos con respecto a su vida diaria. Los artículos que hacen referencia a sus derechos y libertades han ido en aumento con cada nueva constitución.

Ninguno de los tres Jefes de Estados egipcios del siglo pasado (Nasser, Sadat y Mubarak), a pesar de las presiones de organismos internacionales, dieron facilidades reales a la comunidad copta para su integración en la sociedad egipcia.

4.- El papel de la Constitución en la realidad social

A pesar de lo mencionado en la conclusión anterior, la realidad social es muy distinta de lo que persiguen los artículos promulgados en las últimas constituciones. Es cierto que en la Constitución aprobada en 2014 los derechos y deberes de los judíos y los cristianos están recogidos en el artículo 3 (así como en la Constitución de 2012). Sin

embargo, no se recogen artículos que defiendan de manera específica los derechos de las minorías.

Tras la lectura de numerosos artículos que han estudiado los pros y los contras de la última Constitución aprobada en Egipto, es cierto que ésta recoge un artículo dedicado a las dos religiones Abrahámicas, pero éste sólo manifiesta que su religión sólo altera su estatus personal. La lengua del país es el árabe y su religión el Islam.

Hemos dedicado un epígrafe a las diásporas a lo largo de los años de esta comunidad. Desde la década de los 50, la migración de cristianos coptos desde la República Árabe de Egipto ha ido aumentado. En la última década lo ha hecho de forma exponencial debido al fanatismo religioso islamista y los ataques y atentados sufridos en sus barrios y lugares de culto.

Por todo ello, se recoge en este último párrafo la idea más importante del estudio: pese a la mejora de las condiciones de los cristianos coptos a través de los textos legales más importantes de un país (su Constitución) la realidad social es completamente distinta. Supuestamente sus condiciones de vida deberían haber mejorado y su integración en la sociedad egipcia avanzado hasta llegar a un entendimiento mutuo; sin embargo, la realidad es que cada vez más coptos tratan de abandonar su país por las presiones internas. Cada día sufren nuevos atentados, nuevas muertes. Tratan de emigrar a lugares como Ohio, donde hay comunidades coptas asentadas desde hace ya varios años y saben que encontrarán refugio, comprensión y libertad. La libertad de culto y el derecho a la integridad personal están recogidos en la Constitución vigente egipcia; sin embargo, el pueblo copto no deja de sufrir vejaciones y discriminaciones.

Concluimos un estudio sobre un pueblo que reza por todos los demás, que no se enfrenta a sus enemigos porque considera que la raza humana no puede tener enemigos y que le abra la puerta a su invasor con la esperanza de poder convivir y compartir la tierra que habitan. Desgraciadamente para ellos (y con esto nos dan una lección al resto del mundo) muy pocos de entre los habitantes de este planeta han sabido responderles con la misma moneda y ofrecerles tolerancia, comprensión y paz.

VII. BIBLIOGRAFÍA

Chaillot, C. 2011. "Les Coptes d'Egypte. 1970-2011 Discriminations et persecutions". Éditions l'Oeuvre. París.

Al-Sayyid Marsot, A. L. 2008 "Historia de Egipto. De la conquista árabe al presente". Ediciones Akai, S. A. Madrid.

Kammerer, W. 1969 "A Coptic Bibliography" University of Michigan General Library Publication. Michigan.

Atiya. A. S. 1989 "The Coptic Encyclopedia" (8 vols.) Nueva York.

Atiya A. S. 1991 "Claremont Coptic Encyclopedia" ed. NY: Macmillan

Fr. Mikhail E. 2000 [en línea] "Pope Shenouda III" Coptic Orthodox Church Network. Ohio. Disponible en: <<http://www.copticchurch.net/topics/pope/>>. Última consulta: 30/06/2015

Atiya, A. S. 1968 [en línea] "The Copts and Christian Civilization" Indiana. Disponible en: <www.coptic.net>. Última consulta: 30/06/2015

Asamblea General de Naciones Unidas - Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal 2014 [en línea] "Egipto". Disponible en: <<http://search.ohchr.org/results.aspx?k=egipto%202010>>. Última consulta: 30/06/2015

Haider-Quercia, U. 2013 "La Constitución Egipcia de 2012: Líneas de desarrollo y prospectiva". ReDCE. Año 10. Págs. 185-217. Granada

Buchanan, K. 2014 [en línea] "Perspective on Egypt's 2014 Constitution". Library of Congress blog. Washington D. C. Disponible en: <<http://blogs.loc.gov/law/2014/02/perspectives-on-egypt-s-2014-constitution/>> Última consulta: 30/06/2015

Doha Institute for Graduate Studies 2014. [en línea] "Egypt: A comparison between the 2012 and 2014 Constitutions". Arab Center for Research and Policy Studies. Doha. Disponible en: <<http://english.dohainstitute.org/release/77756cec-a26f-4bfb-8b6a-2f42fa8d23bd>> Última consulta: 30/06/2015

Gil Benumeya, R. 1972 [en línea] "Actualidad de Egipto ante los veinte años de su Revolución". Revista de Política Internacional, nº122, Págs. 235-243. Madrid. Disponible en:

<<file:///C:/Users/Eugenia/Downloads/Dialnet-ActualidadDeEgiptoAnteLosVeinteAnosDeSuRevolucion-2494811.pdf>>. Última consulta: 30/06/2015

Chakar, T. 2003 [en línea] “*The present Postponed*”. Revista de Arteleku-ko aldizkaria, Nº51, Págs. 44-57. Universidad de León. Disponible en: <https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAAahUKEwjTxpHbv_fGAhVHWxQKHWJDBRk&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fejemplar%2F83222&ei=EiS0VdP1Ase2UeKGlcgB&usg=AFQjCNEmNogailjZjDcGu7Ia5duoiOajw>. Última consulta: 30/06/2015

Al Desoukie, O. 2011 [en línea] “*En el corazón de la Primavera Árabe*”. Revista de Amnistía Internacional, nº 110, Págs. 26-28. Madrid. Disponible en: <<https://www.es.amnesty.org/noticias/revista/110-septiembre-octubre-2011/>>. Última Consulta: 30/06/2015

Lotfy, M. 2012 [en línea] “*Egipto*” Informe de Amnistía Internacional “*Año de Rebelión*” Págs. 9-15. Londres. Disponible en: <http://www.upf.edu/upfsolidaria/pdf/Axo_de_rebelion.pdf> Última consulta: 30/06/2015

Áabic Republic of Egypt's 2011 Constitution [en línea] Disponible en: <www.idea.int>. Última consulta: 30/06/2015

Áabic Republic of Egypt's 2012 Constitution [en línea] Disponible en: <www.Idea.int>. Última consulta: 30/06/2015

Áabic Republic of Egypt's 2014 Constitution [en línea] Disponible en: <www.sis.gov.eg/Newyr/Dustor-en001.pdf> (traducción no oficial). Última consulta: 30/06/2015

VIII. ANEXOS

Se adjuntan como documentos anexos a este estudio las tres Constituciones de Egipto con las que se ha trabajado en el punto V. Éstas se adjuntan en inglés, puesto que son las que se ha utilizado para elaborar la información aquí presentada.

- **Constitución de la República Árabe de Egipto de 2011**
- **Constitución de la República Árabe de Egipto de 2012**
- **Constitución de la República Árabe de Egipto de 2014¹³**

¹³ La copia que se adjunta de esta Constitución es una traducción no oficial. Cfr. www.sis.gov.eg/Newvr/Dustor-en001.pdf

English Version of the 2011 Interim Constitution of the Arab Republic of Egypt*

Supreme Council of the Armed Forces Constitutional Announcement – March 30, 2011

After reviewing the Constitutional Announcement of 13 February and the results of the referendum on constitutional amendments of 19 March (which were announced in the affirmative on 20 March), and in consideration of the SCAF statement of 23 March, the following has been decided:

Article 1: The Arab Republic of Egypt is a state with a democratic system, based on citizenship, and the Egyptian people are a part of the Arab nation working toward achieving its comprehensive unity.

Article 2: Islam is the religion of the state, and the Arabic language is its official language. The principles of Islamic law are the chief source of legislation.

Article 3: Sovereignty is from the people only, and the people are the source of authority. The people practice this sovereignty and protect it, safeguarding national unity.

Article 4: Citizens have the right to form associations, unions, syndicates, and parties, according to the law. It is forbidden to form associations whose activities are opposed to the order of society or secret or militaristic in nature. It is not permitted directly to engage in political activity or form political parties on the basis of religion or division due to race or origin.

Article 5: The economy in the Arabic Republic of Egypt is based on developing economic activity and social justice and guaranteeing different forms of property and preserving the rights of workers.

Article 6: Public property is protected, and its defense and support is a duty incumbent on every citizen, according to the law. Private property is safeguarded, and it is not permitted to impose guardianship over it except through the means stated in law and the judiciary. Property cannot be removed except for the public benefit and in exchange for compensation according to the law, and the right of inheritance is guaranteed.

Article 7: Law applies equally to all citizens, and they are equal in rights and general duties. They may not be discriminated against due to race, origin, language, religion, or creed.

Article 8: Personal freedom is a natural right, safeguarded and inviolate, and except in the case of being caught in the act of a violation, it is not permitted for anyone to be detained or searched or for his/her freedom to be restricted or for movement to be prevented, except by a warrant order compelling the necessity of investigation or to safeguard the security of society. This warrant order will be issued by a specialized judge or the general prosecutor, according to the law. The law also determines the period for which one may be detained.

* Source: Carnegie Endowment for International Peace

<http://egyptelections.carnegieendowment.org/2011/04/01/supreme-council-of-the-armed-forces-constitutional-announcement>

Article 9: Every citizen who is arrested or detained must be treated in a way that preserves his/her human dignity. It is forbidden for him/her to be abused in body or mind, as it is forbidden to detain him/her in places outside of those designated by the prisons law. Any statement proven to be extracted from a citizen under duress or threat will not be counted and is unreliable.

Article 10: Homes are protected and it is not permitted to enter or search them without a warrant according to the law.

Article 11: The life of citizens has special sanctity protected by law, as do messages sent by post, fax, telephone or other forms of communication, whose secrecy is guaranteed. It is not permitted to confiscate, read, or censor these, except by judicial order and for a limited time, according to the law.

Article 12: The state guarantees the freedom of creed, and the freedom to practice religious rites. Freedom of opinion is also guaranteed, and every person has the right to express his opinion and publish it in spoken, written, photographed, or other form within the confines of the law. Personal criticism and constructive criticism are a guarantee for the safety of national development.

Article 13: Freedom of the press, printing, publication and media are guaranteed, and censorship is forbidden, as are giving ultimatums and stopping or canceling publication from an administrative channel. Exception may be made in the case of national emergency or time of war, allowing limited censorship of newspapers, publication, and media on matters related to general safety or the purposes of national security, all according to the law.

Article 14: It is not permitted for any citizen to be denied residence in a particular area, nor requiring him/her to reside in a particular place, except in cases designated by law.

Article 15: It is not permitted to expel a citizen from the country or forbid him/her from returning, or to give up political refugees.

Article 16: Citizens have the right of private assembly in peace without bearing arms without the need for prior notice. It is not permitted for security forces to attend these private meetings. Public meetings, processions and gatherings are permitted within the confines of the law.

Article 17: Any attack on the personal freedom or sanctity of life of citizens or other rights and general freedoms which are guaranteed by the constitution and law is a crime, which will be followed by a criminal or civil suit according to the statute of limitations. The state guarantees fair compensation for whoever experiences such an aggression.

Article 18: Public taxes will be instituted and their amendment or cancellation will take place by law. No one will be excluded from taxation except in cases stated in law. It is not permitted for anyone to charge another to pay taxes or fees except within the bounds of law.

Article 19: Personal penalty. There will be no crime or penalty except according to the law. Punishment will not take place except by judicial ruling, nor will punishment occur for acts that take place before enactment of the relevant law.

Article 20: The accused is innocent until proven guilty in a court of law that guarantees for him/her defense. Every accused in a crime is required to have an attorney to defend him/her.

Article 21: Litigation is a safeguarded and guaranteed right for all people, and every citizen has the right to resort to his natural judge. The state guarantees close association of judicial apparatuses with litigants, in addition to a speedy trial of matters. The text of the law forbids any action or administrative decision from being absolved of judicial oversight.

Article 22: The right to defend one's self in person or by proxy is guaranteed. The law guarantees those unable monetarily to defend themselves to resort to the judiciary for means to defend their rights.

Article 23: Anyone arrested or detained will be notified of the reason for his/her detention immediately. He/she has the right to contact whomever he/she desires and inform them of the arrest and seek help, according to the law. It is necessary that accusations be announced with haste, and the detained has the right to appeal in front of the judiciary to determine the circumstances in which his/her personal freedom was suspended. The law organizes the right to present a grievance in order to guarantee a decision in a limited time period, or else the detainee's release is inevitably released.

Article 24: Laws are issued and executed in the name of the people, Suspension or avoidance of their execution on the part of public employees is a crime punishable by law. The plaintiff has the right to bring the criminal case directly to a specialized court.

Article 25: The president of the state is the president of the republic. He/She shall assert the sovereignty of the people, respect for the constitution and sovereignty of the law, and defense of national unity and social justice, according to means stipulated in this Announcement and the law. He/shall shall undertake upon assuming his/her position responsibilities referred to in Article 56 of this Announcement, except for what is stipulated in provisions 1 and 2 of the Article.

Article 26: It is required for whoever is elected president of the republic to be Egyptian, born of two Egyptian parents who do not have another citizenship, enjoying his/her political and civil rights, not married to a non-Egyptian, and not falling under the age of 40 years

Article 27: The president will be elected directly by general secret ballot. To be nominated for the presidency of the republic, a candidate must be supported by 30 members at least of the elected members of the People's Assembly and Shura Council, or the candidate may obtain the support of at least 30,000 citizens, who have the right to vote, in 15 provinces at least, whereby the number of supporters in any of the provinces is at least 1,000. In all cases, it is impermissible for support to be for more than one candidate, and the law will stipulate the procedures for this matter. Every political party with members who have won at least one seat by way of election in either of the People's Assembly or Shura Council in the last elections may nominate one of its members for the presidency.

Article 28: A supreme judicial commission named the "Presidential Elections Commission" will supervise the election of the president of the republic beginning with the announcement of the opening of candidate nomination and ending with the announcement of the election result. The Commission will be composed of the president of the Supreme Constitutional Court as the head, and a membership made up of the president of the Cairo Appeals Court, the most senior deputies of the president of the Supreme Constitutional Court, the most senior deputies of the president of the Court of Cassation and the most senior deputies of the president of the State Council.

The Commissions decisions will be final and executed, without interjection of any side, in the same manner as it is forbidden for the decisions to be stopped or canceled. The purview of the Commission

will be by law. The Commission will form committees to supervise voting and counting according to the stipulations in Article 39 [88]. Draft legislation for presidential elections will be shown to the Supreme Constitutional Court before being issued to determine the extent of compliance with the constitution. The Supreme Constitutional Court will issue its decision on this matter within 15 days of receiving the draft legislation. If it decides that the text is unconstitutional, more work must be done before the law can be issued. In all cases, the decision of the Court will be obligatory for all authorities of the state, and will be published in the official gazette within three days of being released.

Article 29: The period of the presidency is four years beginning from the date of announcing the result of the election, and it is not permitted for the president of the republic to run again for the presidency except once more.

Article 30: The president will take the following oath before the People's Assembly before assuming his/her position: "I swear to God that I will faithfully preserve the republican order, that I will respect the constitution and the law, and look after the interests of the people comprehensively, and that I will preserve the independence of the nation and the safety of its land."

Article 31: The president of the republic will appoint within a maximum of 30 days after assuming his/her duties at least one vice president and determine his/her responsibilities, so that in the case of his/her stepping down from the position of president, another will be appointed in his/her place. The conditions that must be met by the president will apply, as will rules governing the accountability for vice presidents of the republic.

Article 32: The People's Assembly will be composed of a number of members determined by law to be at least 350, half of whom at least will be Workers and Peasants. The members of the People's Assembly will be elected by a direct, public and secret election. The law stipulates the definition of a Worker and Peasant, as well as the electoral districts that the state will be divided into. It is possible for the president of the republic to appoint in the People's Assembly a number of the members, not to exceed 10.

Article 33: Immediately upon election, the People's Assembly will assume the authority to legislate and determine the public policy of the state, the general plan for economic and social development, and the public budget of the state. It will also oversee the work of the executive branch.

Article 34: The People's Assembly's term will be 5 years starting from the date of its first assembly.

Article 35: The Shura Council will be composed of a number of members determined by law not to be fewer than 132 members, two-thirds of whom will be elected by direct, public and secret voting (at least half Workers and half Peasants), and one-third of whom will be appointed by the president of the republic.

The law determines the electoral districts for the Shura Council.

Article 36: The Shura Council's term of membership will be 6 years.

Article 37: The Shura Council will assume its responsibilities upon election. It will study and recommend what it views as necessary to preserve support for national unity and social peace and protect the foundational elements of society and its highest values, in addition to rights, freedoms and general obligations. The Council will consider the following:

- 1) The project of general planning for economic and social development
- 2) Draft laws it refers to the president of the republic
- 3) Whatever the president of the republic refers to the Council on subjects related to the state's public policy or policies related to Arab and foreign affairs

The Council will notify the president of the republic and the People's Assembly of its opinion on these matters.

Article 38: The law will govern the right of candidacy for the People's Assembly and Shura Council according to the determined electoral system, including at a minimum the participation of women in both assemblies.

Article 39: The law determines the conditions that must be met for members of the People's Assembly and the Shura Council, stipulating electoral and referenda provisions. A supreme commission made up entirely of judges will assume the responsibility of supervising elections and referenda, from the determination of electoral schedules to the announcing of election results, all as regulated by law. Voting and the counting of votes will take place under the supervision of members of judicial bodies nominated by their higher councils, and the decision in the process of choosing them will be undertaken by the supreme commission.

Article 40: The Court of Cassation will be designated to determine the integrity of the membership of the People's Assembly and Shura Council, and objections will be presented to the court within 30 days of the announcement of election results. The Court will rule on the objection within 90 days of receiving it. The membership is considered void on the date on which the two assemblies are informed of the Court's decision.

Article 41: Electoral procedures will begin within 6 months of the date of this Announcement. The Shura Council will assume its duties with elected members, and upon his/her election, the president of the republic will appoint the final third of the Council's membership, who will serve out the remainder of the term of the Council as regulated by law.

Article 42: Every member of the People's Assembly and Shura Council will swear to conduct work in accordance with the following oath in front of his/her legislative body: "I swear to God that I will faithfully preserve the safety of the nation and the republican order, that I will look after the interests of the people and respect the constitution and the law."

Article 43: It is not permissible for any member of the People's Assembly or the Shura Council during his/her tenure to buy or rent anything using state money, or to rent out or sell anything with said money, or barter with it or enter into a contract with the state as an entrepreneur, importer, or contractor.

Article 44: It is not permissible to remove the membership of any members of the People's Assembly or Shura Council unless he/she has lost confidence and esteem, or any of the conditions of membership, or his/her position as Worker or Peasant on the basis of which he/she was elected, or if he/she has breached any of the responsibilities of membership. A decision to remove membership must be issued by a two-thirds majority of the respective assembly.

Article 45: It is not permissible in any case except that of flagrant violation to take any criminal proceedings against a member of the People's Assembly or Shura Council, except with prior permission

from his/her assembly. In the case of the assembly's recess, permission will be taken from the head of the assembly and will be subsequently presented to the assembly upon resumption of work.

Article 46: Judicial authority is independent and invested in courts of different varieties and degrees. Rulings will be issued according to the law.

Article 47: Judges are independent and not subject to removal. The law regulates disciplinary actions against them. There is no authority over them except that of the law, and it is not permissible for any authority to interfere in their issues or matters of justice.

Article 48: the Council of the State is an independent judicial body that specializes in adjudication of administrative disputes and disciplinary claims. The law determines its other responsibilities.

Article 49: The Supreme Constitutional Court is an independent and autonomous judicial body, uniquely tasked with judicial oversight over the constitutionality of laws and regulations. It deals with the interpretation of legislative texts, all as stipulated in the law. The law also designates other responsibilities for the Court and regulates the procedures followed in front of it.

Article 50: The law determines judicial bodies and their responsibilities and regulates their formation, in addition to stipulating conditions and procedures for appointing their members and their transfer.

Article 51: The law regulates the military judicial system and stipulates its responsibilities in line with constitutional principles.

Article 52: Court sessions are to be public except in the case that the court decides to make them secret in the interest of public order or morals. In all cases, the verdict is announced in a public session.

Article 53: The armed forces are the property of the people. Their mission is the protection of the country and the safety and security of its lands. It is not permissible for any body or group to establish military or paramilitary formations. The defense of the country and its land is a sacred responsibility, and conscription is mandatory according to the law. The law stipulates the conditions for military service and promotion in the armed services.

Article 54: A council entitles "The National Defense Council" will be established. It will be headed by the president of the republic and tasked with evaluating affairs concerned with means of securing the country and its safety. The law will stipulate its other responsibilities.

Article 55: The police are a civil order body whose responsibility it is to serve the people. The police guarantee for the people tranquility and security and provide for the maintenance of order, public security and morals, according to the law.

Article 56: The Supreme Council of the Armed Forces deals with the administration of the affairs of the country. To achieve this, it has directly the following authorities:

- 1) Legislation
- 2) Issuing public policy for the state and the public budget and ensuring its implementation
- 3) Appointing the appointed members of the People's Assembly
- 4) Calling the People's Assembly and the Shura Council to enter into normal session, adjourn, or hold an extraordinary session, and adjourn said session.

- 5) The right to promulgate laws or object to them.
- 6) Represent the state domestically and abroad, sign international treaties and agreements, and be considered a part of the legal system of the state.
- 7) Appoint the head of the cabinet and his/her deputies and ministers and their deputies, as well as relieve them of their duties.
- 8) Appoint civilian and military employees and political representatives, as well as dismiss them according to the law; accredit foreign political representatives.
- 9) Pardon or reduce punishment, though blanket amnesty is granted only by law.
- 10) Other authorities and responsibilities as determined by the president of the republic pursuant to laws and regulations. The Council shall have the power to delegate its head or one of its members to take on its responsibilities.

Article 57: The Cabinet shall assume executive authority in all that pertains to it, and will undertake the following responsibilities in particular:

- 1) Participate with the Supreme Council of the Armed Forces to put in place public policies of the state and supervise their implementation, according to the laws and resolutions of the republic
- 2) Direct, coordinate, and follow the work of the ministries and their related fronts, in addition to public institutions and bodies.
- 3) Issue administrative and executive orders according to laws, regulations, and decisions, and see to their implementation.
- 4) Prepare draft legislation, regulations, and decisions.
- 5) Prepare a draft public budget for the state.
- 6) Prepare a draft public plan for the state.
- 7) Contract and grant loans according to constitutional principles
- 8) Note the implementation of laws, preservation of state security, and protection of citizen rights and state interests

Article 58: It is not permissible for a minister during his/her tenure to engage in an independent profession, buy or rent anything using state money, rent out or sell anything with state money, barter with state money.

Article 59: The president of the republic, after taking into account the opinion of the cabinet, can announce a state of emergency as stipulated in law. He/she must present this announcement to the People's Assembly within the seven subsequent days to decide its view on this matter. If the state of emergency is announced in a period of recess, the Assembly must be called back to session immediately to review the matter, taking into account the time limit mentioned above. If the People's Assembly is dissolved, the matter will be reviewed by the new Assembly at its first meeting. A majority of the members of the People's Assembly must agree to the announcement of a state of emergency. In all cases, the announcement of a state of emergency will be for a limited time period not exceeding 6 months. It is not permissible to extend it, except after a people's referendum on the matter and their agreement to an extension.

Article 60: The members of the first People's Assembly and Shura Council (except the appointed members) will meet in a joint session following an invitation from the Supreme Council of the Armed Forces within 6 months of their election to elect a provisional assembly composed of 100 members which will prepare a new draft constitution for the country to be completed within 6 months of the formation of this assembly. The draft constitution will be presented within 15 days of its preparation to

the people who will vote in a referendum on the matter. The constitution will take effect from the date on which the people approve the referendum.

Article 61: The Supreme Council of the Armed Forces will continue directly with its limited responsibilities following this Announcement, until a time at which the People's Assembly and the Shura Council assume their responsibilities and the president of the republic is elected and assumes his/her position.

Article 62: All laws and regulations decided upon before the publication of this Announcement remains valid and implemented; however, it is possible to cancel laws or amend them according to the rules and procedures adopted in this Announcement.

Article 63: This Announcement will be published in the official gazette and will be in effect on the day following its publication.

**Constitution
of
The Arab Republic of Egypt
2014**

Unofficial translation

The Issuance

of The Amended Constitution of The Arab Republic of Egypt

The Head of the State

Cognizant of the results of the referendum on the draft of the constitutional amendments into the suspended constitution of 2012 that was held on January 14-15, 2014,

And cognizant of Article 247 of the amended constitution of the Arab Republic of Egypt, the amended constitution of the Arab Republic of Egypt is issued with the attached text.

**Cairo on Rabei Awwal 17, 1435;
January 18, 2014;**

Adly Mansour

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful

This is Our Constitution, Egypt is the gift of the Nile for Egyptians and the gift of Egyptians to humanity.

With its unique location and history, Egypt is the Arab heart of the world. It is the meeting point of world civilizations and cultures and the crossroads of its maritime transportation and communications. It is the head of Africa on the Mediterranean and the estuary of its greatest river: the Nile.

This is Egypt, an immortal homeland for Egyptians, and a message of peace and love to all peoples.

In the outset of history, the dawn of human conscience arose and shone forth in the hearts of our great ancestors, whose goodwill banded together to found the first central State that regulated and organized the life of Egyptians on the banks of the Nile. It is where they created amazing wonders of civilization, and where their hearts looked up to heavens before earth knew the three Abrahamic religions.

Egypt is the cradle of belief and the banner of glory of the revealed religions.

On its land, Prophet Moses - to whom Allah spoke - grew up and on Mount Sinai, the Revelation of Allah shone on his heart and Divine message descended.

On its land, Egyptians harbored in their bosoms Virgin Mary and her baby and offered thousands of martyrs in defense of the Church of Jesus, Peace Be Upon Him.

When the Seal of the Messengers Mohammad (Peace and Blessings Be Upon Him) was sent to all mankind to perfect the sublime morals, our hearts and minds were opened to the light of Islam, and we, labeled the best soldiers on Earth fighting for the cause of Allah, disseminated the message of truth and sciences of religion across the world.

This is Egypt, a homeland in which we live and in our souls it lives.

In modern age, minds were enlightened, humanity became mature, and nations and peoples progressed on the path of knowledge, raising the banners of freedom and equality. Mohamed Ali founded the modern Egyptian State with a national army as its pillar. Refaa, the Azharian, called for having the homeland "... a place of happiness shared by all its people." We, Egyptians, strived to keep up with the pace of advancement and offered up martyrs and made sacrifices in several uprisings and revolutions until our patriotic army stood up for the overwhelming will of the people in the "Jan 25 – June 30" Revolution that called for freedom, human dignity and social justice for all, and for Egypt to regain its independent will.

This revolution is continuation of national struggle whose brightest symbols were Ahmed Oraby, Mostafa Kamel, and Mohamed Farid, and is a culmination of two great revolutions in our modern history:

The 1919 revolution that had rid Egypt and the Egyptians of the British protection, established the principle of citizenship and equality for all the people. Its leader, Saad Zaghloul, and his successor, Mosfata El-Nahhas, in adopting democracy asserted that “Right is above power and the nation is above government”. During this revolution, Talaat Harb laid down the cornerstone of the national economy.

The July 23, 1952 revolution led by Gamal Abdel Nasser and embraced by the popular will rendered true the dream of generations for independence and evacuation of foreign forces. Egypt affirmed its Arab allegiance, opened up to its African continent and Muslim world, supported liberation movements across continents, and took firm steps on the path of development and social justice.

This revolution is an extension of the revolutionary march of Egyptian patriotism, and enhances the strong bond between the Egyptian people and their national army that assumed the duty and shouldered the responsibility of protecting the homeland, by virtue of which we achieved victory in our greatest battles including driving off the 1956 Tripartite Aggression to defeating our defeat through the glorious victory of October 1973 that gave President Sadat a special place in our recent history.

Compared to major revolutions in the history of mankind, the Jan 25 – June 30 Revolution is unique with its high density of popular participation - estimated to be in the tens of millions - and the prominent role of youth aspiring at a brighter future. It is also unique in that the masses transcended class and ideology divides to reach out to more expansive horizons, the people’s will was defended by their army, and that it had the blessings of Al-Azhar and the Egyptian church. This Revolution is further unique because of its peacefulness and ambition to achieve freedom and social justice combined.

This revolution is both a sign and a good omen; a sign of a past that is still present and a good omen of a future at which all humanity aspires.

The world is about to turn the last few leaves of this era that has been torn up by conflicts of interest between the East and the West, and the North and the South; an era where disputes and wars erupted between classes and peoples, where dangers grew threatening the existence of mankind and life on Earth which Allah entrusted us to preserve. As humanity hopes to move from the age of maturity to the age of wisdom to build a new world where truth and justice prevail, and where freedoms and human rights are protected, we, Egyptians, believe that our revolution is a resumption of our contribution to drafting a new history for humanity.

We believe that we are capable of using the past as an inspiration, stirring up the present, and making our way to the future. We are capable of raising this homeland and rising with it.

We believe that every citizen is entitled to live in this homeland safe and secure, and that every citizen has the right to live at present and in the future.

We believe in democracy as a path, a future, and mode of living, political pluralism and the peaceful rotation of power. We affirm the right of the people to make and determine their future. The Egyptian people, is the sole source of authority. Freedom, human dignity, and social justice are the rights of every citizen. We and our future generations are masters in a sovereign homeland that is master of its destiny.

We are now drafting a Constitution that embodies the dream of generations for a prosperous consolidated society and a just State that realizes the present and future ambitions for the individual and the community.

We are now drafting a Constitution that seeks the completion of building a modern democratic State having a civil government.

We are drafting a Constitution that prevents any corruption or tyranny and by which we heal the wounds of the past, from the days of the old Eloquent Peasant to the victims of negligence and the martyrs of the revolution in our present time, and relieve our people who have – for long – been suffering injustice.

We are drafting a Constitution that affirms that the principles of Islamic Sharia are the principal source of legislation, and that the reference for the interpretation of such principles lies in the body of the relevant Supreme Constitutional Court Rulings.¹

We are drafting a Constitution that paves the way to the future for us, and which is consistent with the Universal Declaration of Human Rights which we participated in drafting and adopted..

We are drafting a Constitution that maintains our freedom and protects our nation against any peril that threatens it or our national unity.

We are drafting a Constitution that holds all of us equal in rights and duties without discrimination of any kind.

We the citizens, women and men, the Egyptian people, sovereigns in a sovereign homeland, this is the manifestation of our volition, this is the Constitution of our revolution.

This is our Constitution.

¹ The rulings are to be deposited in the minutes.

Part I

The State

Article (1)

The Arab Republic of Egypt is a sovereign, united, indivisible State, where no part may be given up, having a democratic republican system that is based on citizenship and rule of law.

The Egyptian people are part of the Arab nation seeking to enhance its integration and unity. Egypt is part of the Islamic world, belongs to the African continent, cherishes its Asian dimension, and contributes to building human civilization.

Article (2)

Islam is the religion of the State and Arabic is its official language. The principles of Islamic Sharia are the main source of legislation.

Article (3)

The principles of Christian and Jewish Sharia of Egyptian Christians and Jews are the main source of legislations that regulate their respective personal status, religious affairs, and selection of spiritual leaders.

Article (4)

Sovereignty belongs only to the people, who shall exercise and protect it. The people are the source of powers, and safeguard their national unity that is based on the principles of equality, justice and equal opportunities among all citizens, as stated in the Constitution.

Article (5)

The political system is based on political and partisan pluralism, peaceful rotation of power, separation and balance of powers, the inevitable correlation between powers and responsibilities, and respect for human rights and freedoms, as stated in the Constitution.

Article (6)

Nationality is a right to anyone born to an Egyptian father or an Egyptian mother, and legal recognition through official papers proving his/her personal data, is a right guaranteed and regulated by Law.

Requirements for acquiring nationality shall be specified by law.

Part II

Basic Components of the Society

Chapter One

Social Components

Article (7)

Al-Azhar is an independent Islamic scientific institution, with exclusive competence over its own affairs. It is the main reference for religious sciences and Islamic affairs. It is responsible for calling to Islam, as well as, disseminating religious sciences and the Arabic language in Egypt and all over the world.

The State shall provide sufficient financial allocations thereto so that it can achieve its purposes.

Al-Azhar's Grand Sheikh is independent and may not be dismissed. The Law shall regulate the method of appointing the Grand Sheikh from amongst the members of Council of Senior Scholars.

Article (8)

Society is based on social solidarity.

The State shall achieve social justice and provide the means to achieve social interdependence, in order to ensure a decent life for all citizens, as regulated by Law.

Article (9)

The State shall ensure equal opportunities for all citizens without discrimination.

Article (10)

The family is the nucleus of society, and is founded on religion, morality, and patriotism. The State shall ensure its cohesion, stability and the establishment of its values.

Article (11)

The State shall ensure the achievement of equality between women and men in all civil, political, economic, social, and cultural rights in accordance with the provisions of this Constitution.

The State shall take the necessary measures to ensure the appropriate representation of women in the houses of representatives, as specified by Law. The State shall also guarantee women's right

of holding public and senior management offices in the State and their appointment in judicial bodies and authorities without discrimination.

The State shall protect women against all forms of violence and ensure enabling women to strike a balance between family duties and work requirements.

The State shall provide care to and protection of motherhood and childhood, female heads of families, and elderly and neediest women.

Article (12)

Work is a right, duty and honor guaranteed by the State. No citizen may be forced to work except as required by Law and for the purpose of performing a public service for a fixed period in return for a fair consideration, and without prejudice to the basic rights of those obliged to carry out such work.

Article (13)

The State shall protect workers' rights and strive to build balanced work relationships between both parties to the production process. It shall ensure means for collective negotiations, protect workers against work risks, guarantee the fulfillment of the requirements of security, safety and occupational health, and prohibit unfair dismissal, all as regulated by Law.

Article (14)

Public offices are a competence-based right for all citizens without bias or favoritism, and are deemed a mandate to serve the people. The State shall ensure the rights and protection of public servants and that they perform their respective duties in serving the interests of the people. They may not be dismissed without disciplinary procedures except in the cases specified by Law.

Article (15)

Peaceful strike is a right regulated by Law.

Article (16)

The State shall honor the martyrs of the nation; shall care for revolution-wounded persons, veterans and wounded warriors, families of those missing in war and its equivalents, and persons wounded in security operations, as well as their wives, children and parents; and shall strive to provide all of them with job opportunities, all as regulated by Law.

The State shall encourage the participation of the civil society organizations in achieving those objectives.

Article (17)

The State shall ensure that social insurance services are provided.

All citizens who do not benefit from the social insurance system have the right to social security, in a manner that ensures a decent life in the event of being incapable to provide for themselves and their families, as well as in cases of incapacity to work, old age or unemployment.

In accordance with Law, the State shall strive to provide suitable pensions to small farmers, agricultural workers and fishermen, and irregular labor.

The funds of social insurance and pensions are deemed private funds that enjoy all aspects and forms of protection afforded to public funds. Those funds along with their returns are the rights of their respective beneficiaries; they shall be safely invested, and shall be managed by an independent entity in accordance with the Law.

The State shall guarantee social insurance and pension funds.

Article (18)

Every citizen has the right to health and to comprehensive health care which complies with quality standards. The State shall maintain and support public health facilities that provide health services to the people, and shall enhance their efficiency and their equitable geographical distribution.

The State shall allocate a percentage of government spending to health equivalent to at least 3% of Gross National Product (GNP), which shall gradually increase to comply with international standards.

The State shall establish a comprehensive health insurance system covering all diseases for all Egyptians; and the Law shall regulate citizens' contribution to or exemption from its subscriptions based on their income rates.

Refusing to provide any form of medical treatment to any human in emergency or life-threatening situations is a crime.

The State shall improve the conditions of physicians, nursing staff, and health sector workers.

All health facilities as well as health-related products, materials and means of advertisement shall be subject to State control. The State shall encourage the participation of private and non-governmental sectors in providing health care services according to the Law.

Article (19)

Every citizen has the right to education. The goals of education are to build the Egyptian character, preserve the national identity, root the scientific method of thinking, develop talents

and promote innovation, establish cultural and spiritual values, and found the concepts of citizenship, tolerance and non-discrimination. The State shall observe the goals of education in the educational curricula and methods, and provide education in accordance with international quality standards.

Education is compulsory until the end of the secondary stage or its equivalent. The State shall provide free education in the various stages in the State's educational institutions according to the Law.

The State shall allocate a percentage of government spending to education equivalent to at least 4% of the Gross National Product (GNP), which shall gradually increase to comply with international standards.

The State shall supervise education to ensure that all public and private schools and institutes abide by its educational policies.

Article (20)

The State shall encourage and develop technical and technological education as well as vocational training, and expand all their types in accordance with international quality standards and in accordance with labor market needs.

Article (21)

The State shall guarantee the independence of universities and scientific and linguistic academies, and provide university education in accordance with international quality standards. It shall develop and ensure free provision of, university education in State universities and institutes according to the Law.

The State shall allocate a percentage of government spending to university education equivalent to at least 2% of the Gross National Product (GNP), which shall gradually increase to comply with international standards.

The State shall encourage the establishment of non-profit, non-governmental universities. The State shall guarantee the quality of education in private and non-governmental universities, ensure that they comply with international quality standards and build their own faculty members and researchers, and allocate a sufficient percentage of their returns to educational and research development.

Article (22)

Teachers, and faculty members and their assistants, are the main pillars of education. The State shall guarantee the development of their academic competencies and professional skills and shall care for their financial and moral rights in order to ensure the quality of education and achieve its goals.

Article (23)

The State shall ensure freedom of scientific research and encourage scientific research institutions as a mean to achieve national sovereignty and build a knowledge economy. The State shall sponsor researchers and inventors and allocate a percentage of government spending to scientific research equivalent to at least 1% of the Gross National Product (GNP), which shall gradually increase to comply with international standards.

The State shall ensure effective means of contribution by private and non-governmental sectors and the participation of Egyptian expatriates in the progress of scientific research.

Article (24)

Arabic Language, Religious Education and National History, in all its stages, are core subjects in public and private pre-university education. Universities shall teach human rights and professional values and ethics of the various academic disciplines.

Article (25)

The State shall develop a comprehensive plan to eradicate alphabetical and digital illiteracy among citizens of all ages. The State shall develop its implementation mechanisms with the participation of civil society organizations within a definite timeline.

Article (26)

The creation of civil titles is prohibited.

Chapter Two

Economic Components

Article (27)

The economic system aims at achieving prosperity through sustainable development and social justice so as to raise the real growth rate of the national economy and the standard of living, increase job opportunities, reduce unemployment rates and eliminate poverty.

The economic system shall adhere to transparency and good governance standards; enhance pillars of competitiveness, encourage investment, ensure balanced geographical, sectorial, and environmental growth, prohibit monopolistic practices, maintain financial and trade balances and a fair tax system, in the context of a regulated economy guaranteeing the various types of ownership and striking a balance between the interests of various stakeholders preserving the rights of workers and protecting consumers.

From a social perspective, the economic system shall ensure equal opportunities and fair distribution of development returns, reduce the differences among incomes and adhere to a

minimum wage and pension ensuring a decent life, as well as a maximum one in State agencies for every salaried employee according to the Law.

Article (28)

The productive, service and information related economic activities are key components of the economy. The State shall protect them and strive to increase their competitiveness; provide investment-attracting environment, increase productivity, encourage exports, and regulate imports.

The State shall pay special attention to small, medium and micro enterprises in all fields, and shall regulate and rehabilitate the informal sector.

Article (29)

Agriculture is a basic component of the economy.

The State shall protect and expand agricultural land, and shall criminalize encroachments thereon. It shall develop rural areas; raise the standard of living of their population and protect them from environmental risks; and shall strive to develop agricultural and animal production and encourage industries based thereon.

The State shall provide agricultural and animal production requirements, and shall buy basic agricultural crops at suitable prices generating profit margins for farmers in agreement with agricultural unions, syndicates and associations. The State shall also allocate a percentage of reclaimed lands to small farmers and youth graduates, and protect farmers and agricultural workers against exploitation. All the foregoing shall be as regulated by Law.

Article (30)

The State shall protect fish resources, as well as protect and support fishermen and empower them to carry out their work without jeopardizing ecosystems, as regulated by Law.

Article (31)

The security of cyberspace is an integral part of the economic system and national security. The State shall take the necessary measures to preserve it as regulated by Law.

Article (32)

The State's natural resources belong to the people. The State shall preserve and effectively exploit them, may not deplete them, and shall observe the rights of future generations to them.

The State shall make the best use of renewable energy sources, motivate investment therein, and encourage relevant scientific research. The State shall encourage the manufacture of raw materials and increase their added value as per economic feasibility.

Disposing of State's public properties is prohibited. Granting the right of exploitation of natural resources or public utility concessions shall be by virtue of a law for a period not exceeding thirty (30) years.

Granting the right of exploitation of quarries, small mines and slatterns, or granting public utility concession shall be based on a law for a period not exceeding fifteen (15) years.

The Law shall define provisions of disposing of the State's private properties as well as the regulating rules and procedures.

Article (33)

The State shall protect ownership with its three types: the public, the private and the cooperative.

Article (34)

Public properties are inviolable and may not be infringed upon. Protection thereof is a duty according to the Law.

Article (35)

Private properties shall be protected, and the right to inheritance thereto is secured. It is not permissible to impose guardianship thereon except in the cases defined by Law and by virtue of a court judgment. Expropriation shall be allowed only in the public interest and for its benefit, and against fair compensation to be paid in advance according to the Law.

Article (36)

The State shall motivate the private sector to undertake its social responsibility in serving the economy and society.

Article (37)

Cooperative ownership shall be protected. The State shall give due care to cooperatives, and the Law shall guarantee their protection, support and independence.

It is prohibited to dissolve cooperatives or their board of directors except by virtue of a court judgment.

Article (38)

The tax system, as well as other public liabilities, aim at developing State resources and achieving social justice and economic development.

Public taxes may not be created, altered, or cancelled except by a law; and exemption therefrom may only be made in the cases defined by the law. No person may be required to pay other taxes or fees except as provided for in the Law.

Multi sources shall be observed in imposing taxes. Progressive multi bracket taxes shall be imposed on incomes of individuals according to their respective financial capabilities. Taxation system shall ensure promoting labor-intensive economic activities and motivating their role in the economic, social and cultural development.

The State shall improve the taxation system and develop modern systems that guarantee efficiency, easiness and control in tax collection. The Law shall define the methods and tools of collecting taxes, charges and any other sovereign proceeds, and amounts thereof to be deposited into the State public treasury.

Tax payment is a duty and tax evasion is a crime.

Article (39)

Saving is a national duty protected and encouraged by the State that shall guarantee savings, as regulated by the law.

Article (40)

General confiscation of properties is prohibited.

Specific confiscation is impermissible except by virtue of a court judgment.

Article (41)

The State shall implement a population program aiming at striking a balance between population growth rates and available resources; and shall maximize investments in human resources and improve their characteristics in the framework of achieving sustainable development.

Article (42)

Workers shall have a share in the management and profits of enterprises according to the law, and shall develop production and implement the respective plans of their productive units. Preserving production tools is a national duty.

Workers shall be represented by 50% of the elected members of the boards of directors of public sector units. Their representation in the boards of directors of public enterprise sector companies shall be subject to the Law.

The Law shall regulate the representation of small farmers and craftsmen with a minimum representation percentage of 80% in the boards of directors of agricultural, industrial and handicraft cooperatives.

Article (43)

The State shall protect and develop the Suez Canal and preserve it as an international waterway owned by the State. The State shall also develop the Canal sector as a distinguished economic center.

Article (44)

The State shall protect the River Nile, preserve Egypt's historical rights thereto, rationalize and maximize its use, and refrain from wasting or polluting its water. The State shall also protect groundwater; adopt necessary means for ensuring water security; and support scientific research in that regard.

Every citizen is guaranteed the right to enjoy the River Nile. It is prohibited to trespass the riverbank reserve or harm the riverine environment. The State shall guarantee eliminating any trespass against the River Nile as regulated by Law.

Article (45)

The State shall protect its seas, shores, lakes, waterways and natural protectorates.

Trespassing, polluting or misusing any of them is prohibited. Every citizen is guaranteed the right of enjoying them. The State shall protect and develop the green space in the urban areas; preserve plant, animal and fish resources and protect those under the threat of extinction or danger; guarantee humane treatment of animals, all according to the law.

Article (46)

Every person has the right to a sound healthy environment. Environment protection is a national duty. The State shall take necessary measures to protect and ensure not to harm the environment; ensure a rational use of natural resources so as to achieve sustainable development; and guarantee the right of future generations thereto.

Chapter Three

Cultural Components

Article (47)

The State shall maintain the Egyptian cultural identity with its diversified branches of civilization.

Article (48)

Culture is a right to every citizen. The State shall secure and support this right and make available all types of cultural materials to all strata of the people, without any discrimination

based on financial capability, geographic location or others. The State shall give special attention to remote areas and the neediest groups.

The State shall encourage translation from and into Arabic.

Article (49)

The State shall protect and preserve monuments and give due care to monumental sites. It shall also maintain and restore them; recover stolen antiquities; and organize and supervise excavation operations.

Presenting monuments as gifts or exchanging them is prohibited.

Aggression against or trafficking in monuments is a crime that is not subject to prescription.

Article (50)

Egypt's civilization and cultural heritage, whether physical or moral, including all diversities and principal milestones – namely Ancient Egyptian, Coptic, and Islamic – is a national and human wealth. The State shall preserve and maintain this heritage as well as the contemporary cultural wealth, whether architectural, literary or artistic, with all diversities. Aggression against any of the foregoing is a crime punished by Law. The State shall pay special attention to protecting components of cultural pluralism in Egypt.

Part III

Public Rights, Freedoms & Duties

Article (51)

Dignity is the right of every human being and may not be violated. The State shall respect and protect human dignity.

Article (52)

Torture in all forms and types is a crime that is not subject to prescription.

Article (53)

All citizens are equal before the Law. They are equal in rights, freedoms and general duties, without discrimination based on religion, belief, sex, origin, race, color, language, disability, social class, political or geographic affiliation or any other reason.

Discrimination and incitement of hatred is a crime punished by Law.

The State shall take necessary measures for eliminating all forms of discrimination, and the Law shall regulate creating an independent commission for this purpose.

Article (54)

Personal freedom is a natural right, shall be protected and may not be infringed upon. Except for the case of being caught in *flagrante delicto*, it is not permissible to arrest, search, detain, or restrict the freedom of anyone in any way except by virtue of a reasoned judicial order that was required in the context of an investigation.

Every person whose freedom is restricted shall be immediately notified of the reasons therefore; shall be informed of his/her rights in writing; shall be immediately enabled to contact his/her relatives and lawyer; and shall be brought before the investigation authority within twenty four (24) hours as of the time of restricting his/her freedom.

Investigation may not start with the person unless his/her lawyer is present. A lawyer shall be seconded for persons who do not have one. Necessary assistance shall be rendered to people with disability according to procedures prescribed by Law.

Every person whose freedom is restricted, as well as others, shall have the right to file grievance before the court against this action. A decision shall be made on such grievance within one (1) week as of the date of action; otherwise, the person must be immediately released.

The Law shall regulate the provisions, duration, and causes of temporary detention, as well as the cases in which damages are due on the state to compensate a person for such temporary detention or for serving punishment thereafter cancelled pursuant to a final judgment reversing the judgment by virtue of which such punishment was imposed.

In all events, it is not permissible to present an accused for trial in crimes that may be punishable by imprisonment unless a lawyer is present by virtue of a power of attorney from the accused or by secondment by the court.

Article (55)

Every person who is either arrested, detained, or his freedom is restricted shall be treated in a manner that maintains his dignity. He/she may not be tortured, intimidated, coerced, or physically or morally harmed; and may not be seized or detained except in places designated for that purpose, which shall be adequate on human and health levels. The State shall cater for the needs of people with disability.

Violating any of the aforementioned is a crime punished by Law.

An accused has the right to remain silent. Every statement proved to be made by a detainee under any of the foregoing actions, or threat thereof, shall be disregarded and not be relied upon.

Article (56)

A prison is a place of correction and rehabilitation.

Prisons and places of detention shall be subject to judiciary supervision, where actions inconsistent with human dignity or which endanger human health shall be prohibited.

The Law shall regulate the provisions of reform and rehabilitation of convicted persons and facilitating decent lives after their release.

Article (57)

The right to privacy may not be violated, shall be protected and may not be infringed upon..

Postal, telegraphic and electronic correspondences, telephone calls, and other means of communication are inviolable, and their confidentiality is guaranteed. They may not be confiscated, revealed or monitored except by virtue of a reasoned judicial order, for a definite period, and only in the cases defined by Law.

The State shall protect citizens' right to use all forms of public means of communications. Interrupting or disconnecting them, or depriving the citizens from using them, arbitrarily, is impermissible. This shall be regulated by Law.

Article (58)

Privacy of homes is inviolable. Except for cases of danger or call for help, homes may not be entered, inspected, monitored or eavesdropped except by a reasoned judicial warrant specifying the place, the time and the purpose thereof. This is to be applied only in the cases and in the manner prescribed by Law. Upon entering or inspection, the residents of houses must be apprised and have access to the warrant issued in this regard.

Article (59)

Everyone has the right to a safe life. The State shall provide security and reassurance for its citizens and all those residing in its territory.

Article (60)

The human body is inviolable and any assault, deformation or mutilation committed against it shall be a crime punishable by Law. Organs trade shall be prohibited, and it is not permissible to perform any medical or scientific experiment thereon without a certified free consent according to established principles in medical sciences and as regulated by Law.

Article (61)

Tissue and organ donation is a gift for life. Every person shall have the right to donate his body organs either during his lifetime or after his death by virtue of consent or a certified will. The State shall develop a mechanism regulating the rules of organ donation and transplantation in accordance with the Law.

Article (62)

Freedom of movement, residence and emigration shall be guaranteed.

No citizen may be expelled from the State territory or prevented from returning thereto.

No citizen may be prevented from leaving the State territory, placed under house arrest or prevented from residing in a certain place except by a reasoned judicial order for a specified period of time and in the cases as defined by the Law.

Article (63)

All forms and types of arbitrary forced displacement of citizens shall be prohibited and shall be a crime that does not lapse by prescription.

Article (64)

Freedom of belief is absolute.

The freedom of practicing religious rituals and establishing worship places for the followers of Abrahamic religions is a right regulated by Law.

Article (65)

Freedom of thought and opinion is guaranteed.

Every person shall have the right to express his/her opinion verbally, in writing, through imagery, or by any other means of expression and publication.

Article (66)

Freedom of scientific research is guaranteed. The State is committed to sponsor researchers and inventors and to provide protection for and endeavor to apply their innovations.

Article (67)

Freedom of artistic and literary creativity is guaranteed. The State shall encourage arts and literature, sponsor creative artists and writers and protect their productions, and provide the means necessary for achieving this end.

No lawsuit may be initiated or filed to stop or confiscate any artistic, literary, or intellectual works, or against their creators except by the Public Prosecutor. No freedom restricting sanction may be inflicted for crimes committed because of the publicity of artistic, literary or intellectual product. As for crimes related to the incitement of violence, discrimination between citizens, or impingement of individual honor, the Law shall specify the penalties therefore.

In such cases, the court may obligate the sentenced to pay punitive compensation to the victim of the crime, in addition to the original compensations due to the victim for the damages incurred. All the foregoing shall be in accordance with the Law.

Article (68)

Information, data, statistics and official documents are the property of the People and the disclosure thereof from their various sources is a right guaranteed by the State for all citizens. The State is committed to provide and make them available to citizens in a transparent manner. The Law shall regulate the rules for obtaining them and terms for their availability and confidentiality; the rules for their deposit and storage; and the rules for and filing complaints against the refusal to provide them. The Law shall also impose penalties for withholding information or deliberately providing wrong information.

The State institutions shall deposit official documents with the National Library and Archives once they are no longer in use. The State institutions shall also protect, and secure such documents against loss or damage, as well as restoring and digitizing them using all modern means and instruments according to the Law.

Article (69)

The State shall protect all types of intellectual property rights in all fields, and establish a specialized agency to uphold such rights and their legal protection as regulated by Law.

Article (70)

Freedom of the press, printing and paper, visual, audio and electronic publication is guaranteed. Every Egyptian - whether being natural or legal, public or private person – shall have the right to own and issue newspapers and establish visual, audio and digital media outlets.

Newspapers may be issued once notification is given as regulated by Law. The Law shall regulate the procedures of establishing and owning visual and radio broadcast stations and online newspapers.

Article (71)

It is prohibited to censor, confiscate, suspend or shut down Egyptian newspapers and media outlets in any way. By way of exception, they may be subject to limited censorship in times of war or general mobilization.

No freedom restricting penalty shall be imposed for publication or publicity crimes. As for crimes related to the incitement of violence, discrimination between citizens, or impingement of individual honor, the Law shall stipulate the penalties therefor.

Article (72)

The State shall ensure the independence of all State-owned press institutions and media outlets, in a manner ensuring their neutrality and presentation of all political and intellectual opinions and trends as well as social interests and also guaranteeing equality and equal opportunities in addressing public opinion.

Article (73)

Citizens shall have the right to organize public meetings, marches, demonstrations and all forms of peaceful protests, without carrying arms of any kind, by serving a notification as regulated by Law.

The right to peaceful and private assembly is guaranteed without need for prior notification. Security forces may not attend, monitor or eavesdrop on such meetings.

Article (74)

All citizens shall have the right to form political parties by notification as regulated by Law. No political activity may be practiced and no political parties may be formed on the basis of religion or discrimination based on sex, or origin, or on sectarian basis or geographic location. No activity that is hostile to democratic principles, secretive, or of military or quasi-military nature may be practiced.

Political parties may not be dissolved except by virtue of a court judgment.

Article (75)

All citizens shall have the right to form non-governmental associations and foundations on democratic basis, which shall acquire legal personality upon notification.

Such associations and foundations shall have the right to practice their activities freely, and administrative agencies may not interfere in their affairs or dissolve them, or dissolve their boards of directors or boards of trustees save by a court judgment.

The establishment or continuation of non-governmental associations and foundations, whose statutes or activities are secretive or conducted in secret or which are of military or quasi-military nature is prohibited as regulated by Law.

Article (76)

The establishment of syndicates and federations on democratic basis is a right guaranteed by Law. Syndicates and federations shall acquire legal personality, shall have the right to practice their activities freely, shall improve the level of efficiency among their members and defend their rights and interests.

The State shall guarantee the independence of all syndicates and federations and their boards of directors may only be dissolved by a court judgment.

No syndicate or federation may be established in the military or police agencies.

Article (77)

The Law shall regulate the establishment of professional syndicates and the administration thereof on a democratic basis, shall guarantee their independence and shall specify their resources and the manner of recording their members, and holding them accountable for their conduct in practicing their professional activities according to the codes of ethics and professional conduct.

No profession may have more than one syndicate for the regulation of its affairs. Receivership may not be imposed on any syndicate. Administrative bodies may not interfere in the affairs

thereof. The board of directors of any syndicate may not be dissolved save by a court judgment. The opinion of the syndicate shall be sought on draft legislations pertaining to it.

Article (78)

The State shall ensure the citizens' right to adequate, safe and healthy housing in a manner which preserves human dignity and achieves social justice.

The State shall devise a national housing plan which upholds the environmental particularity and ensures the contribution of personal and collaborative initiatives in its implementation. The State shall also regulate the use of State lands and provide them with basic utilities within the framework of comprehensive urban planning which serves cities and villages and a population distribution strategy. This is to be applied in a manner serving the public interest, improving the quality of life for citizens and safeguards the rights of future generations.

The State shall also devise a comprehensive national plan to address the problem of unplanned slums, which includes re-planning, provision of infrastructure and utilities, and improvement of the quality of life and public health. In addition, the State shall guarantee the provision of resources necessary for implementing such plan within a specified period of time.

Article (79)

Each citizen has the right to healthy and sufficient food and clean water. The State shall ensure food resources to all citizens. The State shall also ensure sustainable food sovereignty and maintain agricultural biological diversity and types of local plants in order to safeguard the rights of future generations.

Article (80)

Anyone under the age of 18 shall be considered a child. Each child shall have the right to a name, identity documents, free compulsory vaccination, health and family or alternative care, basic nutrition, safe shelter, religious education, and emotional and cognitive development.

The State shall ensure the rights of children with disabilities, their rehabilitation and their integration in the society.

The State shall provide children with care and protection from all forms of violence, abuse, mistreatment and commercial and sexual exploitation.

Every child shall be entitled to acquire early education in a childhood center until the age of six. It is prohibited to employ children before the age of completing their preparatory education (six years of primary and three years of preparatory) or in jobs which subject them to danger.

The State shall also develop a judicial system for children that have been victims and or are witnesses. Children may not be held criminally accountable or detained save as provided in the

Law and for the period of time specified therein. In such a case, they shall be provided with legal assistance and detained in appropriate locations separate from those allocated for the detention of adults.

The State shall endeavor to achieve the best interest of children in all measures taken against them.

Article (81)

The State shall guarantee the health, economic, social, cultural, entertainment, sporting and educational rights of persons with disabilities and dwarves, strive to provide them with job opportunities, allocate a percentage of job opportunities to them, and adapt public facilities and their surrounding environment to their special needs. The State shall also ensure their exercise of all political rights and integration with other citizens in compliance with the principles of equality, justice and equal opportunities.

Article (82)

The State shall guarantee the provision of care to the youth and youngsters shall endeavour to discover their talents; develop their cultural, scientific, psychological, physical and creative abilities, encourage their engagement in group and volunteer activities and enable them to participate in public life.

Article (83)

The State shall guarantee the health, economic, social, cultural and entertainment rights of the elderly people, provide them with appropriate pensions which ensure a decent life for them, and enable them to participate in public life. In its planning of public facilities, the State shall take into account the needs of the elderly. The State shall encourage civil society organizations to participate in taking care of the elderly people.

All the foregoing is to be applied as regulated by Law.

Article (84)

Everyone has the right to exercise sports. The State institutions and civil society shall endeavor to discover and sponsor the talented athletes and take the necessary measures to encourage the exercise of sports.

The Law shall regulate the affairs of sports and non-governmental sporting agencies in accordance with international standards and shall regulate the manner of settling sporting disputes.

Article (85)

Every individual shall have the right to address public authorities in writing and under his own signature. Public authorities may not be addressed in the name of any groups except for any entity having a legal personality e.

Article (86)

Protecting national security is a duty. The responsibility of all parties to uphold national security is guaranteed by the Law... . Defending the nation and the protection of its land are an honor and a sacred duty. Military service is mandatory according to the Law.

Article (87)

Participation of citizens in the public life is a national duty. Every citizen shall have the right to vote, run for elections, and express his/her opinion in referendums. The Law shall regulate the exercise of these rights. There may be exemption from the performance of this duty in certain cases to be specified by Law.

The State shall be responsible for entering the name of each citizen in the voters database without request therefrom provided he/she satisfies the conditions for voting. The State shall also purge this database on a periodic basis in pursuance of the Law. The State shall guarantee the safety, neutrality and integrity of referendum and election procedures. It is prohibited to use public funds, government agencies, public facilities, worship places, business sector institutions and non-governmental organizations and institutions for political purposes or election publicity.

Article (88)

The State shall safeguard the interests of Egyptians living abroad, protect them and protect their rights and freedoms, enable them to perform their public duties towards the State and society, and encourage their contribution to the development of the nation.

The Law shall regulate the participation of Egyptians living abroad in elections and referendums in a manner consistent with their particular circumstances, without being restricted by the provisions of voting, counting of ballots and announcing of results, set forth in this Constitution. This is without prejudice to providing guarantees to ensure the integrity and neutrality of the election and referendum process.

Article (89)

All forms of slavery, oppression, forced exploitation of human beings, sex trade, and other forms of human trafficking are prohibited and criminalized by Law.

Article (90)

The State shall encourage the charitable endowment system for the establishing and sponsoring of scientific, cultural, health, social institutions and others, and shall ensure the independence thereof. The affairs of such institutions shall be managed in accordance with the conditions set by the person who created the endowment, as regulated by Law.

Article (91)

The State may grant political asylum to any foreigner persecuted for defending the interests of people, human rights, peace or justice.

Extradition of political refugees is prohibited. All of the foregoing shall be according to the Law.

Article (92)

Inalienable rights and freedoms of citizens may not be suspended or reduced.

No law regulating the exercise of rights and freedoms may restrict such rights and freedoms in a manner prejudicing the substance and the essence thereof.

Article (93)

The State shall be bound by the international human rights agreements, covenants and conventions ratified by Egypt, and which shall have the force of law after publication in accordance with the prescribed conditions.

Part IV

Rule of Law

Article (94)

The rule of law shall be the basis of governing in the State.

The State shall be governed by Law. The independence, immunity and impartiality of the judiciary are essential guarantees for the protection of rights and freedoms.

Article (95)

Penalties are personal. There shall be no crime or punishment except pursuant to a law, and a penalty may only be inflicted by a court judgment. Penalty shall only be imposed for acts committed after the effective date of the law imposing it.

Article (96)

The accused person is presumed innocent until proven guilty in a fair legal trial in which the right to defend himself is guaranteed.

The law shall regulate the appeal of judgments passed on felonies.

The State shall provide protection to victims, witnesses, accused and informants as necessary and in accordance with the Law.

Article (97)

Litigation is a right that is safeguarded and an inalienable right for all. The State shall guarantee the accessibility of judicature for litigants and rapid adjudication on cases. It is prohibited to immunize any administrative act or decision from judicial review. No person may be tried except before the ordinary judge. Exceptional courts are prohibited.

Article (98)

The right of defense either in person or by proxy is guaranteed. The independence of the legal profession and the protection of its rights is a guarantee for the right of defense.

The law shall provide all means by which those who are financially unable can resort to justice and defend their rights.

Article (99)

Any violation of personal freedom, or the sanctity of the private life of citizens, or any other public rights and freedoms which are guaranteed by the Constitution and the Law is a crime. The criminal and civil lawsuit arising of such crime shall not abate by prescription. The affected party shall have the right to bring a direct criminal action.

The State shall guarantee fair compensation for the victims of such violations. The National Council for Human Rights may file a complaint with the Public Prosecution of any violation of these rights, and it may intervene in the civil lawsuit in favor of the affected party at its request. All of the foregoing is to be applied in the manner set forth by Law.

Article (100)

Court judgments shall be issued and enforced in the name of the People. The State shall guarantee the means of the enforcement thereof as regulated by Law. Refraining from or delay in the enforcement of such judgments by the competent public servants is a crime punishable by Law. In such a case, the party in favor of whom the judgment is passed shall have the right to bring a direct criminal action before the competent court.. The Public Prosecution shall, at the request of the party in favor of whom the judgment is passed, initiate criminal action against the public servant refraining from executing the judgment or interrupting such execution.

Part V

The System of Government

Chapter One

The Legislative Power

(House of Representatives)

Article (101)

In the manner stated in the Constitution, the House of Representatives is entrusted with the authority to enact legislations and approve the general policy of the State, the general plan of economic and social development and the State budget. It exercises oversight over the actions of the executive power.

Article (102)

The House of Representatives is composed of no less than four hundred and fifty members elected by direct secret public ballot.

A candidate for the membership of the House must be an Egyptian citizen, enjoying civil and political rights, a holder of at least the certificate of basic education, and should not be below 25 Gregorian years of age on the day of opening candidacy registration.

Other candidacy requirements, the electoral system, and division of electoral constituencies shall be defined by law in a manner which observes fair representation of the population and governorates and equitable representation of voters. Elections based on the plurality voting system or proportional list, or a combination of both at whatsoever ratio may be adopted.

The President of the Republic may appoint no greater than 5% of the members, the method of nomination thereof shall be stipulated by Law.

Article (103)

A member of the House of Representatives shall devote him/herself on a full time basis for the tasks of membership and his/her post shall be reserved for him/her in accordance with the Law.

Article (104)

As a condition for undertaking his/her duties, a House of Representatives member shall take the following oath: "I swear by The Almighty God to loyally uphold the republican system, respect

the Constitution and the Law, fully uphold the interests of the People, and to safeguard the independence of the nation and the integrity and safety of .”

Article (105)

A House of Representatives member shall receive a remuneration determined by Law. In case the remuneration is changed, such change will only come into force at the commencement of the legislative term following the one during which the change was adopted.

Article (106)

The term of membership in the House of Representatives is five calendar years, commencing from the date of its first session.

Elections for a new House of Representatives shall be held during the sixty days preceding the end of the term of previous House.

Article (107)

The Court of Cassation shall have jurisdiction over the validity of membership in the House of Representatives. Appeals shall be submitted to the Court of Cassation within a period not exceeding thirty days from date on which the final election results are announced. Appeals shall be adjudicated within sixty days from the date of the receipt thereof.

In the event that a judgment declares a membership invalid, the invalidity of the membership shall be effective as of the date on which the court judgment is notified to the House.

Article (108)

In case a seat of a House of Representatives becomes vacant at least six months prior to the expiry of his tenure, the vacant position must be filled in accordance with Law within sixty days from the date on which the House reports the vacancy.

Article (109)

Throughout its membership tenure, no House of Representatives member may, whether in person or by proxy, buy, rent or lease any asset owned by the State or a public-law legal persons or a public sector company or a public enterprise sector company; sell to or barter with the state any part of its own property or conclude a contract with the State as a vendor, supplier, contractor or otherwise as set out by Law. Any of such acts shall be void.

A member must submit a financial estate disclosure upon taking membership and at the end of membership and at the end of each year of membership.

In case a House of Representatives member receives cash or in-kind gift because of or in connection with his/her membership, title thereto shall devolve to the State public treasury.

All the foregoing shall be as regulated by Law.

Article (110)

Membership in the House of Representatives may only be dropped or cancelled if a member has lost confidence and esteem or ceases to satisfy any membership condition based on which he was elected or if he has violated the duties of membership.

The decision of cancellation must be issued by a majority of two-thirds of the members of the House of Representatives.

Article (111)

The House of Representatives shall accept resignation of its members, which must be submitted in writing. To be accepted, a resignation must not be submitted after the House has initiated procedures for cancelling the membership of the resigning member.

Article (112)

A House of Representatives member shall not be held accountable for any opinions expressed concerning the performance of his duty in the House or its committees.

Article (113)

Except in cases of *flagrante delicto*, it shall be prohibited to take any criminal action, under the Articles of felonies and misdemeanors, against a House of Representatives member without the prior permission from the House. In case the House of Representatives is not in session, a permission must be obtained from the House's Bureau, and the House must be notified at its first session.

In all cases, a decision should be taken on any motion for permission to take legal action against a House of Representatives member within thirty days; otherwise, the motion shall be deemed accepted.

Article (114)

The seat of the House of Representatives shall be in Cairo.

However, in exceptional circumstances, the House may hold its sessions elsewhere, at the request of the President of the Republic or one-third of the members of the House of Representatives.

Any meetings held otherwise and any resolutions passed thereby shall be void.

Article (115)

The President of the Republic shall invite the House of Representatives for its annual ordinary session before the first Thursday of October; failing such invitation, the House is required by the Constitution to meet on the stated day.

The ordinary session shall continue for at least nine months. The President of the Republic shall bring each session to close with the approval of the House. This shall not be permissible except after State's General Budget has been approved.

Article (116)

At the President of the Republic's request or upon a motion signed by at least one tenth of the House members, the House of Representatives may hold an extraordinary meeting to consider an urgent issue.

Article (117)

At the first meeting of its annual regular session, the House of Representatives shall elect, from among its members, a speaker and two deputies for the full legislative term. If the office of any of the aforementioned persons becomes vacant, a substitute shall be elected by the House. The House's internal regulations shall provide for the rules and procedures of election. If any of the aforementioned persons fails to fulfill the duties of his office, one-third of the House members may request to relieve him of his office. The relevant decision shall be issued by a majority of two-thirds of the members.

In all cases, neither the Speaker nor any of the two deputies may be elected for more than two consecutive legislative terms.

Article (118)

The House of Representatives shall set its own internal regulations of its work and the manner of exercising its authorities and maintaining order therein. Such internal regulations shall be issued by a law.

Article (119)

The House of Representatives shall be competent to maintain order therein and this duty shall be incumbent upon the Speaker of the House.

Article (120)

The sessions of the House of Representatives shall be held in public.

The House may hold a secret session at the request of the President of the Republic, the Prime Minister, the Speaker of the House, or at least twenty of the House members. By the majority of

its members, the House shall decide whether the discussion in question is to be conducted in a public or a secret session.

Article (121)

The meetings of the House and resolutions passed thereby shall not be deemed valid unless attended by the majority of its members.

In cases other than those requiring a special majority, resolutions shall be passed by the absolute majority of the members present. In case there is a tie of votes, the subject matter in deliberation shall be deemed rejected.

Laws shall be issued by the absolute majority of the members present, provided that such majority constitutes not less than one third of the House members.

The Laws deemed complementary to the Constitution shall be issued by a majority of two thirds of the House members. Laws regulating presidential or parliamentary or municipal elections, political parties, the judiciary, related to judicial bodies and judicial organizations, and those regulating the rights and freedoms stipulated in the Constitution shall be deemed complementary to the Constitution.

Article (122)

The President of the Republic, the Cabinet, and every House member shall have the right to propose laws.

Every bill presented by the government or one tenth of the House members shall be referred to the competent specialized committees of the House for review and submission of a report to the House. A committee may seek the opinion of experts on the matter in question.

No bill presented by a member can be referred to the specialized committee unless it has been permitted by the committee responsible for proposals and approved by the House. If the committee responsible for proposals rejects a bill, it must provide a reasoned decision.

Any bill or proposed law rejected by the House may not be re-presented during the same legislative term.

(Article 123)

The President of the Republic has the right to issue laws or reject them.

If the President of the Republic objects to a draft law approved by the House of Representatives, he/she shall refer it back to the House of Representatives within thirty (30) days as of the date when the House of Representatives notified the President of such approval. If the President does

not refer the draft law back to the House of Representatives within this period, the draft law shall be deemed a Law and shall be issued.

If the draft law is referred back to the House of Representatives within the aforementioned period and approved again by a majority of two-thirds of its members, it shall be deemed a Law and shall be issued.

Article (124)

The State budget shall include all of its revenues and expenditures without exception. The draft budget shall be submitted to the House of Representatives at least ninety (90) days before the beginning of the fiscal year; and shall not be effective unless approved thereby. Voting thereon shall be made on a section-by-section basis.

The House of Representatives may alter the expenditures stated in the draft budget, except for those allocated to honor a specific State liability.

Should such alteration result in an increase in total expenditures, the House of Representatives must reach an agreement with the Government on the means to procure sources of revenue so as to restore a balance between both. The State budget shall be issued by a law which may include an amendment of another existing law to the extent necessary to achieve such balance.

In all cases, the budget law may not include any provision that puts new burdens on citizens.

The Law shall specify the fiscal year, the method of preparing the State budget, and the provisions of the budgets of public bodies and organizations and their accounts.

The House of Representatives must approve the transfer of any funds from one section of the State budget to another, as well as any expenditure not included therein or in excess of its estimate. Such approval shall be issued by a law.

Article (125)

The final accounts of the State budget must be submitted to the House of Representatives within a period not exceeding six (6) months as of the end of the fiscal year. The annual report of the Central Auditing Organization (CAO) and the latter's notes on the final accounts shall be submitted therewith.

The final accounts shall be put to vote on a section-by-section basis and shall be issued by a law.

The House of Representatives has the right to ask CAO for any additional data or reports.

Article (126)

The Law shall regulate the basic rules for the collection of public funds and the procedures for their disbursement.

Article (127)

The executive power may not obtain a loan or funding or engage in a project that is not listed in the approved State budget which entails expenditure from the State treasury within a subsequent period, except with the approval of the House of Representatives.

Article (128)

The Law shall specify the rules for setting salaries, pensions, indemnities, subsidies, and bonuses which are paid from the State treasury; and shall set out the cases in which exception from such rules may be made, as well as, the authorities in charge of their application.

Article (129)

Every member of the House of Representatives may direct any question to the Prime Minister, or one of his/her deputies, or a minister, or one of his/her deputies on any matter that falls within their respective authorities; and the latter must respond to such question during the same annual session.

The member may withdraw the question at any time. A question may not be converted to an interrogation in the same session.

Article (130)

Every member of the House of Representatives may direct an interrogation to the Prime Minister, or one of his/her deputies or a minister or one of his/her deputies in order to hold them accountable for matters that fall within their respective authorities.

The House of Representatives shall discuss the interrogation at least seven (7) days after its submission, within a maximum of sixty (60) days, except in cases of urgency as determined by the House and agreed by the Government.

Article (131)

The House of Representatives may decide to withdraw confidence from the Prime Minister, or one of his/her deputies or a minister or one of his/her deputies.

Filing a motion of no confidence may not be made except after an interrogation and upon a proposal submitted by at least one-tenth of the members of the House of Representatives. The House of Representatives shall issue a decision after considering the interrogation. Withdrawal of confidence requires the affirmative vote of a majority of the House members.

In all cases, a no-confidence motion may not be filed in connection with an issue that has already been decided upon in the same annual session.

If the House of Representatives decides to withdraw confidence from the Prime Minister, or one of his/her deputies, or a minister or one of his/her deputies, with whom the Government has announced its solidarity with before voting, then that Government must resign. If the no-confidence resolution concerns a certain member of the Government, that member must resign.

Article (132)

At least 20 members of the House of Representatives may request the discussion of a public issue for the purpose of seeking a clarification on the Government's policy relating to such issue.

Article (133)

Any member of the House of Representatives may present a proposed recommendation on a public issue to the Prime Minister or one of his/her deputies, or a minister or one of his/her deputies.

Article (134)

Every member of the House of Representatives may submit an early day motion or urgent statement to the Prime Minister or one of his/her deputies, or a minister or one of his/her deputies in relation to urgent matters of public importance.

Article (135)

The House of Representatives may form a special fact-finding committee or entrust one of its existing committees with finding facts on a public matter or inspect the activities of an administrative body, public agency or public projects, for the purpose of finding facts on a specific issue, and inform the House of Representatives of the true financial, administrative or economic status, or to conduct investigations on a past activity or otherwise. The House of Representatives shall decide what it deems appropriate in this regard.

In order to carry out its mission, such a committee may collect the evidence it deems necessary and may summon individuals to give statements. All bodies shall comply with the committee's requests and place at its disposal all the documents, evidence, or anything otherwise required.

In all cases, every member of the House of Representatives is entitled to obtain any data or information from the executive power which is related to its performance of his/her duties at the House of Representatives.

Article (136)

The Prime Minister and his deputies, and the ministers and their deputies may attend the sessions of either the House of Representatives or any of its committees. Their attendance shall be obligatory if requested by the House. They may seek assistance from senior officials of their choice.

They must be heard whenever they request to speak. They must answer questions relating to issues under discussion, without having the right to vote.

Article (137)

The President of the Republic may not dissolve the House of Representatives except in cases of necessity, by a reasoned decision and following a public referendum. The House of Representatives may not be dissolved for the same reason which caused the dissolution of the previous House.

The President of the Republic shall issue a decision to suspend the sessions of the House and hold a referendum on the dissolution within no more than twenty days. If the voters agree by majority of valid votes, the President of the Republic shall issue the decision of dissolution, and call for new elections within no more than thirty days from the date of the stated decision. The new House shall convene within the ten days following the announcement of final the results.

Article (138)

Every citizen may submit written proposals to the House of Representatives regarding public issues, and may also submit complaints to the House of Representatives to be referred to the competent ministers. If the House of Representatives so requests, the Minister must provide clarifications, and the concerned person shall be informed of the result.

Chapter Two

The Executive Power

Branch I

The President of the Republic

Article (139)

The President of the Republic is the head of State and the head of executive power. He shall care for the interests of the people, safeguard the independence of the nation and the territorial integrity and safety of its lands, abide by the provisions of the Constitution, and assume his authorities as prescribed therein.

Article (140)

The President of the Republic shall be elected for a period of four calendar years, commencing from the day following the termination of the term of his predecessor. The President may only be reelected once.

The procedures for electing the President of the Republic shall be initiated at least one hundred twenty days prior to the end of the presidential term. The result must be announced at least thirty days prior to the end of such term.

The President of the Republic may not hold any partisan position throughout his presidential term.

Article (141)

A presidential candidate must be an Egyptian born to Egyptian parents, and neither he or his parents or his spouse may have held any other nationality. He must enjoy civil and political rights, must have performed the military service or have been exempted therefrom by law, and shall not be less than forty calendar years of age on the day of commencing candidacy registration. Other requirements for candidacy shall be set out by Law.

Article (142)

To be accepted as a candidate for the presidency, candidates must receive the recommendation of at least twenty elected members of the House of Representatives, or support from at least twenty five thousand citizens enjoying the right to vote, in at least fifteen governorates, with a minimum of one thousand supporter from each governorate.

In all cases, no one can support more than one candidate as regulated by Law.

Article (143)

The President of the Republic shall be elected by direct secret ballot, with an absolute majority of valid votes.

Procedures for electing the President of the Republic are regulated by Law.

Article (144)

As a condition for assuming his duties, the President of the Republic shall take the following oath before the House of Representatives: “I swear by The Almighty God to loyally uphold the republican system, respect the Constitution and the Law, fully uphold the interests of the People and to safeguard the independence of the nation and the integrity and safety of its territories.”

In case of the absence of the House of Representatives, the oath shall be taken before the General Assembly of the Supreme Constitutional Court.

Article (145)

The salary of the President of the Republic shall be determined by Law. The President may not receive any other salary or remuneration. No modification to the salary may come into effect during the presidential term during which it is approved. Throughout his presidential term, the

President may not, whether in person or by proxy, be self-employed, engage in commercial, financial or industrial activity, buy, rent or lease any property owned by the state or by a public-law legal person, or a public enterprise sector company, sell or barter any part of his own property with the State, or conclude a contract with the State as a vendor, supplier, contractor or otherwise as set out by Law. Any of such acts shall be void.

The President must submit a financial estate disclosure upon taking office, upon leaving it, and at the end of each year of service. Such financial estate disclosure is to be published in the Official Gazette.

Throughout the presidential term, the President of the Republic may not award himself any orders, decorations or medals.

In case the President of the Republic receives, in person or by proxy a cash or in-kind gift because of or in connection with the presidential office, title thereto shall devolve to the State public treasury.

Article (146)

The President of the Republic shall assign a Prime Minister to form the government and introduce his/her program to the House of Representatives. If his government does not win the confidence of the majority of the members of the House of Representatives within thirty days at the most, the President shall appoint a Prime Minister who is nominated by the party or the coalition that holds the majority or the highest number of seats in the House of Representatives. If the government of such prime minister fails to win the confidence of the majority of the members of the House of Representatives within thirty days, the House shall be deemed dissolved, and the President of the Republic shall call for the election of a new House of Representatives within sixty days from the date on which the dissolution is announced.

In all cases, the total periods for choice of government set forth in this Article shall not exceed sixty days.

In case the House of Representatives is dissolved, the Prime Minister shall present to the new House of Representatives the formation of his government and its program, at its first session.

In the event the government is chosen from the party or the coalition that holds the majority or the highest number of seats in the House of Representatives, the President of the Republic shall, in consultation with the Prime Minister, choose the Ministers of Defense, Interior, Foreign Affairs and Justice.

Article (147)

The President of the Republic may relieve the government from carrying out its duties, subject to the approval of the majority of the members of the House of Representatives.

The President of the Republic may conduct a cabinet reshuffle after consultation with the Prime Minister and approval of the House of Representatives by an absolute majority of the members present , which must not be less than one third of its members.

Article (148)

The President of the Republic may delegate some of his powers to the Prime Minister, his deputies, ministers, or governors. None of them may delegate such authorities to others. All of the foregoing shall be regulated by Law.

Article (149)

The President of the Republic may call the government to convene a meeting to consult on important issues, and the President shall preside over the meetings that he attends.

Article (150)

Jointly with the Cabinet, the President of the Republic shall set the State's General Policy and oversee its implementation as stated in the Constitution.

The President of the Republic may deliver a statement on the State's General Policy before the House of Representatives at the opening of its annual regular session.

The President may deliver other statements or address other messages to the House.

Article (151)

The President of the Republic shall represent the State in its foreign relations and conclude treaties and ratify them after the approval of the House of Representatives. Such treaties shall acquire the force of law following their publication in accordance with the provisions of the Constitution.

Voters must be called for referendum on the treaties related to making peace and alliance, and those related to the rights of sovereignty. Such treaties shall only be ratified after the announcement of their approval in the referendum.

In all cases, no treaty may be concluded which is contrary to the provisions of the Constitution or which results in ceding any part of state territories.

Article (152)

The President of the Republic is the Supreme Commander of the Armed Forces. The President shall not declare war, or send the armed forces to a combat mission outside the State borders,

except after consultation with the National Defense Council and obtaining the approval of the House of Representatives by a majority of two-thirds of the members.

In case the House of Representatives has not been elected, the Supreme Council of the Armed Forces (SCAF) must be consulted and the approval of both the Cabinet and National Defense Council must be obtained.

Article (153)

The President of the Republic shall appoint and dismiss civil and military employees and political representatives and accredit political representatives of foreign States and bodies in accordance with the Law.

Article (154)

After consultation with the Cabinet, the President of the Republic may declare the state of emergency as regulated by Law. Such declaration must be presented to the House of Representatives within the following seven days to decide thereon as it deems fit.

If the declaration takes place while the House of Representatives is not in regular session, the House must be invited to convene immediately in order to consider such declaration.

In all cases, the declaration of the state of emergency must be approved by a majority of the members of the House of Representatives. The state of emergency shall be declared for a specified period not exceeding three months, which may only be extended for another similar period after obtaining the approval of two-thirds of the House members. In case the House of Representatives has not been elected, the matter shall be referred to the Cabinet for approval provided, however, that it is presented to the new House of Representatives at its first session.

The House of Representatives may not be dissolved while the state of emergency is in force.

Article (155)

After consultation with the Cabinet, the President of the Republic may issue a pardon or reduce a sentence.

General amnesty may only be granted by virtue of a law, ratified by the majority of the members of the House of Representatives.

Article (156)

In case an event which requires taking urgent measures, which cannot be delayed, occurs while the House of Representatives is not in session, the President of the Republic shall call the House for an urgent meeting to present the matter thereto. If the House of Representatives has not been elected, the President of the Republic may issue decrees having the force of law, provided that

they are then presented to, discussed and approved by the new House of Representatives within fifteen days from the commencement of its session. If such decrees are neither presented nor discussed by the House, or if they are presented but not ratified thereby, their force of law shall retroactively be revoked without need for issuing a decision to that effect, unless the House confirms its effectiveness during the previous period or decides to settle the consequences thereof.

Article (157)

Without prejudice to the provisions of the Constitution, the President of the Republic may call for a referendum on issues relating to the supreme interests of the State.

In case a call for referendum involves more than one issue, voting must be made separately on each issue.

Article (158)

The President of the Republic may submit his resignation to the House of Representatives. If the House has not been elected, he shall submit the same to the General Assembly of the Supreme Constitutional Court.

Article (159)

Accusing the President of the Republic of violating the provisions of the Constitution, treason or any other felony must be based on a motion signed by at least the majority of the members of the House of Representatives. The indictment shall only be issued by the majority of two-thirds of the members of the House of Representatives and after carrying an investigation by the Prosecutor General. In case the Prosecutor General is prevented from same, he shall be replaced by one of his assistants.

As soon as this indictment is issued, the President of the Republic shall be stopped from carrying out his duties; this is considered as a temporary impediment precluding the President from performing his competences until a verdict is issued in the case.

The President of the Republic shall be tried before a special court headed by the President of the Supreme Judicial Council with the membership of the most senior deputy of the President of the Supreme Constitutional Court, the most senior deputy of the President of the State Council, and the two most senior Presidents of the Courts of Appeal; prosecution is to be carried out before such court by the Prosecutor General. In case one of the aforementioned persons is prevented from serving, he shall be replaced by the person following him in seniority. The court verdicts shall be final and not subject to appeal.

The Law shall regulate the investigation and trial procedures. In case of conviction, the President of the Republic shall be relieved of his post without prejudice to any other penalties.

Article (160)

In case the President of the Republic is temporarily prevented from assuming his powers, the Prime Minister shall act in his place.

If the President of the Republic's office becomes vacant due to his resignation, death, or permanent inability to work, the House of Representatives shall announce the vacancy. If such vacancy is attributable to any other reason, such announcement shall be made by a majority of at least two thirds of the members of House of Representatives. The House of Representatives shall then notify the National Electoral Commission, and the Speaker of the House of Representatives shall temporarily assume the powers of the President of Republic.

In case the House of Representatives has not been elected, the General Assembly of the Supreme Constitutional Court and its Chairman shall replace the House of Representatives and its Speaker with respect to the above.

In all events, a new President must be elected within a period not exceeding ninety (90) days as of the date of vacancy. In such a case, the presidential term shall start as of the date of announcement of the election results.

The interim President may not run for presidency or request any amendment to the Constitution or dissolve the House of Representatives or dismiss the Government.

Article (161)

The House of Representatives may propose to withdraw confidence from the President of the Republic and hold early presidential elections upon filing a reasoned motion to be signed by at least the majority of the members of the House of Representatives and upon approval of two-thirds of its members. The motion may only be filed once for the same reason within the presidential term.

Upon approval of the proposal to withdraw confidence, the matter of withdrawing confidence from the President of the Republic and holding early presidential elections shall be put to public referendum to be called by the Prime Minister. If the majority approves the decision to withdraw confidence, the President of the Republic shall be relieved from his office, the office of the President of the Republic shall be deemed vacant, and early presidential elections shall be held within sixty (60) days as of the date of announcing the results of referendum. If the result of the referendum is in the negative, the House of Representatives shall be deemed dissolved, and the President of the Republic shall call for election of a new House of Representatives within thirty (30) days as of the date of dissolution.

Article (162)

If the vacancy of the presidential office coincides with the holding of a referendum or the election of the House of Representatives, the presidential elections shall be given priority. The then existing House of Representatives shall remain in place until the completion of the presidential elections.

Branch II

The Government

Article (163)

The government is the supreme executive and administrative body of the State, and consists of the Prime Minister, his/her deputies , the Ministers, and their deputies.

The Prime Minister shall head the government, oversee its work, and direct the performance of its functions.

Article (164)

The Prime Minister shall be an Egyptian citizen born to Egyptian parents and neither he/she nor his/her spouse may hold the nationality of any other country, shall enjoy civil and political rights, shall have been drafted into or legally exempted from the military service, and shall be at least thirty five (35) Gregorian years of age at the time of appointment.

Anyone appointed as a member of the government shall be an Egyptian citizen, shall enjoy all civil and political rights, shall have been drafted into or legally exempted from the military service, and shall be at least thirty (30) Gregorian years of age at the time of appointment.

It is prohibited to combine between the membership of the government and the membership of the House of Representatives. . If a member of the House of Representatives is appointed to the government, the seat thereof in the House shall become vacant as at the date of this appointment.

Article (165)

As a condition for assuming their duties, the Prime Minister and members of government shall take the following oath before the President of the Republic: "I swear by Allah, the Almighty, to loyally uphold the republican system, to respect the Constitution and the law, to fully uphold the interest of the People, and to safeguard the independence of the nation and the integrity and safety of its territories."

Article (166)

The salary of the Prime Minister and the members of government shall be defined by Law, and they may not receive any other salary or remuneration, nor engage, throughout the term of their respective offices, whether in person or through an intermediary, in self-professions, or commercial, financial or industrial business activities. Further, they shall not buy or rent any property owned by the state or a public legal person or a public sector company, or a public enterprise sector company, nor lease or sell any of their property to, or barter the same with the State, nor conclude a contract with the State as vendors, suppliers, contractors or otherwise. Any such actions shall be deemed null and void.

The Prime Minister and the members of government shall submit a financial estate disclosure upon taking office, upon leaving the same, and at the end of each year of service. The financial estate disclosure shall be published in the Official Gazette.

If the Prime Minister or any of the members of government receive cash or in-kind gifts, because of or in relation to their posts, the ownership thereof shall transfer to the State's treasury. The foregoing shall be regulated by Law.

Article (167)

The government shall particularly exercise the following functions:

- 1- To collaborate with the President of the Republic in developing the general policy of the State, and to supervise its implementation;
- 2- To maintain the security of the nation, and to protect the rights of citizens and the interest of the State;
- 3- To direct, coordinate and follow up on the work of the ministries and their affiliated public bodies and organizations;
- 4- To prepare draft bills and decrees;
- 5- To issue administrative decrees in accordance with the law, and to follow up on their implementation;
- 6- To develop the draft for the general plan of the State;
- 7- To prepare the draft annual budget of the State;
- 8- To conclude loan contracts and to grant the same in accordance with the provisions of the Constitution;
- 9- To implement the laws.

Article (168)

Within the framework of the State's general policy, the minister shall develop the Ministry's general policy in collaboration with the competent authorities, supervise the implementation thereof and provide guidance and oversight.

Top management posts in all ministries shall include a permanent undersecretary to ensure institutional stability and raising the level of efficient implementation of its policy.

Article (169)

Any member of the government may make a statement before the House of Representatives, or one of its committees, concerning any matters falling within his/her mandate.

The House or the committee shall discuss such statement and convey its opinion regarding it.

Article (170)

The Prime Minister shall issue the necessary regulations for the execution of laws, in a manner that shall not involve any disruption of, amendment to, or exemption from their execution, and shall have the right to delegate others in issuing them, unless the law designates who shall issue the required executive regulations.

Article (171)

Upon the approval of the Council of Ministries, the Prime Minister shall issue the decrees necessary for the creation and organization of public utilities and services.

Article (172)

Upon the approval of the Council of Ministries, the Prime Minister shall issue the disciplinary regulations.

Article (173)

The Prime Minister and the members of the government shall be subject to the general rules governing investigation and trial procedures, in case that they commit crimes while or by reason of exercising the functions of their posts. The end of their term of service shall not preclude the institution or resumption of prosecution against them.

In case that the Prime Minister or any of the members of the government is accused of treason, the provisions stipulated in Article 159 herein shall apply.

Article (174)

In case of resignation of the Prime Minister, the letter of resignation shall be submitted to the President of the Republic. If a minister offers resignation, it shall be submitted to the Prime Minister.

Branch III

The Local Administration

Article (175)

The State shall be divided into administrative units that enjoy legal personality. Such units shall include governorates, cities and villages. Other administrative units that have the legal personality may be established, if public interest so requires.

When establishing or abolishing local units or amending their boundaries, the economic and social conditions shall be taken into account. All the foregoing shall be regulated by Law.

Article (176)

The state shall ensure administrative, financial, and economic decentralization. The law shall regulate the methods of empowering administrative units to provide, improve, and well manage public facilities, and shall define the timeline for transferring powers and budgets to the local administration units.

Article (177)

The State shall ensure the fulfillment of the needs of local units in terms of scientific, technical, administrative and financial assistance, and the equitable distribution of facilities, services and resources, and shall bring development levels in these units to a common standard and achieve social justice between these units, as regulated by Law.

Article (178)

Local units shall have independent financial budgets.

The resources of local units shall include, in addition to the resources allocated to them by the State, taxes and duties of a local nature, whether primary or auxiliary. The same rules and procedures for the collection of public funds by the State shall apply to collection of such taxes and duties.

The foregoing shall be regulated by law.

Article (179)

The law shall regulate the manner in which governors and heads of other local administrative units are appointed or elected, and shall determine their competences.

Article (180)

Every local unit shall elect a local council by direct and secret ballot for a term of four years. A candidate shall be at least twenty one (21) Gregorian years of age. The law shall regulate the other conditions for candidacy and procedures of election, provided that one quarter of the seats shall be allocated to youth under thirty five (35) years of age and one quarter shall be allocated for women, and that workers and farmers shall be represented by no less than 50 percent of the total number of seats, and these percentages shall include an appropriate representation of Christians and people with disability.

Local councils shall be competent to follow up the implementation of the development plan, monitor of the different activities, exercise of oversight over the executive authorities using tools such as providing proposals, and submitting questions, briefing motions, interrogations and others, and to withdraw confidence from the heads of local units, as regulated by Law.

The law shall define the competences of other local councils, their financial sources, guarantees of their members, and the independence of such councils.

Article (181)

Local councils' resolutions that are issued within their respective mandates shall be final. They shall not be subject to the interference by the executive authority, except to prevent the council from overstepping its jurisdiction, or causing damage to the public interest or the interest of other local councils.

Any dispute pertaining to the jurisdiction of these local councils in villages, centers or towns shall be settled by the governorate-level local council. Disputes regarding the jurisdiction of governorate-level local councils shall be resolved, as a matter of urgency, by the General Assembly of the Legal Opinion and Legislation Departments of the State Council. The foregoing shall be regulated by Law.

Article (182)

Every local council shall develop its own budget and final accounts, as regulated by Law.

Article (183)

Local councils shall not be dissolved by virtue of a general administrative action.

The Law shall regulate the manner of dissolving and re-electing local councils.

Chapter Three

The Judiciary

Branch I

General Provisions

Article (184)

The Judiciary is an autonomous authority that carries out its tasks through courts of all types and degrees. Courts shall issue their rulings in accordance with the law, and the law shall define the jurisdiction of the courts. Interference in the affairs of the courts or in the lawsuits under their consideration shall constitute a crime that does not lapse by prescription.

Article (185)

Each judicial body or organization shall manage its own affairs, and shall have an independent budget, the components of which shall be fully examined by the House of Representatives. Upon its approval, this budget shall be included in the State budget under one budget line. Each judicial body or organization shall be consulted with regards to the bills regulating its affairs.

Article (186)

Judges are independent and immune to dismissal, are subject to no other authority but the law, and are equal in rights and duties. The conditions and procedures for their appointment, secondment and retirement shall be regulated by the law. The law shall further regulate their disciplinary accountability. They may not be fully or partly seconded except to the agencies determined by the law and to perform the tasks set forth therein. All the foregoing shall be in the manner that maintains the independence and impartiality of the judiciary and judges, and shall prevent conflicts of interest. The rights, duties and guarantees granted to them shall be specified by Law.

Article (187)

Court sessions shall be public, unless the court decides on its secrecy to safeguard public order or public morals. In all cases, court judgments shall be pronounced in publicly held sessions.

Branch II

The Judiciary & The Prosecution

Article (188)

The judiciary shall decide on all disputes and crimes, except those falling within the jurisdiction of other judicial bodies. It shall solely have the jurisdiction to settle disputes relating to its own

members. The affairs of the judiciary shall be managed by a Supreme Council, the structure and jurisdiction of which shall be regulated by Law.

Article (189)

The Public Prosecution is an integral part of the judiciary. It shall carry out the investigation and prosecution of criminal cases, except those excepted by the law. The law shall determine its other jurisdictions.

The Prosecutor General shall be in charge of the Public Prosecution. He shall be chosen by the Supreme Council of the Judiciary from among those ranked as Vice presidents of the Court of Cassation, or from those ranked as Presidents of the Courts of Appeal or from the Assistants to the Prosecutor General. He shall be appointed by virtue of a Presidential Decree for four years or for the remaining years until he reaches the age of retirement whichever is earlier, and this appointment shall be only once during his term of service.

Branch III

The State Council

Article (190)

The State Council is an autonomous judicial body, and it shall have the exclusive jurisdiction to settle administrative disputes and disputes relevant to the execution of all its rulings. It shall have jurisdiction over disciplinary suits and appeals, and the exclusive jurisdiction to provide advice regarding legal issues to the administrative bodies determined by the law. It shall also review and draft bills and decrees of legislative nature, and shall review draft contracts to which the state or any other public authority is a party. The law shall determine its other jurisdictions.

Chapter Four

The Supreme Constitutional Court

Article (191)

The Supreme Constitutional Court is an autonomous and independent judicial body having its headquarters in Cairo. However, in cases of emergency it may, upon the approval of its General Assembly, hold its sessions elsewhere in Egypt. It shall have an independent budget, which shall be fully examined by the House of Representatives. Upon its approval, this budget shall be included in the State budget under one budget line. The General Assembly of the court shall manage its affairs and it shall be consulted regarding bills relevant to its affairs.

Article (192)

The Supreme Constitutional Court shall be solely competent to decide on the constitutionality of laws and regulations, to interpret legislative provisions, and to adjudicate on disputes pertaining to the affairs of its members, on jurisdictional disputes between judicial bodies and entities that have judicial jurisdiction, on disputes pertaining to the implementation of two final contradictory judgments, one of which is rendered by a judicial body or an authority with judicial jurisdiction and the other is rendered by another , and on disputes pertaining to the execution of its judgments and decisions.

The law shall determine the Court's other competences and regulate the procedures that are to be followed before the Court.

Article (193)

The Court shall be composed of a President and a sufficient number of deputies to the President.

The Commissioners of the Supreme Constitutional Court shall have a President and a sufficient number of Commission presidents, advisors and assistant advisors.

The General Assembly of the Court shall elect its President from among the most senior three vice-presidents of the Court. It shall further choose the vice-presidents and the members of its Commissioners, and the appointment thereof shall be made by virtue of a decree by the President of the Republic. The foregoing shall be regulated by Law.

Article (194)

The President and the vice-presidents of the Supreme Constitutional Court, and the President and members of its Commissioners are independent and immune to dismissal, and are subject to no other authority but the law. The law shall set out the conditions they must meet. The Court shall be responsible for their disciplinary accountability, as stated by the law. All rights, duties and guarantees granted to other members of the judiciary shall apply to them.

Article (195)

The judgments and decisions issued by the Supreme Constitutional Court shall be published in the Official Gazette, and they shall be binding upon everyone and all of the State authorities. They shall have *Res judicata* vis-à-vis all of them.

The law shall regulate the consequences of a judgment rendering a text of law unconstitutional.

Chapter Five

Judicial Organizations

Article (196)

The State Lawsuits Authority is an independent judicial organization. It undertakes the legal representation of the State in lawsuits filed by or against the State, and of proposing amicable settlement of disputes at any stage of litigation. It shall further have technical oversight on the departments of legal affairs of the State administrative bodies with regard to cases handled thereby. It shall draft contracts referred thereto by administrative bodies and to which the State is party. The foregoing shall be regulated by Law.

Other competences of the Organization shall be defined by the law. Its members shall have all of the guarantees, rights and duties assigned to other members of the Judiciary. Their disciplinary accountability shall be regulated by the law.

Article (197)

The Administrative Prosecution is an independent judicial organization. It undertakes investigations into financial and administrative violations, and also those referred to it. Regarding these violations, the Administrative Prosecution shall have the authorities of the administrative body to impose disciplinary penalties. Challenges against the decision of the Prosecution shall be filed before the competent disciplinary court at the State Council. It shall further initiate actions, appeals, and disciplinary proceedings before the State Council courts. All the foregoing shall be regulated by Law.

Other competences of the Administrative Prosecution shall be defined by law. All guarantees, rights and duties assigned to other members of the Judiciary shall apply to its members. Their disciplinary accountability shall be regulated by the law.

Chapter Six

The Legal Profession

Article (198)

The legal profession is a free profession which participates with the Judicial Authority in the establishment of justice and the rule of law, and ensures the right to defense. It shall be practiced by independent attorneys, and attorneys of public authorities, public sector companies and public enterprise sector companies. All attorneys shall have, while performing their duties to uphold the right to defense before the courts, the guarantees and protection granted to them by the law. Such rights shall also be granted to them before investigation and inquiry authorities. Except in cases of *flagrante delicto*, the arrest or detention of attorneys while exercising their right to defense shall be prohibited. The foregoing shall be determined by the law.

Chapter Seven

Experts

Article (199)

Judicial experts, forensic medicine experts, and notary public's technical staff undertake their duties independently, and shall have the guarantees and protection required for them to perform their tasks, as regulated by the Law.

Chapter Eight

The Armed Forces & The Police

Branch I

The Armed Forces

Article (200)

The Armed Forces belong to the People, and their duty is to protect the country, and preserve its security and the integrity of its territories. Only the State shall be entitled to establish the Armed Forces. No individual, organization, entity, or group shall be allowed to create military or quasi-military squadrons, groups or organizations.

The Armed Forces shall have a supreme council, as regulated by Law.

Article (201)

The Minister of Defense is the Commander in Chief of the Armed Forces, and shall be appointed from among its officers.

Article (202)

The Law regulates the military mass mobilization, and determines the conditions of the military service, promotion and retirement in the Armed Forces.

The judicial committees for officers and personnel of the Armed Forces shall be solely competent to adjudicate on all administrative disputes pertaining to decisions affecting them. The Law regulates the rules and procedures for challenging the decisions made by these committees.

Branch II

National Defense Council

Article (203)

National Defense Council shall be chaired by the President of the Republic and comprise the membership of the Prime Minister, the Speaker of the House of Representatives, the Minister of Defense, the Minister of Foreign Affairs, the Minister of Finance and the Minister of Interior, the Chief of the General Intelligence Service, the Chief of Staff of the Armed Forces as well as the Commanders of the Navy, the Air Forces and Air Defense, the Chief of Operations of the Armed Forces, and the Head of Military Intelligence.

The Council shall be competent to examine the matters pertaining to preserving the security and integrity of the country, and to discuss the budget of the Armed Forces, which shall be included in the State budget under one budget line. The opinion of the Council shall be obtained on the bills concerning the Armed Forces.

Other competences of the Council shall be specified by Law.

Upon discussing the budget, the Head of the Financial Affairs Department of the Armed Forces and the heads of the Planning and Budgeting Committee and the National Security Committee at the House of Representatives shall join the Council.

The President of the Republic may invite any person having relevant expertise to attend the Council's meetings without having the right to vote.

Branch III

Military Courts

Article (204)

The Military Court is an independent judicial body exclusively competent to adjudicate on all crimes pertaining to the Armed Forces, the officers and personnel thereof, and their equivalents, and on the crimes committed by the personnel of the General Intelligence while and by reason of performing their duties.

No civilian shall face trial before the Military Court, except for crimes that constitute a direct assault against military facilities or camps of the Armed Forces, or their equivalents, against military zones or border zones determined as military zones, against the Armed Forces' equipment, vehicles, weapons, ammunition, documents, military secrets, or its public funds, or against military factories; crimes pertaining to military service; or crimes that constitute a direct assault against the officers or personnel of the Armed Forces by reason of performing their duties.

The law shall define such crimes, and specify the other competences of the Military Court.

Members of the Military Court shall be independent and shall be immune to dismissal. They shall have all the guarantees, rights and duties stipulated for the members of other judicial bodies.

Branch IV

National Security Council

Article (205)

The National Security Council shall be chaired by the President of the Republic, and comprise the membership of the Prime Minister, the Speaker of the House of Representatives, the Minister of Defense, the Minister of Interior, the Minister of Foreign Affairs, the Minister of Finance, the Minister of Justice, the Minister of Health, the Minister of Communication and the Minister of Education, the Chief of the General Intelligence Service, and the Head of the Committee of Defense and National Security at the House of Representatives.

The Council shall be responsible for adopting strategies for establishing the security of the country and facing disasters and crises of all kinds, shall take the necessary measures to contain them, to identify sources of threat to the Egyptian national security, inside the country or abroad, and to undertake the necessary actions to address them at both official and popular levels.

The Council may invite any person having relevant expertise to attend its meetings without having the right to vote.

The law shall determine the other competences of the Council and its regulations.

Branch V

The Police

Article (206)

The police force is a statutory civil body that is dedicated to the service of the People and its loyalty shall be to the People. It shall ensure safety and security of the citizens, preserve public order and morality. It shall comply with the duties set out in the Constitution and the law, and shall respect human rights and fundamental freedoms. The State shall guarantee that the staff of the Police force perform their duties, and the relevant guarantees shall be regulated by Law.

Article (207)

A supreme police council shall be formed from among the most senior officers of the police force and the Head of the Legal Opinion Department at the State Council. The Council shall be competent to assist the Minister of Interior in the organization of the Police force and management of the affairs of its staff members. The other competences of the Council shall be determined by Law. The Council shall be consulted in connection with any laws pertaining to the police force.

Chapter Nine

National Elections Commission

Article (208)

The National Elections Commission is an independent authority and shall be solely competent to administer referenda and elections of the president, the parliament and the local councils. Such administration shall include the development and updating of a database for voters, proposing the division of constituencies, determination of controls for promotion and funding of electoral campaigns, as well as electoral expenditure, the disclosure of such expenditure, the supervision of such controls, the facilitation of the procedures for out-of-country voting by expatriate Egyptians, and other procedures till the announcements of the results.

The foregoing shall be regulated by law.

Article (209)

The National Elections Commission shall be administered by a board composed of 10 members to be equally assigned on full time basis from among those ranked as Vice-presidents of the Court of Cassation, those ranked as Presidents of the Courts of Appeal, Vice-presidents of the State Council, the State Lawsuits Organization and the Administrative Prosecution. They shall be selected by the Supreme Judicial Council and special councils of the aforementioned judicial bodies and organizations, as the case may be, provided that they are not members thereof. They shall be appointed by virtue of a decree by the President of the Republic. They shall be assigned to work on a full time basis at the Commission for one term of six years. The Commission shall be chaired by the most senior judge at the Court of Cassation.

Half of the members of the Council shall be replaced every three years.

The Commission may seek the assistance of independent public figures, specialists, and those deemed to have relevant expertise in the field of elections. They shall not have the right to vote.

The Commission shall have a permanent executive body. The law shall determine the composition and constitution of such executive body, and the rights, duties and guarantees of its members in a way that achieves their neutrality, independence and integrity.

Article (210)

Voting and counting of votes in referenda and elections shall be administered by members of the Commission under the overall supervision of its Board. It may seek the help of members of judicial organizations.

The voting and counting of votes in elections and referenda which take place during the 10 years following the effective date of this Constitution shall be totally overseen by members of judicial bodies and organizations according to the Law.

The High Administrative Court shall be competent to adjudicate on challenges filed against the Commission's decisions pertaining to referenda, presidential and parliamentary elections, and the results thereof. Challenges against elections of local councils shall be filed before the Administrative Courts. Dates to file challenges against these decisions shall be specified by law, provided that challenges shall be finally decided within ten days from the date of recording the challenge.

Chapter Ten

Supreme Council for the Regulation of Media

Article (211)

The Supreme Council for the Regulation of Media is an independent entity that has a legal personality, and enjoys technical, financial and administrative independence, and has an independent budget.

The Council shall be competent to regulate the affairs of audio and visual media and regulate the printed and digital press, and other media means.

The Council shall bear the responsibility for guaranteeing and protecting the freedom of press and media as stipulated in the Constitution, safeguarding its independence, neutrality, plurality and diversity, preventing monopolistic practices, monitoring the legality of the sources of funding of press and media institutions and developing the controls and criteria necessary to ensure compliance by the press and media outlets with the professional and ethical standards, and national security needs as stated in the Law.

The law shall determine the composition and regulations of the Council, and the employment conditions for its staff.

The Council shall be consulted with respect to the bills and regulations related to its scope of competence..

Article (212)

The National Press Organization is an independent organization that shall manage and develop state-owned press institutions and their assets, as well as ensure their modernization, independence, neutrality and their adherence to good professional, administrative and economic standards.

The law shall determine the composition and regulations of the Organization, and the employment conditions for its staff.

It shall be consulted with respect to the bills and regulations pertaining to its scope of work. .

Article (213)

The National Media Organization is an independent organization that shall manage and develop state-owned visual, audio and digital media outlets and their assets, as well as ensure their development, independence, neutrality and their adherence to good professional, administrative and economic standards.

The law shall determine the composition and regulations of the Organization and the employment conditions for its staff.

It shall be consulted with respect to the bills and regulations pertaining to its scope of work. .

Chapter Eleven

National Councils, Autonomous Organizations & Control Agencies

Branch I

National Councils

Article (214)

The law shall specify the independent national councils, including the National Council for Human Rights, the National Council for Women, the National Council for Childhood and Motherhood, and the National Council for Disabled Persons. The law shall state the composition, mandates, and guarantees for the independence and neutrality of their respective members. Each council shall have the right to report to the competent authorities any violations pertaining to their fields of work.

These councils shall have legal personalities and shall be technically, financially, and administratively independent. They shall be consulted with respect to the bills and regulations pertaining to their affairs and fields of work.

Branch II

Autonomous Organizations and Control Agencies

Article (215)

Autonomous Organizations and control agencies shall be specified by Law. These organizations and agencies shall have legal personality, and shall be technically, financially and administratively independent. They shall be consulted with respect to the bills and regulations that relate to their fields of work. These bodies and agencies shall include the Central Bank, the Egyptian Financial Supervisory Authority (Efsa), the Central Auditing Organization (CAO), and the Administrative Control Authority.

Article (216)

The formation of each individual autonomous organization or regulatory agency shall be enacted by a law defining its competences and regulations, and stipulating guarantees for its independence, the necessary protection for its members, and their employment conditions in a way that ensures their neutrality and independence.

The President of the Republic shall appoint the heads of such organizations and regulatory agencies, upon the approval of the House of Representatives by a majority of its members, for a one-time renewable term of four years. They shall not be dismissed, except in the cases stated in the law. The same prohibitions applicable to the Ministers shall apply to these heads.

Article (217)

Autonomous organizations and control agencies shall submit annual reports to the President of the Republic, the House of Representatives and the Prime Minister, immediately after their issuance.

The House of Representatives shall examine such reports and take the appropriate action within a period not exceeding four months from the date of receipt. The reports shall be made available to the public.

Autonomous organizations and control agencies shall notify the competent investigation authorities of any evidence discovered in relation to violations or crimes. They shall take the necessary measures with regards to these reports within a specified period of time. The foregoing shall be regulated by Law.

Article (218)

The State shall fight corruption, and the competent control agencies and organizations shall be identified by Law.

Competent control agencies and organizations shall coordinate their activities in combating corruption, enhancing the values of integrity and transparency in order to ensure the sound performance of public functions and preserve public funds, and shall develop and follow up execution of a national strategy to combat corruption in collaboration with other competent agencies and organizations, as regulated by Law.

Article (219)

The Central Auditing Organization shall be responsible for monitoring the funds of the State, the funds of the State public and independent legal persons and other authorities as specified by Law; as well as being responsible for monitoring the implementation of the State budget and independent budgets and for auditing its final accounts.

Article (220)

The Central Bank shall be responsible for developing and overseeing the implementation of monetary, credit, and banking policies, and for monitoring the performance of banks. It is solely entitled to issue banknotes. It shall maintain the integrity of the monetary and banking system, and the stability of prices within the framework of the State general economic policy, as regulated by Law.

Article (221)

The Egyptian Financial Supervisory Authority (EFSA) shall be responsible for monitoring and supervising financial non-banking markets and instruments including capital markets, futures exchanges, insurance activities, mortgage finance, financial leasing, and factoring and securitization, as regulated by Law.

Part VI
General & Transitional Provisions

Chapter One

General Provisions

Article (222)

The city of Cairo is the capital of the Arab Republic of Egypt.

Article (223)

The national flag of the Arab Republic of Egypt consists of three colors; black, white, and red with an eagle taken from the “Eagle of Salah El Din” in golden yellow. The emblem, decorations, insignia, seal and the national anthem shall be determined by Law.

Desecration of the Egyptian flag shall be a crime punishable under the law.

Article (224)

All the provisions stipulated by laws and regulations prior to the promulgation of this Constitution shall remain in force, and they may neither be amended nor repealed except in accordance with the regulations and procedures prescribed herein.

The state shall be obliged to issue laws executing the provisions of this Constitution.

Article (225)

Laws shall be published in the Official Gazette within 15 days from the date of their issuance, to be effective after 30 days from the day following the date of publication, unless the law specifies a different date.

Provisions of the laws shall only apply from the date of their entry into force. However, in articles pertaining to non-criminal and non-tax-related matters, the contrary may be provided for in the law, upon approval by a majority of two thirds of the members of House of Representatives.

Article (226)

The amendment of one or more articles of the Constitution may be requested by the President of the Republic or one-fifth of the members of the House of Representatives. The request shall specify the articles requested to be amended and the reasons for such amendment.

In all cases, the House of Representatives shall discuss the amendment request within 30 days from the date of its receipt. The House shall issue its decision to accept the request in whole or in part by a majority of its members.

If the request is rejected, the same articles may not be requested to be amended again before the next legislative term.

If the amendment request is approved by the House, it shall discuss the text of the articles requested to be amended within 60 days from the date of approval. If approved by a two-thirds majority of the House's members, the amendment shall be put to a public referendum within 30 days from the date the approval is issued. The amendment shall be effective from the date on which the referendum's result and the approval of a valid majority of the participants in the referendum are announced.

In all cases, texts pertaining to the re-election of President of the Republic or the principles of freedom or equality stipulated in this Constitution may not be amended, unless the amendment brings more guarantees.

Article (227)

The Constitution and its preamble and all its provisions constitute an integral text and an indivisible whole, and its provisions constitute one coherent unit.

Chapter Two

Transitional Provisions

Article (228)

The High Electoral Committee and the Presidential Election Committee existing at the time this Constitution comes into force shall undertake the full supervision of the first parliamentary and presidential elections following the effective date of the Constitution. The funds of the two committees shall be transferred to the National Electoral Commission, immediately upon its formation.

Article (229)

The elections of the House of Representatives following the date on which this Constitution comes into effect shall take place in accordance with the provisions of Article 102 hereof.

Article (230)

Election of the President of the Republic or the House of Representatives shall take place as regulated by Law, provided that the first of either elections shall take place within a period not

less than 30 days and not more than 90 days after the date on which this Constitution comes into effect.

In all cases, the following electoral procedures shall commence within a period not exceeding six months as of the date on which the Constitution comes into effect.

Article (231)

The presidential term following the effective date of this Constitution shall commence as of the date on which the final result of the election is announced.

Article (232)

The Interim President of the Republic shall continue to exercise presidential powers stipulated herein until the elected President of the Republic takes the constitutional oath.

Article (233)

If the Interim President of the Republic is rendered unable to exercise his powers by reason of a temporary impediment, the Prime Minister shall replace him.

If the Interim Presidential office becomes vacant due to resignation, death, permanent disability or any other reason, the most senior Vice-President of the Supreme Constitutional Court shall replace him with the same powers.

Article (234)

The Minister of Defense shall be appointed upon the approval of the Supreme Council of the Armed Forces. The provisions of this article shall remain in force for two full presidential terms starting from the date on which this Constitution comes into effect.

Article (235)

In its first legislative term following the effective date of this Constitution, the House of Representatives shall issue a law to regulate constructing and renovating churches, in a manner that guarantees the freedom to practice religious rituals for Christians.

Article (236)

The State shall guarantee setting and implementing a plan for the comprehensive economic and urban development of border and underprivileged areas, including Upper Egypt, Sinai, Matrouh, and Nubia. This shall be made with the participation of the residents of these areas in the development projects, and they shall be given a priority in benefiting therefrom, taking into account the cultural and environmental patterns of the local community, within ten years from the date that this Constitution comes into effect, as regulated by Law.

The State shall work on setting and implementing projects to bring back the residents of Nubia to their original territories and develop such territories within 10 years, as regulated by law.

Article (237)

The State shall fight all types and forms of terrorism, and track its funding sources as a threat to the nation and its citizens, within a specific timeframe while guaranteeing basic rights and freedoms. .

The law shall regulate the provisions and procedures of fighting terrorism, and fair compensation for the damages resulting therefrom and because thereof.

Article (238)

The State guarantees gradual performance of its obligation to allocate the minimum government expenditure rates on education, higher education, health and scientific research that are stipulated in this Constitution as at the date on which it enters into effect, provided it is fully compliant in the State budget of the fiscal year 2016/2017.

The State shall provide compulsory education until the completion of the secondary stage in a gradual manner to be completed by school year 2016/2017.

Article (239)

The House of Representatives shall issue a law organizing the rules for assigning judges and members of judicial bodies and organizations, ensuring the cancellation of full and partial assignment to non-judicial bodies or committees with judicial jurisdiction, or for managing justice affairs or overseeing elections, within a period not exceeding five years from the date on which this Constitution comes into effect.

Article (240)

The State shall ensure providing financial and human resources necessary to appealing the judgments issued by criminal courts on felonies within 10 years from the date on which this Constitution comes into effect. The foregoing shall be regulated by Law.

Article (241)

In its first legislative term after the enforcement of this Constitution, the House of Representatives shall issue a law on transitional justice that ensures revealing the truth, accountability, proposing frameworks for national reconciliation, and compensating victims, in accordance with international standards.

Article (242)

The existing system of municipal administration shall continue to be in force until the system stipulated herein is gradually implemented within five years of the date of entry into force of this Constitution, without prejudice to Article 180 thereof.

Article (243)

The State shall endeavor that workers and farmers be appropriately represented in the first House of Representatives to be elected after this Constitution is approved, as regulated by law.

Article (244)

The State shall endeavor that youth, Christians, persons with disability and Egyptians living abroad be appropriately represented in the first House of Representatives to be elected after this Constitution is approved, as regulated by law.

Article (245)

The employees of the Shoura Council who are still in service on the date that this Constitution comes into force shall be transferred to the House of Representatives with the same job levels and seniority on that date. Their salaries, allowances, bonuses, and their other financial entitlements granted to them on an individual basis shall be maintained. All funds of the Shoura Council shall be transferred to the House of Representatives.

Article (246)

The Constitutional Declaration issued on July 5th, 2013, the Constitutional Declaration issued on July 8th, 2013, and any constitutional texts or provisions of the Constitution issued in 2012 but not covered by this constitutional document shall be deemed repealed as of the date that this Constitution comes into effect. Their consequential effects shall however remain in force.

Article (247)

This Constitution shall come into effect as at the date on which it is announced that the People have approved it in a referendum through a majority of valid votes of the participants.

Table of Contents

Part I: The State (Article 1-6)

Part II: Basic Components of the Society

Chapter One: Social Components (Articles 7-26)

Chapter Two: Economic Components (Articles 27-46)

Chapter Three: Cultural Components (Articles 47-50)

Part III: Public Rights, Freedoms & Duties (Articles 51-93)

Part IV: Rule of Law (Articles 94-100)

Part V: The System of Government

Chapter One: The Legislative Power (Articles 101-138)

Chapter Two: The Executive Power

Branch I: The President of the Republic (Articles 139-162)

Branch II: The Government (Articles 163-174)

Branch III: The Local Administration (Articles 175-183)

Chapter Three: The Judiciary

Branch I: General Provisions (Articles 184-187)

Branch I: The Judiciary & The Prosecution (Articles 188-189)

Branch III: State Council (Article 190)

Chapter Four: The Supreme Constitutional Court (Article 191-195)

Chapter Five: Judicial Organizations (Articles 196-197)

Chapter Six: The Legal Profession (Articles 198)

Chapter Seven: The Experts (Article 199)

Chapter Eight: The Armed Forces & The Police

Branch I: The Armed Forces (Articles 200-202)

Branch II: National Defense Council (Article 203)

Branch III: Military Courts (Article 204)

Branch IV: National Security Council (Article 205)

Branch V: The Police (Articles 206-207)

Chapter Nine: National Electoral Commission (Articles 208-210)

Chapter Ten: Supreme Council for the Organization of the Media (Articles 2011-2013)

Chapter Eleven: National Councils, Autonomous Organizations & Control Agencies

Branch I: National Councils (Article 214)

Branch II: Autonomous Organizations & Control Agencies (Articles 215-221)

Part VI: General & Transitional Provisions

Chapter One: General Provisions (Articles 222-227)

Chapter Two: Transitional Provisions (Articles 228-247)

The Constituent Assembly

The New Constitution of the Arab Republic of Egypt

Approved on 30 November 2012

i

Draft dated 30 November 2012 of the Constitution of the Arab Republic of Egypt
Unofficial translation prepared by International IDEA (www.idea.int)

Table of Contents

Preamble	1
Part I: State and Society	3
 Chapter 1: Political principles.....	3
Article 1 - Nature of the Republic, and of the Egyptian people.....	3
Article 2 - Religion, language and source of legislation.....	3
Article 3 - Christian and Jewish religious affairs	3
Article 4 - Al-Azhar	3
Article 5 - Sovereignty.....	3
Article 6 - Democratic principles	4
Article 7 - The duty to safeguard national security and conscription	4
 Chapter 2: Social and ethical principles	4
Article 8 - Social justice, equality and freedom	4
Article 9 - Safety, security and equal opportunity for all.....	4
Article 10 - Family as a basis of society	4
Article 11 - Ethics, public morality and public order	5
Article 12 - Cultural and linguistic characteristics of society	5
Article 13 - Institution of civil titles.....	5
 Chapter 3: Economic Principles	5
Article 14 - The National economy	5
Article 15 - Agriculture.....	5
Article 16 - Development of the countryside and of the desert	6
Article 17 - Industry	6
Article 18 - Natural resources and the disposition of state property.....	6
Article 19 - The Nile River and water resources	6
Article 20 - The protection of coasts, seas and waterways	6
Article 21 - The ownership of property	6
Article 22 - The inviolability of public funds	7
Article 23 - Cooperatives	7
Article 24 - Private property	7
Article 25 - Charitable endowments.....	7
Article 26 - Taxation.....	7
Article 27 - Workers' share in management.....	7
Article 28 - Savings.....	8
Article 29 - Nationalisation	8
Article 30 - Confiscation of property	8
Part II: Rights and Freedoms.....	8
 Chapter 1: Personal rights.....	8
Article 31 - Dignity and the prohibition against insults	8
Article 32 - Nationality.....	8
Article 33 - Equality in public rights and duties	8

Article 34 -	Personal freedom.....	8
Article 35 -	Due process.....	9
Article 36 -	Treatment during arrest or detention	9
Article 37 -	Prison.....	9
Article 38 -	Sanctity of correspondence	9
Article 39 -	The inviolability of homes	10
Article 40 -	Right to safety	10
Article 41 -	Inviolability of the human body	10
Article 42 -	Freedom of movement	10
Chapter 2: Civil and political rights		10
Article 43 -	Freedom of belief.....	10
Article 44 -	Blasphemy	11
Article 45 -	Freedom of thought and opinion.....	11
Article 46 -	Freedom of creativity.....	11
Article 47 -	Access to information	11
Article 48 -	Freedom of the press	11
Article 49 -	Freedom to own and establish newspapers	12
Article 50 -	Freedom of assembly	12
Article 51 -	Right to establish associations	12
Article 52 -	Right to form syndicates	12
Article 53 -	Trade unions.....	12
Article 54 -	Right to address public authorities	13
Article 55 -	Citizen participation in public life.....	13
Article 56 -	Egyptians living abroad	13
Article 57 -	Asylum.....	13
Chapter 3: Economic and social rights		13
Article 58 -	Right to Education	13
Article 59 -	Freedom of scientific research.....	14
Article 60 -	The Arabic language and religious education	14
Article 61 -	Eradication of illiteracy	14
Article 62 -	Healthcare	14
Article 63 -	Environment.....	15
Article 64 -	Right to work.....	15
Article 65 -	Martyrs	15
Article 66 -	Social security.....	15
Article 67 -	Pensions for farmers and others.....	16
Article 68 -	Adequate housing, clean water and healthy food	16
Article 69 -	Right to play sorts	16
Article 70 -	Rights of the child.....	16
Article 71 -	Care for children and youth	16
Article 72 -	People with disabilities	17
Article 73 -	Oppression, exploitation and sex trafficking	17
Chapter 4: Guarantees for the protection of rights and freedoms		17
Article 74 -	The rule of law.....	17
Article 75 -	Right to litigate.....	17

Article 76 -	Punishment	17
Article 77 -	Due process	17
Article 78 -	Right to defense	18
Article 79 -	Preventing or delaying the implementation of court decisions	18
Article 80 -	The absence of state of limitations.....	18
Article 81 -	Limitations clause.....	18
Part III: Public Authorities		19
Chapter 1: Legislative authority		19
Section 1: Common provisions		19
Article 82 -	Legislative power	19
Article 83 -	Prohibition on double membership	19
Article 84 -	Incompatibility with other work	19
Article 85 -	Representative of the entire population	19
Article 86 -	Oath.....	19
Article 87 -	Challenges to the validity of membership	19
Article 88 -	Property and financial regulation	20
Article 89 -	Member opinions.....	20
Article 90 -	Member immunity	20
Article 91 -	Remuneration	20
Article 92 -	Seat of parliament.....	20
Article 93 -	Public and in camera sessions.....	21
Article 94 -	Inauguration and adjournment of sessions	21
Article 95 -	Extraordinary sessions	21
Article 96 -	Quorum and required majority.....	21
Article 97 -	Selection of speakers and deputy speakers.....	21
Article 98 -	Replacement for the speaker.....	22
Article 99 -	Rules of Procedure	22
Article 100 -	Internal order	22
Article 101 -	Legislative initiative	22
Article 102 -	Consideration of draft laws.....	22
Article 103 -	Legislative dispute between two chambers.....	23
Article 104 -	Approval of legislation	23
Article 105 -	Discussion of a public issue	23
Article 106 -	Clarification of the government's policy	23
Article 107 -	Right to obtain data or information	23
Article 108 -	Submission of written proposals and complaints by citizens	24
Article 109 -	Government attendance of sessions	24
Article 110 -	Resignation of members	24
Article 111 -	Revocation of membership	24
Article 112 -	Vacancy	24
Section 2: Council of Representatives.....		25
Article 113 -	Composition	25
Article 114 -	Term	25
Article 115 -	Mandate	25
Article 116 -	Annual state budget law	25

Article 117 -	Transfer of funds in the budget law	26
Article 118 -	Collection and disbursement of public funds	26
Article 119 -	Salaries, pensions, indemnities, subsides and bonuses.....	26
Article 120 -	Council of Representatives' approval for contracting loans.....	26
Article 121 -	Final account	26
Article 122 -	Special investigative committees.....	26
Article 123 -	Request for information.....	27
Article 124 -	Briefings and statements	27
Article 125 -	Interrogation	27
Article 126 -	Withdrawal of confidence.....	27
Article 127 -	Dissolution of the Council of Representatives	28
Article 128 -	Composition	28
Article 129 -	Conditions for candidacy.....	28
Article 130 -	Term	29
Article 131 -	Effect of dissolution of Council of Representatives	29
Chapter Two: Executive Authority.....		29
Section 1: The President		29
Article 132 -	Mandate	29
Article 133 -	Term	29
Article 134 -	Eligibility	30
Article 135 -	Conditions for nomination	30
Article 136 -	Method of election.....	30
Article 137 -	Oath.....	30
Article 138 -	Finances.....	30
Article 139 -	Government formation	31
Article 140 -	Establishing the state's public policy	31
Article 141 -	Agency through the government.....	31
Article 142 -	Delegation of authority	31
Article 143 -	Power to call government meetings	31
Article 144 -	Statement on the state's general policy	32
Article 145 -	Foreign relations	32
Article 146 -	Supreme Commander of the Armed Forces	32
Article 147 -	Appointment of civil and military personnel	32
Article 148 -	State of emergency	32
Article 149 -	Pardon and amnesty	33
Article 150 -	Referenda.....	33
Article 151 -	Resignation.....	33
Article 152 -	Treason.....	33
Article 153 -	Incapacity	34
Article 154 -	Vacancy	34
Section 2: The Government		34
Article 155 -	Composition	34
Article 156 -	Conditions of membership.....	34
Article 157 -	Oath.....	35
Article 158 -	Finances.....	35

Article 159 -	Mandate	35
Article 160 -	General policy of individual ministries.....	36
Article 161 -	Statements before the Council of Representatives and the Shura Council.....	36
Article 162 -	Issuance of regulations	36
Article 163 -	Issuance of regulations on public services.....	36
Article 164 -	Disciplinary regulations.....	36
Article 165 -	Appointment and dismissal of civil servants.....	36
Article 166 -	Accusations against the government.....	36
Article 167 -	Resignation.....	37
Chapter 3: The Judiciary		37
Section 1: General Provisions		37
Article 168 -	Judicial independence	37
Article 169 -	Independence in the administration of judicial affairs.....	37
Article 170 -	The independence of judges	37
Article 171 -	Public sessions.....	37
Section 2: The courts and public prosecution		38
Article 172 -	Mandate of the courts	38
Article 173 -	Public prosecution.....	38
Section 3: The State Council		38
Article 174 -	Mandate	38
Section 4: The Supreme Constitutional Court.....		38
Article 175 -	Mandate and procedures.....	38
Article 176 -	Composition	39
Article 177 -	Constitutionality of electoral laws	39
Article 178 -	Publication of decisions in the Official Gazette	39
Section 5: Judicial Bodies		39
Article 179 -	The Association of State Affairs	39
Article 180 -	Administrative Prosecutor	40
Section 6: The legal profession		40
Article 181 -	Independence	40
Section 7: The experts.....		40
Article 182 -	Autonomy.....	40
Chapter 4: The system for local administration.....		40
Section 1: Local and administrative division of the state		40
Article 183 -	Local administrative units	40
Article 184 -	Technical, administrative and financial assistance from the state	41
Article 185 -	Local taxes and fees	41
Article 186 -	Cooperation between local units	41
Article 187 -	Selection of governors	41

Section 2: Local Councils	41
Article 188 - Election of local councils	41
Article 189 - Mandate	41
Article 190 - Local council decisions	42
Article 191 - Budget and final accounts.....	42
Article 192 - Dissolution of local councils	42
Chapter 5: National Security and Defense	42
Section 1: The National Security Council.....	42
Article 193 - Composition and mandate.....	42
Section 2: The Armed Forces	43
Article 194 - Duty of the armed forces	43
Article 195 - Commander in Chief	43
Article 196 - Public mobilization	43
Section 3: The National Defense Council.....	43
Article 197 - Composition and mandate.....	43
Section 4: Military courts	44
Article 198 - Mandate and trial of civilians.....	44
Section 5: The Police	44
Article 199 - Mandate	44
Part IV: Independent Bodies and Regulatory Agencies	44
Chapter 1: Common provisions	44
Article 200 - Independence	44
Article 201 - Public reports	44
Article 202 - Appointment of heads	45
Article 203 - Mandate, appointment and dismissal of personnel	45
Chapter 2: Regulatory Agencies	45
Section 1: The National Anti-Corruption Commission.....	45
Article 204 - Mandate	45
Section 2: Central Auditing Organization	45
Article 205 - Mandate	45
Section 3: The Central Bank.....	46
Article 206 - Mandate	46
Chapter 3: The Economic and Social Council.....	46
Article 207 - Mandate	46
Chapter 4: The National Electoral Commission	46
Article 208 - Mandate	46

Article 209 -	Composition and term	47
Article 210 -	Balloting and counting of referenda and elections.....	47
Article 211 -	Dispute resolution	47
Chapter 5: Independent bodies.....		48
Section 1: The Supreme Authority for Endowment Affairs		48
Article 212 -	Mandate	48
Section 2: The Supreme Authority for Heritage Conservation.....		48
Article 213 -	Mandate	48
Section 3: The National Council for Education and Scientific Research.....		48
Article 214 -	Mandate	48
Section 4: Independent Press and Media Organizations		48
Article 215 -	Mandate	48
Article 216 -	State owned media	49
Part V: Final and Transitional Provisions		49
Chapter 1: Amendments to the Constitution		49
Article 217 -	Preliminary procedures.....	49
Article 218 -	Parliamentary approval and referendum	49
Chapter 2: General Provisions.....		49
Article 219 -	Principles of Islamic Sharia	49
Article 220 -	Capital	49
Article 221 -	National flag	50
Article 222 -	Validity of existing law	50
Article 223 -	Promulgation of laws	50
Article 224 -	Electoral system	50
Article 225 -	Entry into force	50
Chapter 3: Transitional Provisions.....		50
Article 226 -	Presidential term.....	50
Article 227 -	End of terms	51
Article 228 -	High Electoral Committee	51
Article 229 -	First parliamentary elections	51
Article 230 -	Existing Shura Council	51
Article 231 -	First legislative elections	51
Article 232 -	Leaders of the National Democratic Party	51
Article 233 -	Composition of the Supreme Constitutional Court	52
Article 234 -	Appeals against criminal convictions	52
Article 235 -	Existing local administration system.....	52
Article 236 -	Constitutional declarations	52

* * *

Preamble

The New Constitution of the Arab Republic of Egypt

We, the people of Egypt,

In the name and with the assistance of God, the most merciful and gracious,

This is our Constitution.. The document of the January 25 Revolution, the Revolution which was initiated by our youth, which our people rallied around, and which the Armed Forces sided with.

After we rejected, in Tahrir Square and across the country, all forms of injustice, oppression, tyranny, despotism, exclusion, plunder, corruption and monopoly.

We publicly demanded our full rights to “**a decent life, freedom, social justice and human dignity**”, with the blood of our martyrs, the pain of our injured, the dreams of our children and the struggle of our men and women.

We **reclaimed** the place of our great civilization and of our thriving history; we established the oldest state on the banks of the immortal Nile, which witnessed the meaning of citizenship, equality and nondiscrimination. It presented to the world the first written alphabets, launched the belief in monotheism and cognizance of the Creator, embraced the God’s prophets and His divine Messages, and decorated the pages of human history with creativity.

In continuation of our immaculate revolution which united the Egyptian people over one demand, to build a modern democratic state, we announce our determination towards the following principles:

One: The people are the source of all authorities; they establish them, they derive their legitimacy from them and are subject to their will.. The responsibilities and competencies of the authorities are endowed to them in trusteeship, and are not privileges that serve to immunize authorities.

Two: A democratic system of government which entrenches the peaceful transfer of power, deepens political and partisan pluralism, and guarantees fair elections and the people’s contribution to the decision-making process.

Three: The dignity of the individual is part and parcel of the dignity of the homeland.. And a country in which women are not respected has no dignity; for women are the sisters of men and partners in national gains and responsibilities.

Four: Freedom is a right, in thought, creativity, opinion, housing, ownership, residence and travel, the origins of which the Creator designed in the universe’s motion and human nature.

Five: Equality and equal opportunities are for all: male and female citizens; for there is no discrimination, nepotism, or favoritism in rights and duties.

Six: The rule of law is the basis of the individual's freedom, the legitimacy of the authorities, and the State's compliance with the law; for no voice tops that of the force of justice; and the judiciary is independent and proud and holds the supreme mission of protecting the Constitution, establishing the balance of justice, and preserving rights and freedoms.

Seven: National unity is an obligation, and the cornerstone for building the Egyptian modern State and its soaring progress and development. It is entrenched in the values of tolerance, moderation and centrism, and the guarantee of rights and freedoms to all citizens without discrimination between the people.

Eight: Defending the homeland is a duty and an honor; and our armed forces are a patriotic, professional and neutral institution that do not interfere in political affairs and is the protective shield of the country.

Nine: Security is a great blessing watched over by the police that work to serve and protect the people and enforce justice; for there can be no justice without protection, and no protection without security institutions which respect human dignity and the rule of law.

Ten: Unity is the hope of the Arab nation, a call from history, an invitation to the future, and a necessity for destiny. It is reinforced by complementarity and brotherhood with the countries of the Nile Basin and of the Muslim world, a natural extension to the genius of Egypt's position and place on the universe's map.

Eleven: Egypt's pioneering intellectual and cultural role is an embodiment of its soft power and an example of the freedom of its innovators, intellectuals, universities, scholarly and linguistic academies, research centers, press, art, literature, media, its patriotic Church and its honorable Al-Azhar, which throughout its history has been the backbone of the homeland's identity, a guardian of the immortal Arabic language and the revered Islamic Sharia, and a beacon for moderate enlightened thought.

**We, the masses of the people of Egypt,
out of faith in God and His heavenly messages,
in recognition of the rights of the country and the nation due upon us,
in awareness of our national and human responsibilities,
pledge to commit to the principles laid out in this Constitution, which we accept and grant to
ourselves, affirming our determination to uphold and defend it, protect and respect it by all
state authorities.**

Part I: State and Society

Chapter 1: Political principles

Article 1 - Nature of the Republic, and of the Egyptian people¹

The Arab Republic of Egypt is an independent sovereign state, united and indivisible, and its system is democratic. The Egyptian people are part of the Arab and Islamic nations, are proud of belonging to the Nile Valley, to the African continent and to Asia. The Egyptian people contribute to human civilization.

Article 2 - Religion, language and source of legislation

Islam is the religion of the state and Arabic is its official language. The principles of Islamic Sharia are the principal source of legislation.

Article 3 - Christian and Jewish religious affairs

The principles of Christian and Jewish laws are the main source of legislation for followers of Christianity and Judaism in matters pertaining to personal status, religious affairs and nomination of spiritual leaders.

Article 4 - Al-Azhar

Al-Azhar is an encompassing independent Islamic institution, with exclusive competence over its own affairs. It is responsible for preaching Islam, theology and the Arabic language in Egypt and throughout the world. Al-Azhar's Council of Senior Scholars is to be consulted in matters relating to Islamic Sharia.

The state ensures sufficient funds for Al-Azhar to achieve its objectives.

Al-Azhar's Grand Sheikh is independent and cannot be dismissed. The method of appointing the Grand Sheikh from among members of the Council of Senior Scholars is to be determined by law.

The foregoing is regulated by law.

Article 5 - Sovereignty

Sovereignty belongs to the people. The people exercise and protect sovereignty, and safeguard their national unity. The people are the source of power. This is as provided in this Constitution.

¹ Titles for each article have been included by International IDEA along with this translation solely for ease of reference. The article titles are not to be attributed to the Constituent Assembly or used to inform interpretation. Chapter and section titles were translated from the original text.

Article 6 - Democratic principles

The political system is based on the principles of democracy and consultation, citizenship (under which all citizens are equal in rights and public duties), political and multi-party pluralism, the peaceful transfer of power, the separation and balance of powers, the rule of law, and respect for human rights and freedoms. All of the foregoing is as provided in the Constitution.

It is prohibited to form a political party that discriminates between citizens, whether on the basis of gender, origin or religion.

Article 7 - The duty to safeguard national security and conscription

Safeguarding national security, defending the motherland and protecting its soil is an honour and a sacred duty. Conscription is obligatory and is organized by law.

Chapter 2: Social and ethical principles

Article 8 - Social justice, equality and freedom

The state guarantees the means to achieve justice, equality and freedom, and is committed to facilitating the channels of charity, social support and solidarity between members of society. The state ensures the protection of persons, dignity and property, and works toward achieving sufficiency for all citizens. The foregoing is within the limits of the law.

Article 9 - Safety, security and equal opportunity for all

The state commits to ensuring safety, security and equal opportunity for all citizens without discrimination.

Article 10 - Family as a basis of society

The family is the basis of society and is based on religion, morality and patriotism.

The state and society oversee the commitment to the genuine character of the Egyptian family, its cohesion and stability, and the consolidation and protection of its moral values. The foregoing is as organised by law.

The state guarantees maternal and child services free of charge, and guarantees the reconciliation between the duties of a woman toward her family and her work.

The state provides special care and protection to breadwinning and divorced women as well as widows.

Article 11 - Ethics, public morality and public order

The state safeguards ethics, public morality and public order, a high level of education and of religious and patriotic values, scientific knowledge, Arab culture, and the historical and cultural heritage of the people. The foregoing is in accordance with the law.

Article 12 - Cultural and linguistic characteristics of society

The state protects the cultural and linguistic characteristics of society, and works towards the Arabization of education, science and knowledge.

Article 13 - Institution of civil titles

The institution of civil titles is prohibited.

Chapter 3: Economic Principles

Article 14 - The National economy

The national economy aims to achieve a comprehensive, sustainable development plan, improve living standards, achieve prosperity, eliminate poverty and unemployment, increase work opportunities, production and gross national product.

The development plan works to establish social justice and cooperation, to ensure equitable distribution, to protect consumer rights, and to safeguard the rights of workers. The development plan works towards ensuring that capital and labor share the burden of development costs, and the equitable distribution of revenue.

Wages are linked to production, the income gap shall be bridged, a minimum wage that guarantees a decent standard of living for all citizens shall be established, and a maximum wage in civil service positions is established with exceptions regulated by law.

Article 15 - Agriculture

Agriculture is an essential asset of the national economy. The state commits to protecting and increasing farmland, and works to develop crop and plant varieties, to develop and protect animal breeds and fisheries, to achieve food security, to provide the requirements of agricultural production, its good management and marketing, and support agricultural industries.

The law organizes the use of state land, in such a way as to achieve social justice, and protect farmers and agricultural labour from exploitation.

Article 16 - Development of the countryside and of the desert

The state is committed to the development of the countryside and the desert, and works to raise the standard of living of farmers and inhabitants of the desert.

Article 17 - Industry

Industry is an essential component of the national economy. The state protects strategic industries, support industrial development, and ensures the national adoption of new technologies and their implementation.

The state fosters small and handicraft industries.

Article 18 - Natural resources and the disposition of state property

The state's natural resources belong to the people, who have a right to their revenues. The state commits to preserving such resources, to their sound exploitation, and to take into consideration the rights of future generations.

It is prohibited to dispose of state property, or to grant the right to privilege to exploit such property, or to grant a concession to a public utility, except as permitted by law.

All capital that does not have an owner belongs to the state.

Article 19 - The Nile River and water resources

The Nile River and water resources are a national wealth. The state is committed to conserving and developing them, and preventing abuse. The use of such resources is organized by law.

Article 20 - The protection of coasts, seas and waterways

The state commits to protecting its coasts, seas, waterways and lakes, to maintaining monuments and nature reserves, and to removing any encroachments.

Article 21 - The ownership of property

The state guarantees and protects the legitimate ownership of all kinds of public, cooperative and private property and endowments, in accordance with what the law organises.

Article 22 - The inviolability of public funds

Public funds are inviolable and the state and society have a national duty to safeguard them.

Article 23 - Cooperatives

The state sponsors and supports cooperatives in all forms and guarantees their independence.

Article 24 - Private property

Private property is protected and has a function in the service of the national economy without deviation or monopoly. The right to inherit property is guaranteed. Private property may not be sequestered except in cases specified by law, and with a court order. Ownership of property may not be confiscated except for the public good and with just compensation paid in advance.

The foregoing is organized by law.

Article 25 - Charitable endowments

The state is committed to reviving and encouraging the system of charitable endowments.

The law organizes endowments, the manner in which they are established, the management of its finances, their investments and the distribution of proceeds to the beneficiaries, according to the terms of the trustee.

Article 26 - Taxation

Social justice is the foundation of taxation and other public finance duties.

Public taxes cannot be established, modified or cancelled except by law. There can be no exemptions except in cases prescribed by law. It is prohibited to require anyone to pay additional taxes or fees except within the limits of the law.

Article 27 - Workers' share in management

Workers will share in the management and profits of enterprises. They are committed to the development of production, to protecting its means and to the implementation of its strategy in their production units, in accordance with the law.

Workers' representatives may constitute up to 50 percent of the members of the boards of directors of public sector units. The law guarantees that small farmers and small craftsmen's representatives should constitute no less than 80 percent of the boards of directors of agricultural and industrial cooperatives.

Article 28 - Savings

Saving is encouraged by the state. The state safeguards savings, as well as insurance and pension funds. This is organized by law.

Article 29 - Nationalisation

Nationalization is allowed except for the public interest, based on a law and against fair compensation.

Article 30 - Confiscation of property

Public confiscation of property is prohibited.

Private confiscation is prohibited except based on a court judgment.

Part II: Rights and Freedoms

Chapter 1: Personal rights

Article 31 - Dignity and the prohibition against insults

Dignity is the right of every human being. The state and society guarantee respect for dignity and its protection.

Insulting or showing contempt toward any human being is prohibited.

Article 32 - Nationality

Egyptian nationality is a right. It is organized by law.

Article 33 - Equality in public rights and duties

All citizens are equal before the law. They have equal public rights and duties. There can be no discrimination between them in that regard.

Article 34 - Personal freedom

Personal freedom is a natural right. It is safeguarded and inviolable.

Article 35 - Due process

Except in cases of flagrante delicto, no person may be arrested, searched, detained, prevented from free movement or prevented from exercising his freedoms except under a justified court order that will require an investigation.

Any person whose freedom has been restricted for these reasons must be informed of the reasons in writing within 12 hours, and be presented to the investigating authority within 24 hours from the time in which his freedom was restricted. He can only be interrogated in the presence of his lawyer. He will be provided with a lawyer when needed.

All persons whose freedoms have been restricted, and others, have the right of appeal to the courts against the measure of arrest. The matter must be decided within a week. If the matter is not decided within a week, release becomes imperative.

The law organizes the rules for temporary detention, its duration and its causes, and the cases in which an individual is entitled to compensation, whether for temporary detention or for a sentence carried out that a court final ruling has revoked.

Article 36 - Treatment during arrest or detention

Any person arrested, detained or whose freedom is restricted in any way, is treated in a manner preserving his dignity. He may not be tortured, nor may he be compelled, nor may he be physically or morally harmed.

Individuals can only be detained or arrested in places that are humanely and hygienically suitable, and subject to judicial supervision.

The violation of any of the foregoing is an offense punishable by law.

Any statement proved to have been made by a person under any of the aforementioned forms of duress, or pursuant to a threat, is considered invalid and cannot be relied upon.

Article 37 - Prison

Prison is a place of discipline, correction and reform. It is subject to judicial supervision. Anything that violates human dignity or a person's health is prohibited.

The state is responsible for the rehabilitation of convicts and facilitating for them a dignified life after their release.

Article 38 - Sanctity of correspondence

The private life of citizens is inviolable. Its secrecy is guaranteed. Postal correspondence, wires, electronic correspondence, telephone calls and other means of communication may not be confiscated.

They cannot be monitored except for a limited period of time and in situations that are set out by law, and based on a justified judicial warrant.

Article 39 - The inviolability of homes

Homes are inviolable. With the exception of cases of immediate danger and distress, they may not be entered, searched or monitored, except in cases defined by law, and by a justified judicial warrant which specifies the place, timing and purpose. Those in a home are alerted before the home is entered or searched.

Article 40 - Right to safety

All residents have a right to a safe life which is guaranteed by the state. The law protects the individual against criminal phenomena.

Article 41 - Inviolability of the human body

The human body is inviolable, and the trafficking of human organs prohibited. No person may be subjected to any medical or scientific experiment without free, documented consent, and in accordance with the established foundations of medical science, and in the manner organized by law.

Article 42 - Freedom of movement

Freedom of movement, residence and immigration is guaranteed.

No citizen may be deported from or prevented from returning to the country.

No citizen may be prevented from leaving the country, nor placed under house arrest, except by virtue of a justified judicial warrant, and for a limited period of time.

Chapter 2: Civil and political rights

Article 43 - Freedom of belief

The freedom of belief is inviolable.

The state guarantees the freedom to practice religious rites and to establish places of worship for the divine religions. This is as organized by law.

Article 44 - Blasphemy

Defaming all religious messengers and prophets is prohibited.

Article 45 - Freedom of thought and opinion

The freedom of thought and opinion is guaranteed.

Every individual has the right to express an opinion and to disseminate it verbally, in writing or illustration, or by any other means of publication and expression.

Article 46 - Freedom of creativity

Freedom of creativity in its various forms is the right of every citizen.

The state advances science, the arts and literature. The state sponsors creators and inventors, protects their creations and innovations, and works to apply them for the benefit of society.

The state takes the necessary measures to preserve the nation's cultural heritage. The state works to promote cultural services.

Article 47 - Access to information

Access to information, data, statistics and documents, its disclosure and circulation, is a right guaranteed by the state to all citizens, on the condition that this does not violate the sanctity of private life or the rights of others, and that it does not conflict with national security.

The law organizes the rules for filing and archiving public documents, the means to access information, appeals against a refusal to disclose information, and the consequent accountability for refusing to disclose information.

Article 48 - Freedom of the press

The freedom of the press, printing, publication and mass media is guaranteed. The media is free and independent to serve society and to express various trends in public opinion, and contribute to shaping and directing public opinion in the context of the state and society's main components, and in the context of the preservation of rights, freedoms and public duties, of the respect for the sanctity of the private lives of citizens and the requirements of national security. The closure, prohibition or confiscation of media outlets is prohibited except with a court order.

It is prohibited to monitor whatever media outlets publish. An exception is permitted in the case of limited censorship that may be imposed in times of war or public mobilization.

Article 49 - Freedom to own and establish newspapers

Freedom to publish and own newspapers of all kinds is guaranteed subject to notification for every natural or moral Egyptian person.

The law organizes the establishment of radio stations, television broadcasting and digital media.

Article 50 - Freedom of assembly

Citizens have the right to organize public meetings, processions and peaceful demonstrations. They must be unarmed and must provide notification as regulated by law.

The right to private assembly is guaranteed without the need to provide notification. Security personnel may not attend or intercept such private meetings.

Article 51 - Right to establish associations

Citizens have the right to establish associations and civil institutions, subject to notification. Such institutions operate freely, and have legal personality.

The authorities may not disband them or their administrative bodies without a court order, in the manner prescribed by law.

Article 52 - Right to form syndicates

The right to form syndicates, unions and cooperatives is guaranteed. They have legal personality, be formed on a democratic basis, operate freely, participate in the service of the community, and in raising the standard of efficiency among their members, and defending their rights.

Authorities may not disband them or their boards other than based on a court order.

Article 53 - Trade unions

The law organizes professional trade unions, their management on a democratic basis, determines its assets, and the manner in which its members are to be held accountable for their conduct, which should be in accordance with professional codes of ethics. One trade union is allowed per profession.

Authorities may not disband the boards of trade unions except with a court order, and may not place them under sequestration.

Article 54 - Right to address public authorities

Every individual has the right to address public authorities in writing and under his own signature. Addressing public authorities should not be in the name of groups, with the exception of legal persons.

Article 55 - Citizen participation in public life

Citizen participation in public life is a national duty. Every citizen has the right to vote, run for elections, and express opinions in referendums. The law organizes the direct application of these rights.

The state is responsible for the inclusion of the name of every citizen who satisfies the conditions to vote in a voters' registry and must do so automatically.

The state ensures the validity, impartiality and integrity of referendums and elections. Interference in any of the foregoing is a crime punishable by law.

Article 56 - Egyptians living abroad

The state safeguards the interests of Egyptians living abroad, protects them and protects their rights and freedoms, assists them perform their public duties toward the Egyptian state and society, and encourages their contribution to the development of the nation.

Their participation in elections and referendums is organized by law.

Article 57 - Asylum

The state grants asylum to foreigners who are deprived in their country of the public rights and freedoms that are guaranteed by this Constitution.

Extradition of political refugees is prohibited.

All of the foregoing is in accordance with what the law organizes.

Chapter 3: Economic and social rights

Article 58 - Right to Education

Every citizen has the right to high quality education. It is free throughout its stages in all government institutions and is obligatory in the primary stage. The state works to extend that obligation to other stages.

The state supports and encourages technical education, and oversees education in all its forms. The state allocates sufficient percentage from the national revenue to technical education.

All educational institutions, public and private, local and otherwise abide by the state's educational plans and objectives, with a view to creating a link between education and the needs of society and production.

Article 59 - Freedom of scientific research

Freedom of scientific research is guaranteed. Universities, scientific and linguistic academies, and research centers are independent. The state provides them with a sufficient percentage of the national revenue.

Article 60 - The Arabic language and religious education

The Arabic language is a primary subject in all stages of education in all educational institutions.

Religious education and national history are core subjects of pre-university education in all its forms.

Universities are committed to the teaching of morals and ethics relating to various disciplines.

Article 61 - Eradication of illiteracy

The state develops a comprehensive plan to eradicate illiteracy in all age groups, for males and females. The state will implement this plan with society's participation within 10 years from the date of the Constitution.

Article 62 - Healthcare

Healthcare is a right of every citizen. The state allocates a sufficient percentage of the national revenue to healthcare.

The state provides healthcare services and health insurance in accordance with just and high standards, to be free of charge for indigents.

All health facilities provide various forms of medical treatment to every citizen in cases of emergency or danger to the life of a person.

The state supervises all health facilities, inspect them for quality of services, and monitor all materials, products and means of health-related publicity. Legislation will be issued and measures will be passed to put such supervision into effect.

Article 63 - Environment

Each individual is entitled to live in a healthy and sound environment. The state commits to maintaining and protecting the environment from pollution, to make use of natural resources in way that does not damage the environment and safeguard the rights of future generations.

Article 64 - Right to work

Work is a right, duty and honor for every citizen, guaranteed by the state on the basis of the principles of equality, justice and equal opportunities.

There can be no forced labor except in accordance with law.

Public sector employees work in the service of the people. The state employs citizens on the basis of merit, without nepotism or mediation. Any violation of the foregoing is a crime punishable by law.

The state guarantees for every worker the right to fair pay, vacation, retirement and social security, healthcare, protection against occupational hazards, and the application of occupational safety conditions in the workplace, in accordance with the law.

Workers may not be dismissed except in those situations that are set out by law.

Striking peacefully is a right which is organized by law.

Article 65 - Martyrs

The state honors the martyrs of the 25 January Revolution as well as martyrs of war and of national duty, as well as the wounded. The state supports their families, as well as the injured and war veterans, the families of those disappeared during war, and similar cases. They, their children and their wives are prioritised in employment opportunities.

The foregoing is organized by law.

Article 66 - Social security

The state provides social security services.

All citizens have the right to social security if they are unable to support themselves and their families in case of incapacity, unemployment or old age, such that they are guaranteed a minimum standard of living.

Article 67 - Pensions for farmers and others

The state works to provide an adequate pension for small-scale farmers, agricultural workers, casual workers, and all who do not have access to the social insurance system.

This is organized by law.

Article 68 - Adequate housing, clean water and healthy food

Adequate housing, clean water and healthy food are guaranteed rights.

The state adopts a national housing plan, which is based on social justice, the promotion of independent initiatives and housing cooperatives, and the regulation of the use of national territory for the purposes of construction, in accordance with the public interest and with the rights of future generations.

Article 69 - Right to play sorts

The right to play sports is a right that belongs to everyone.

The state and society strive to discover talented athletes and support them, and take the necessary measures to encourage exercise.

Article 70 - Rights of the child

Every child, from the moment of birth, has the right to a proper name, family care, basic nutrition, shelter, health services, and religious, emotional and cognitive development.

The state commits to caring and protecting the child in case he loses his family. The state also guarantees the rights of disabled children, and their rehabilitation and integration into society.

Child labor is prohibited before passing the age of compulsory education, in jobs that are not fit for a child's age, or that prevent the child from continuing education.

A child may only be detained for a limited period, and he must be provided with legal assistance, and be detained in an appropriate location, in which children must be separated according to gender, age and type of crime, and be held away from places of adult detention.

Article 71 - Care for children and youth

The state guarantees care for children and youth; supports their spiritual, moral, cultural, educational, physical, psychological, social and economic development. The state enables them to engage in active political participation.

Article 72 - People with disabilities

The state commits to providing people with disabilities with health, educational, economic and social care, and provides to them with employment opportunities, raise social awareness on their situation, and adapt public facilities to suit their needs.

Article 73 - Oppression, exploitation and sex trafficking

All forms of oppression, exploitation and sex trafficking are prohibited and criminalized by law.

Chapter 4: Guarantees for the protection of rights and freedoms

Article 74 - The rule of law

The rule of law is the basis for governance in the state.

The independence of the judiciary and the immunity of judges are two basic guarantees to safeguard rights and freedoms.

Article 75 - Right to litigate

The right to litigation is inalienable and guaranteed for all.

The state commits to making judicial institutions accessible and to encouraging a rapid decision making process.

It is prohibited to isolate any act or administrative decision from judicial oversight.

No person can be tried except before his natural judge. Exceptional courts are prohibited.

Article 76 - Punishment

Penalty is personalized. There can be no crime or penalty except by virtue of the Constitution or the law. No penalty can be inflicted except by virtue of a court decision. Penalties are inflicted only for acts committed after the promulgation of the relevant law.

Article 77 - Due process

Except for situations set out by law, criminal prosecutions must be based on an order from the relevant judicial body.

A defendant is innocent until proven guilty in a legal and fair trial, and in which he is granted the right of defense. Every person accused of a felony must have a lawyer to defend him. The law determines the minor offenses for which a defense lawyer is also required.

The law organizes the process of appealing decisions relating to felonies and offenses.

The state provides protection for victims of crime, witnesses, defendants and informants where necessary.

Article 78 - Right to defense

The right of defense in person or by proxy is guaranteed.

The law guarantees for indigents the means to resort to the courts and to defend their rights before the courts.

Article 79 - Preventing or delaying the implementation of court decisions

Court decisions are issued and enforced in the name of the people. It is a crime punishable by law for the relevant civil servant to prevent or delay the implementation of a court decision. In such a situation, a person who has a sentence issued in his favor has the right to lodge a direct criminal action before the relevant court.

Article 80 - The absence of state of limitations

Any violation of any of the rights and freedoms guaranteed by the Constitution is a crime for which there is no statute of limitation. The state guarantees fair compensation to the victim of such encroachment.

The injured party has the right to lodge a direct criminal action.

The National Council for Human Rights informs the Public Prosecution of any violation of these rights, may join the injured party in a civil action, and may appeal on his behalf.

Article 81 - Limitations clause

The rights and freedoms inherent in the citizen's person cannot be suspended or detracted from.

No law may regulate the exercise of these rights or freedoms in a way that constrains their origin and essence.

Rights and freedoms are to be exercised in a way that is consistent with the components that are set out in the Chapter on the state and Society in this Constitution.

Part III: Public Authorities

Chapter 1: Legislative authority

Section 1: Common provisions

Article 82 - Legislative power

Legislative power belongs to the Council of Representatives and to the Shura Council.

Each exercises its respective authorities as set out in the Constitution.

Article 83 - Prohibition on double membership

It is prohibited to be a member of both the Council of Representatives and the Shura Council. The law specifies other cases of incompatibility.

Article 84 - Incompatibility with other work

Save in exceptional situation set out by law, members of either the Council of Representatives or the Shura Council are to be fully devoted to their offices. A member's position or work will be kept open until his return, in accordance with the provisions of the law.

Article 85 - Representative of the entire population

A member is the representative of the population as a whole, without restriction or limitation.

Article 86 - Oath

Prior to the start of his tenure, a member takes the following oath before the chamber to which he belongs: "I swear by Almighty God to loyally uphold the republican system, to respect the Constitution and the law, to fully look after the interests of the people, and to safeguard the independence and territorial integrity of the motherland."

Article 87 - Challenges to the validity of membership

The Court of Cassation has final jurisdiction over the validity of membership in both chambers. Challenges are submitted to the Court within a period not exceeding 30 days from date on which the final election results are announced. A verdict must be passed within 60 days from the date on which the challenge is filed.

Where a membership is deemed invalid, it becomes void from the date on which the verdict is reported to the chamber.

Article 88 - Property and financial regulation

It is prohibited for any member of either chamber, throughout his tenure, whether in person or through an intermediary, to purchase or rent any piece of state property. It is also prohibited to lease or sell or barter with the state any part of their own property, or conclude a contract with the state as vendor, supplier or contractor.

Members provide financial disclosures and present them to their chamber at the start and at the end of their tenure as well as at the end of each year.

If a member receives cash or in-kind gifts by virtue of his membership in a chamber, ownership of such gifts is transferred to the Public Treasury.

All the foregoing is organized by law.

Article 89 - Member opinions

A member cannot be held accountable for any opinions relating to his work in the chamber of which he is a member.

Article 90 - Member immunity

It is prohibited, except in cases of flagrante delicto, to take criminal action against a member without prior permission from their chamber. If not in session, permission must be granted by the chamber's secretariat, and the chamber must be notified of the decision as soon as the chamber is in session.

In all cases, if a request for permission to take legal action against a member does not receive a response within 30 days, the permission is to be considered granted.

Article 91 - Remuneration

Members are remunerated in accordance with the law.

Article 92 - Seat of parliament

The seats of both the Council of Representatives and the Shura Council are in Cairo.

However, in exceptional circumstances, any of the two chambers may hold meetings elsewhere, at the request of the President of the Republic or one-third of the chamber's members.

Any meetings of the chamber that do not conform with the foregoing are invalid, including any decisions that may have been passed.

Article 93 - Public and in camera sessions

The sessions of the Council of Representatives and the Shura Council are held in public.

Either chamber may hold a closed session based on a request by the President of the Republic, the Prime Minister, or at least 20 of its members. The chamber will decide whether the debate on the question takes place in a public or closed session.

Article 94 - Inauguration and adjournment of sessions

The President of the Republic convokes the Council of Representatives and the Shura Council for their ordinary annual sessions before the first Thursday of October. If such convocation is not made, the chambers are required by the Constitution to meet on said day.

The ordinary session continues for at least eight months. The President of the Republic brings each session to a close with each chamber's approval, and in the case of the Council of Representatives, only after the state's general budget has been adopted.

Article 95 - Extraordinary sessions

It is possible for either chamber to be called to an extraordinary meeting based on a request by the President of the Republic, the Prime Minister, or upon a request signed by at least 10 members from the relevant chamber.

Article 96 - Quorum and required majority

The meetings of the Council of Representatives or Shura Council, and the resolutions they pass, are not considered valid unless attended by the majority of their members.

In cases other than those requiring a special majority, resolutions are adopted based on an absolute majority of the members present. In case of a tie vote, the matter in deliberation is considered rejected.

Article 97 - Selection of speakers and deputy speakers

Each chamber elects, in the first meeting of its regular annual session, a speaker and two deputy speakers for the full legislative term in the case of the Council of Representatives, and for half of the legislative term in the case of the Shura Council. If either seat becomes vacant, the Shura Council or Council of Representatives elects a replacement, whose term will last until the end of his predecessor's.

In all cases, one-third of the members of either chamber can request a new election of the Speaker or Deputy Speakers in the first meeting of the regular annual session.

Article 98 - Replacement for the speaker

Where the speaker of the Council of Representatives or the speaker of the Shura Council temporarily occupy the position of president of the republic, the relevant chamber will be chaired by the older of the two deputy speakers.

Article 99 - Rules of Procedure

Each chamber establishes its own rules of procedure regulating its work and the manner of practicing its functions. The rules of procedure are to be published in the Official Gazette.

Article 100 - Internal order

Each chamber maintains its internal order, a responsibility assumed by each chamber's speaker.

No armed forces may be present within or in vicinity of either chamber except at the request of the chamber's speaker.

Article 101 - Legislative initiative

The President of the Republic, the government, and every member of the Council of Representatives has the right to propose laws.

Every bill is referred to a specialized committee of the Council of Representatives, which studies it and submits a report to the Council.

Bills presented by members of the Council of Representatives cannot be referred to that committee before being first endorsed by the Proposals Committee and approved for consideration by the Council of Representatives. The reasons for which the bill is rejected must be presented if the Proposals Committee does not endorse a proposal for consideration.

A draft law proposed by a member but rejected by the Council of Representatives may not be presented again during the same legislative term.

Article 102 - Consideration of draft laws

Neither chamber may pass a bill without seeking consultation in relation to the bill.

Each chamber has the right to amend and break down existing clauses or suggest amendments.

Each bill passed by either of the chambers will be studied by the other, which in turn cannot delay it for more than 60 days, excluding the legislative recess. It cannot be considered a law unless passed by both chambers.

Article 103 - Legislative dispute between two chambers

In case of a legislative dispute between the two chambers, a joint committee of 20 members is formed, 10 selected by each chamber from among its members and based on the nominations of its General Committee. The joint committee then proposes the wording of the disputed clauses.

The proposals are then presented to each chamber; if an agreement is not reached, the case is taken to the Council of Representatives to reach a decision based on a two-thirds majority vote.

Article 104 - Approval of legislation

The Council of Representatives notifies the President of the Republic of any law passed for the President to issue the new law within 15 days from the date of receiving it. In case the President objects to the draft law, it must be referred back to the Council of Representatives within 30 days.

If the draft law is not referred back within this period, or if it is approved again by a majority of two-thirds of the members, it is considered a law and is issued.

If it is not approved by the Council of Representatives, it may not be presented in the same session before four months have passed from the date of the decision.

Article 105 - Discussion of a public issue

Any member of either chamber may propose to the Prime Minister, one of his deputies or a minister the discussion of a public issue.

Article 106 - Clarification of the government's policy

Any 20 members of the Council of Representatives, or 10 of the Shura Council, at least, may request the discussion of a public issue to obtain clarification on the government's policy in its regard.

Article 107 - Right to obtain data or information

Any member of the Council of Representatives or the Shura Council has the right to obtain data or information pertaining to their own performance at the relevant chamber, taking into account the provisions of Article 47 of the Constitution.

Article 108 - Submission of written proposals and complaints by citizens

Citizens may submit written proposals to either chamber regarding public issues.

Citizens may also submit complaints to either chamber to be referred to the relevant ministers. Based on the chamber's request, the minister may provide a clarification, and the citizen who issued the complaint is kept informed.

Article 109 - Government attendance of sessions

The Prime Minister, his deputies, ministers and their deputies may attend the sessions of either chamber or of any of their committees. Their attendance is obligatory if requested by either chamber. They may be assisted by high-ranking officials of their choice.

They are to be heard whenever they request to speak. They answer questions pertaining to issues that are in discussion, but cannot vote when votes are taken.

Article 110 - Resignation of members

Each chamber accepts the resignation of its members, which must be submitted in writing, and to be accepted must not be submitted after a chamber has started measure of revoking membership against the resigning member.

Article 111 - Revocation of membership

Membership of either chamber may only be revoked if a member has lost trust, status or any of the conditions for membership on the basis of which he was elected, or if the duties of membership have been violated.

Decision on revoking membership is issued by a majority of two-thirds of the chamber in question.

Article 112 - Vacancy

If a member's seat becomes vacant at least six months before the end of his term, the vacant position must be filled in accordance with the law within 60 days from the date on which the vacancy is first reported.

The new member's term is complementary to that of his predecessor.

Section 2: Council of Representatives

Article 113 - Composition

The Council of Representatives has at least 350 members, elected by direct, secret public balloting.

A candidate for parliamentary elections must be an Egyptian citizen, enjoying civil and political rights, holder of a certificate of basic education, and 25 years old or older at the time of candidacy.

Other requirements of candidacy, the provisions for election, the fairly representative division of constituencies, are defined by law.

Article 114 - Term

The term of membership is five calendar years, commencing from the date of its first session.

Elections for a new Council of Representatives are held during the 60 days preceding the end of term for the previous Council of Representatives.

Article 115 - Mandate

The Council of Representatives holds legislative power, and is responsible for approving the state's general policy, the public plan for economic and social development and the annual state budget law. It exercises control over the executive branch's work, in the manner prescribed by the Constitution.

The procedures for drafting the public plan for economic and social development, and presenting it to the Council of Representatives, are determined by law.

Article 116 - Annual state budget law

The annual state budget includes all revenue and expenditure without exception. The draft annual state is submitted to the Council of Representatives at least 90 days before the beginning of the fiscal year. It is not considered in effect unless approved thereby, and it is put to vote on a chapter-by-chapter basis.

The Council of Representatives may modify the expenditures in the draft budget law, except those proposed to honor a specific liability. Should the modification result in an increase in total expenditure, the Council of Representatives agrees with the government on means to secure revenue resources to achieve a balance between revenues and expenditures. The budget is issued in a law, which may include modification in any existing law to the extent necessary to realize such balance.

If the new budget is not approved before the beginning of the new fiscal year, the earlier budget remains in effect until the new budget is approved.

The specifics of the fiscal year, the method of budget preparation, the provisions of the budgets of institutions, public bodies, and their accounts, are defined by law.

Article 117 - Transfer of funds in the budget law

The Council of Representatives' approval is necessary for the transfer of any funds from one chapter of the budget to another, as well as for any expenditure not included therein or in excess of its estimates. The approval is issued in a law.

Article 118 - Collection and disbursement of public funds

The basic rules for collection of public funds and the procedure for their disbursement is regulated by law.

Article 119 - Salaries, pensions, indemnities, subsides and bonuses

The rules governing salaries, pensions, indemnities, subsides and bonuses taken from the state treasury are regulated by law; so are the cases for exception from such rules, and the authorities in charge of their application.

Article 120 - Council of Representatives' approval for contracting loans

The executive branch of government cannot contract a loan, obtain a fund, or commit itself to a project entailing expenditure from the state treasury for a subsequent period, except with the Council of Representatives' approval.

Article 121 - Final account

The final account of the annual state budget is submitted to the Council of Representatives within a period not exceeding 6 months from the end of the fiscal year. The annual report of the Central Auditing Organization and the latter's observations on the final account must be attached.

The final account of the annual state budget is put to vote on a chapter-by-chapter basis and is issued by law.

The Council of Representatives has the right to request from the Central Auditing Organization any additional data or pertinent reports.

Article 122 - Special investigative committees

The Council of Representatives may form a special committee or entrust one of its existing committees to examine the activities of any administrative department or institution or public enterprise, for the purpose of fact-finding regarding a specific issue and informing the Council of Representatives of the

actual financial, administrative or economic status, or for conducting investigations into a past activity; the Council of Representatives decides on the appropriate course of action.

In order to carry out its mission, such a committee would be entitled to collect the evidence it deems necessary and to summon individuals for interviews. All executive and administrative bodies respond to demands by the committee and put under its disposal all the documents and evidence required.

Article 123 - Request for information

Every member of the Council of Representatives may submit questions to the Prime Minister, to one of his deputies, or to a minister in relation to any matter that falls under their mandate. It is obligatory to respond.

The member may withdraw his question at any time. A question cannot become an interrogation in the same session.

Article 124 - Briefings and statements

Every member of the Council of Representatives may request an urgent briefing or a statement from the Prime Minister, the Prime Minister's deputies, or to ministers in relation to urgent matters of public importance.

The government is obliged to respond.

Article 125 - Interrogation

Every member of the Council of Representatives may address interrogations to the Prime Minister, to the Prime Minister's deputies, or to ministers in relation to urgent matters of public importance.

Debate on an interrogation takes place at least seven days after its submission, except in cases of urgency as decided by the Council of Representatives and with the government's consent.

Article 126 - Withdrawal of confidence

The Council of Representatives may decide to withdraw its confidence from the Prime Minister, a deputy of the Prime Minister, or any one of the ministers.

A motion of no confidence may be submitted only after an interrogation, upon proposal by one-tenth of the Council of Representatives' members. The Council of Representatives should reach a decision within seven days from the date of debating the motion. A withdrawal of confidence requires a majority of the Council of Representatives' members to be successful.

In all case, a no confidence motion may not be passed in connection with an issue that had already been decided upon in the same juridical term.

If the Council of Representatives decides to withdraw confidence from the Prime Minister or a minister, and the government announced its solidarity with him before the vote, then that government is obliged to offer its resignation. If the no confidence resolution concerns a certain member of the government, that member is obliged to resign their office.

Article 127 - Dissolution of the Council of Representatives

The President of the Republic may not dissolve the Council of Representatives except by a causative decision and following a public referendum.

A Council of Representatives may not be dissolved during its first annual session, nor for the same cause for which the immediately previous Council of Representatives was dissolved.

To dissolve the Council of Representatives, the President must issue a decision to suspend parliamentary sessions and hold a referendum within 20 days. If voters agree by a valid majority on the dissolution, it is to be carried out. The President calls for early parliamentary elections to take place within 30 days from the date of the dissolution. The new Council of Representatives convenes within the 10 days following the completion of elections.

If no such majority agrees to the dissolution, the President of the Republic resigns.

If, however, the referendum or elections do not take place within the specified time limit, the existing Parliament reconvenes of its own accord on the day following the expiry of the time limit.

Section 3: Shura Council

Article 128 - Composition

The Shura Council has at least 150 members, elected by direct secret ballot. The President of the Republic may appoint a number of members not exceeding one-tenth of the number of elected members.

Article 129 - Conditions for candidacy

A candidate for the Shura Council must be an Egyptian citizen enjoying civil and political rights, a holder of a certificate of higher education, and, at the time of candidacy, at least 35 years old.

Other requirements of candidacy, the provisions for election, the division of constituencies, are defined by law.

Article 130 - Term

The term of membership of the Shura Council is six years, whereas renewed election and appointment of 50 percent of the total number of members, whether elected or appointed, is every three years, as defined by law.

Article 131 - Effect of dissolution of Council of Representatives

In the case of the dissolution of Council of Representatives, the Shura Council carries out its joint legislative responsibilities. Any bills passed by the Shura Council during the period of Council of Representatives' dissolution are presented to the new Council of Representatives for consideration as soon as it is convened.

In the absence of both chambers, and where there is a requirement for urgent measures that cannot be delayed, the President of the Republic may issue decrees that have the force of law, which are then presented to the Council of Representatives and the Shura Council, as the case may be, within 15 days from the start of their sessions.

If such decrees are not presented to the chambers, or if they are presented but not approved, their legality is revoked retroactively, unless the Council affirms their validity for the previous period, or chooses to settle the consequent effects in some other manner.

Chapter Two: Executive Authority

Section 1: The President

Article 132 - Mandate

The President is the head of state and chief of the executive branch of government. He defends the interests of the people, safeguards the independence and territorial integrity of the motherland, and protects the separation of powers.

He carries out his responsibilities in the manner prescribed in the Constitution.

Article 133 - Term

The President of the Republic is elected for a period of four calendar years, commencing on the day the term of his predecessor ends. The President may only be reelected once.

The process of the presidential election begins at least 90 days before the end of the presidential term. The result is to be announced at least 10 days before the end of term.

The President of the Republic may not hold any partisan position for the duration of the presidency.

Article 134 - Eligibility

A presidential candidate must be Egyptian born to Egyptian parents, must have carried no other citizenship, must have civil and political rights, cannot be married to a non-Egyptian, and at the time of nomination cannot be younger than 40 Gregorian years.

Article 135 - Conditions for nomination

A prerequisite for nomination to the presidency is a recommendation by at least 20 elected members of the Council of Representatives and of the Shura Council, or endorsements from at least 20,000 citizens who have the right to vote, in at least 10 governorates, with a minimum of 1,000 endorsements from each governorate.

No one can endorse more than one candidate. This is organised by law.

Article 136 - Method of election

The President of the Republic is elected by direct secret ballot, with an absolute majority of valid votes. The procedures for electing the President of the Republic are regulated by law.

Article 137 - Oath

Before assuming the presidential position, the President of the Republic takes the following oath before the Council of Representatives and the Shura Council: "I swear by Almighty God to loyally uphold the republican system, to respect the Constitution and the law, to fully look after the interests of the people and to safeguard the independence and territorial integrity of the motherland."

In case the Council of Representatives is dissolved, the oath is to be taken before the Shura Council.

Article 138 - Finances

The finances of the President of the Republic are stipulated by law. The President cannot receive any other salary or remuneration, nor engage throughout the presidential term, whether in person or through an intermediary, in an independent profession or business, nor is the President allowed to buy or rent state property, nor lease or sell to or barter with the state any part of their own property, nor conclude a contract with the state as vendor, supplier or contractor.

The President must submit to the Council of Representatives a financial disclosure upon taking office, upon leaving it, and at the end of each year.

If, in relation to the presidential post, the President receives, in person or through an intermediary, cash or in-kind gifts, such gifts are transferred to the state treasury.

The foregoing is organised by law.

Article 139 - Government formation

The President of the Republic nominates the Prime Minister, who is assigned by the President the task of forming a government and presenting its programme to the Council of Representatives within 30 days. If the government is not granted confidence, the President appoints another prime minister from the party that holds a plurality seats in the Council of Representatives. If the second nominee does not obtain confidence within a similar period, the Council of Representatives appoints a Prime Minister who is assigned by the President the task of forming a government, provided said government obtains parliamentary confidence within a similar period. Otherwise, the President of the Republic dissolves the Council of Representatives and call the elections of a new Council of Representatives within 60 days from the date the dissolution is announced.

In all cases, the sum of the periods set forth in this Article should not exceed 90 days.

In the case the Council of Representatives is dissolved, the Prime Minister presents the government and its programme to the new Council of Representatives at its first session.

Article 140 - Establishing the state's public policy

The President of the Republic, in cooperation with the government, lays out the state's public policy and oversees its implementation, in the manner prescribed in the Constitution.

Article 141 - Agency through the government

The President of the Republic exercises presidential authority via the Prime Minister, his deputies and ministers, except those authorities related to defense, national security and foreign policy, and the authorities set out in Articles 139, 145, 146, 147, 148 and 149 of the Constitution.

Article 142 - Delegation of authority

The President of the Republic may delegate part of his mandate to the Prime Minister, to his deputies, to ministers or governors. This will be organised by law.

Article 143 - Power to call government meetings

The President of the Republic may call for government meetings to discuss important matters, presides over such meetings, and requests reports about public affairs from the Prime Minister.

Article 144 - Statement on the state's general policy

The President of the Republic delivers a statement on the state's general policy in a joint session of the Council of Representatives and the Shura Council at the opening of their regular annual sessions.

The President may, when appropriate, make other statements or convey specific messages to either Council.

Article 145 - Foreign relations

The President of the Republic represents the state in foreign relations and concludes treaties and ratifies them after the approval of the Council of Representatives and the Shura Council. Such treaties have the force of law after ratification and publication, according to established procedures.

Approval must be acquired from both chambers with a two-thirds majority of their members for any treaty of peace, alliance, trade and navigation, and all treaties related to the rights of sovereignty or that make the state treasury liable for any expenditures not included in its annual state budget.

No treaty contrary to the provisions of the Constitution can be approved.

Article 146 - Supreme Commander of the Armed Forces

The President of the Republic is the Supreme Commander of the Armed Forces. The President cannot declare war, or send the armed forces outside state territory, except after consultation with the National Defense Council and the approval of the Council of Representatives with a majority of its members.

Article 147 - Appointment of civil and military personnel

The President of the Republic appoints civil and military personnel and dismisses them, appoints diplomatic representatives and removes them, and confirms political representatives of foreign countries and organizations. This is organised by law.

Article 148 - State of emergency

The President of the Republic declares, after consultation with the government, a state of emergency in the manner regulated by law. Such proclamation must be submitted to Council of Representatives within the following seven days.

If the declaration takes place when the Council of Representatives is not in session, a session is called immediately in order to consider the declaration. In case the Council of Representatives is dissolved, the matter is submitted to the Shura Council, all within the period specified in the preceding paragraph. The declaration of a state of emergency must be approved by a majority of members of each chamber. The

declaration is for a specified period not exceeding six months, which can only be extended by another similar period upon the people's approval in a public referendum.

The Council of Representatives cannot be dissolved while a state of emergency is in place.

Article 149 - Pardon and amnesty

The President of the Republic may issue a pardon or mitigate a sentence.

General amnesty may only be granted in a law.

Article 150 - Referenda

The President of the Republic may call for a referendum on important issues relating to the supreme interests of the state.

If the call for a referendum relates to more than one issue, the people must vote on each individual issue.

The results of a referendum are binding to all state authorities and the general public in all cases.

Article 151 - Resignation

For the President of the Republic to resign, a letter of resignation must be presented to the Council of Representatives.

Article 152 - Treason

A charge of felony or treason against the President of the Republic is to be based on a motion signed by at least one-third of the members of the Council of Representatives. An impeachment is to be issued only by a two-thirds majority of the members of the Council of Representatives.

As soon as an impeachment decision has been issued, the President of the Republic ceases all work; this is treated as a temporary obstacle preventing the President from carrying out presidential duties until a verdict is reached.

The President of the Republic is tried before a special court headed by the president of the Supreme Judicial Council, the longest-serving deputies of the president of the Supreme Constitutional Court and of the State Council, and the two longest-serving presidents of the Court of Appeals; the prosecution to be carried out before such court by the Prosecutor General. If any of the foregoing individuals are prevented from leaving their positions, they are replaced by order of seniority.

The law organizes the investigation and the trial procedures. In the case of conviction, the President of the Republic is relieved of his post, without prejudice to other penalties.

Article 153 - Incapacity

If on account of a temporary obstacle, the President of the Republic is rendered unable to carry out the presidential functions, the Prime Minister acts in his place.

If the Presidential office becomes vacant, due to resignation, death, permanent inability to work or any other reason, the Council of Representatives announces the vacancy and notifies the Presidential Elections Commission. The Speaker of the Council of Representatives temporarily assumes the presidential authorities.

In the event the foregoing takes place, the Shura Council and its Speaker replaces the Council of Representatives and its Speaker in cases the Council of Representatives is dissolved.

In all cases, a new president must be elected during a period not exceeding 90 days from the date the office became vacant.

The person acting in place of the President is not allowed to run for office, request any amendment to the Constitution, dissolve the Parliament or dismiss the government.

Article 154 - Vacancy

If the vacancy of the presidential office occurs at the same time that a referendum or the election of either the Council of Representatives or the Shura Council is being held, the presidential elections are given priority. The existing parliament continues in place until the completion of the presidential elections.

Section 2: The Government

Article 155 - Composition

The government consists of the Prime Minister, the Prime Minister's deputies and the ministers.

The Prime Minister heads the government, oversees its work, and directs it in the performance of its functions.

Article 156 - Conditions of membership

A person appointed to the position of Prime Minister or any other position in the government must be an Egyptian citizen, enjoying civil and political rights, over the age of 30, and not having carried the citizenship of any other country unless renounced within a year of reaching the age of eighteen.

It is prohibited to hold a position in the government in addition to membership in either the Council of Representatives or the Shura Council. If a member of either chamber is appointed to the government, his place in parliament is vacated and the provisions of Article 113 of the Constitution are applied.

Article 157 - Oath

Before assuming their duties, the Prime Minister and members of government take the following oath before the President of the Republic: "I swear by Almighty God to loyally uphold the republican system, to respect the Constitution and the law, to fully look after the interests of the people and to safeguard the independence and territorial integrity of the motherland."

Article 158 - Finances

The finances of the Prime Minister and members of government are stipulated by law. They cannot receive any other salary or remuneration, nor engage throughout the term of their posts, whether in person or through an intermediary, in independent professions or business. Nor are they allowed to buy or rent state property, nor lease or sell to or barter with the state any part of their own property, nor conclude a contract with the state as vendors, suppliers or contractors.

A member of government must submit a financial disclosure to the Council of Representatives upon taking office, upon leaving it and at the end of each year.

If, in relation to their posts, they should receive cash or in-kind gifts, such gifts are transferred to the state treasury. The foregoing is organised by law.

Article 159 - Mandate

The government exercises the following functions in particular:

1. Collaborate with the President of the Republic in laying down the public policy of the state and overseeing its implementation.
2. Direct, coordinate and follow up on the work of the ministries and their affiliated public bodies and organizations.
3. Prepare draft laws and decrees.
4. Issue administrative decisions in accordance with the law, and monitor their implementation.
5. Prepare the draft annual state budget law.
6. Prepare the draft development plan of the state.
7. Contract and grant loans in accordance with the provisions of the Constitution.
8. Supervise the implementation of laws, maintain state security and protect the rights of the citizens and the interests of the state.

Article 160 - General policy of individual ministries

The Minister draws up his ministry's general policy, supervises its implementation and offers guidance and control, in the framework of the state's public policy.

Article 161 - Statements before the Council of Representatives and the Shura Council

A government member may make a statement before the Council of Representatives, the Shura Council, or one of their committees, concerning any matters within their mandate.

The chamber or the committee may discuss such a statement and convey its position regarding it.

Article 162 - Issuance of regulations

The Prime Minister issues necessary regulations for the enforcement of laws, in such a manner that does not involve any disruption, modification, or exemption from their enforcement, and has the right to vest others with the authority to issue them, unless the law designates who should issue the necessary regulations for its own implementation.

Article 163 - Issuance of regulations on public services

The Prime Minister issues the regulations necessary for the creation and organization of public services and facilities upon the government's approval. The Council of Representatives' approval is required, if such regulations result in new expenditures in the annual state budget.

Article 164 - Disciplinary regulations

The Prime Minister issues disciplinary regulations upon the government's approval.

Article 165 - Appointment and dismissal of civil servants

The authority in charge of the appointment and dismissal of civil servants, the functions of the main positions, and the responsibilities, rights and securities of employees, is regulated by law.

Article 166 - Accusations against the government

The President of the Republic, the Prosecutor General, and the Council of Representatives, with a motion signed by one-third of its members, have the right to accuse the Prime Minister or any of the members of the government concerning crimes committed during their term of office or in relation to their work.

In all cases, charges can only be brought with the approval of two-thirds of the members of the Council of Representatives. An accused member of government is relieved of their post until a verdict is reached. The end of their term of service does not preclude the start or resumption of prosecution.

Article 167 - Resignation

If the government or one of its members offers its resignation, the letter of resignation must be presented to the President of the Republic.

Chapter 3: The Judiciary

Section 1: General Provisions

Article 168 - Judicial independence

The judiciary is independent. It is vested in the courts of justice, which issue their judgments in accordance with the law. Its powers are defined by law. Interference in judicial affairs or in proceedings is a crime to which not statute of limitations may be applied.

Article 169 - Independence in the administration of judicial affairs

All judicial bodies administer their own affairs. Each has an independent budget and is consulted on the draft laws governing its affairs. This is organised by law.

Article 170 - The independence of judges

Judges are independent, cannot be dismissed, are subject to no other authority but the law, and are equal in rights and duties.

The conditions and procedures for their appointment and disciplinary actions against them are defined and regulated by the law. When delegated, their delegation is absolute, to the destinations and in the positions defined by the law, all in a manner that preserves the independence of the judiciary and the accomplishment of its duties.

Article 171 - Public sessions

Court sessions are public, unless, for reasons of public order or morals, the court deems them confidential. In all cases, the verdict is given in an open session.

Section 2: The courts and public prosecution

Article 172 - Mandate of the courts

Courts adjudicate all disputes and crimes except for matters that are to be decided by another judicial body. The judiciary settles any disputes relating to the affairs of its members.

Article 173 - Public prosecution

The public prosecution is an integral part of the judiciary. It is responsible for investigating, pressing charges and following up in all criminal cases except what is exempted by law. The law establishes the public prosecution's other competencies.

Public prosecution is carried out by a Prosecutor General who is appointed by the President of the Republic, based on the selection of the Supreme Judicial Council from among the Deputies to the President of the Court of Cassation, the Presidents of the Court of Appeals and Assistant Prosecutor Generals, for a period of four years, or for the period remaining until retirement age, whichever comes first, and only once during a judge's career.

Section 3: The State Council

Article 174 - Mandate

The State Council is an independent judicial body that exclusively undertakes adjudicating in administrative disputes and disputes pertaining to the implementation of its decisions. It also undertakes disciplinary proceedings and appeals, adjudicates in legal issues to be determined by law, reviews and drafts bills and resolutions of legislative character referred to it, and reviews contracts to which the state is a party.

Other competencies to be determined by law.

Section 4: The Supreme Constitutional Court

Article 175 - Mandate and procedures

The Supreme Constitutional Court is an independent judicial body. It is based in Cairo. It is exclusively competent to decide on the constitutionality of laws and regulations.

The law defines the Court's other competencies and regulates the procedures that are to be followed before the Court.

Article 176 - Composition

The Supreme Constitutional Court is made up of a president and ten members. The law determines the judicial or other bodies and associations that nominate them, the manner in which they are to be appointed, and the requirements to be satisfied by them. Appointments take place by a decree from the President of the Republic.

Article 177 - Constitutionality of electoral laws

The President of the Republic or the Speaker of the Council of Representatives present draft laws governing presidential, legislative or local elections before the Supreme Constitutional Court, to determine their compliance with the Constitution prior to dissemination. The Court reaches a decision in this regard within 45 days from the date the matter is presented before it; otherwise, the proposed law is considered approved.

If the Court deems one or more parts of the text non-compliant with the provisions of the Constitution, its decision is implemented.

The laws referred to in the first paragraph are not subject to the subsequent control stipulated in Article 175 of the Constitution.

Article 178 - Publication of decisions in the Official Gazette

The Official Gazette publishes verdicts issued by the Supreme Constitutional Court and decisions pertaining to preemptive control of draft laws governing presidential, legislative or local elections.

The effects of a decision on the unconstitutionality of a legislative text are organised by law.

Section 5: Judicial Bodies

Article 179 - The Association of State Affairs

The Association of State Affairs is an independent judicial body. It undertakes the legal representation of the state in disputes, and technical supervision of legal affairs departments within State Administration.

It is responsible for the drafting of contracts and the settling of disputes to which the state is a party, in the manner regulated by law.

Its other competencies are defined by law.

Its members share immunities, securities, rights and duties assigned to other members of the judiciary.

Article 180 - Administrative Prosecutor

The Administrative Prosecutor is an independent judicial body. It investigates financial and administrative irregularities, raises disciplinary proceedings before the courts of the State Council and follows up on them, and takes legal action to address deficiencies in public facilities. Other competencies are defined by law.

Its members share immunities, securities, rights and duties assigned to other members of the judiciary.

Section 6: The legal profession

Article 181 - Independence

The legal profession is a liberal profession and a cornerstone of justice. It is practiced by lawyers independently and is safeguarded by guarantees that protect them and enable them to carry out their work, in the manner regulated by law.

Section 7: The experts

Article 182 - Autonomy

Officers at the Real Estate Publicity Department, forensic experts and judicial experts enjoy technical autonomy in their work. The law safeguards the necessary guarantees and protection for them to carry out their work.

Chapter 4: The system for local administration

Section 1: Local and administrative division of the state

Article 183 - Local administrative units

The state is divided into local administrative units that have legal personality. They incorporate governorates, provinces, cities, districts and villages. One administrative unit may comprise more than one village or district. Other administrative units that have legal personality may be established. The foregoing will be organised by law in a way that supports decentralisation, that empowers administrative units in providing local services and facilities, that reinvigorates them and improves their administration.

Article 184 - Technical, administrative and financial assistance from the state

The state guarantees that it will satisfy the local unit's needs in terms of technical, administrative and financial assistance, and ensures the equitable distribution of facilities, services and resources, and works to bring development levels and living standards in these units to a common standard. This will be organised by law.

Article 185 - Local taxes and fees

Local units' income includes additional taxes and fees of a local nature. The unit follows the same rules and procedures in the collection of public funds as followed by the state. The foregoing is regulated by law.

Article 186 - Cooperation between local units

The law regulates cooperation between local units in matters of mutual benefit and means of cooperation between local units and the state apparatus.

Article 187 - Selection of governors

The law regulates the manner in which governors and heads of other local administrative units are selected, and defines their mandate.

Section 2: Local Councils**Article 188 - Election of local councils**

Every local unit elects a local council by direct, secret ballot for a term of four years.

Representatives from the executive apparatus of the local unit forms part of the council but have no counted vote.

Every council elects its president and deputy from among its elected members.

Conditions and procedures for nomination and election are regulated by law.

Article 189 - Mandate

The local council is concerned with issues of concern in the unit it represents. It creates and manages local facilities, economic, social and health-related activities, as well as other activities. The foregoing is organised by law.

Article 190 - Local council decisions

Local council decisions that are issued within the council's mandate are final. they are not subject to interference from the executive branch of government, except to prevent the council from overstepping limits, or causing damage to public interest or the interests of other local councils.

Any dispute over the jurisdiction of a local council is dealt with as a matter of urgency by the Legislation Department of the State Council. The foregoing is organised by law.

Article 191 - Budget and final accounts

Every local council is in charge of its own budget and final accounts, in the manner organised by law.

Article 192 - Dissolution of local councils

It is prohibited to dissolve local councils as part of a comprehensive administrative procedure. The manner to dissolve and reelect any one of them is organised by law.

Chapter 5: National Security and Defense

Section 1: The National Security Council

Article 193 - Composition and mandate

The National Security Council is established. It is presided over by the President of the Republic and includes in its membership the Prime Minister, the Speakers of the Council of Representatives and the Shura Council, the Minister of Defense, the Minister of Interior, the Minister of Foreign Affairs, the Minister of Finance, the Minister of Justice, the Minister of Health, the Chief of the General Intelligence Services, and the Heads of the Committees of Defense and National Security in the Council of Representatives and the Shura Council.

The Council adopts strategies for establishing security in the country; faces disasters and crises of all kinds and takes necessary measures to contain them; and identifies sources of threat to Egyptian national security, whether at home or abroad, and undertakes necessary actions to address them on the official and popular levels.

The Council invites whoever is seen as being of relevant expertise to attend its meetings without having their votes counted.

Other competencies and regulations are defined by law.

Section 2: The Armed Forces

Article 194 - Duty of the armed forces

The armed forces belong to the people. Their duty is to protect the country, and preserve its security and territories. The state is exclusively mandated to establish armed forces. No individual, entity, organization or group is allowed to create military or para-military structures, groups or organizations.

The armed forces have a Supreme Council as regulated by law.

Article 195 - Commander in Chief

The Minister of Defense is the Commander in Chief of the Armed Forces, appointed from among its officers.

Article 196 - Public mobilization

The law regulates public mobilization and defines the conditions of service, promotion and retirement in the armed forces.

The judicial committees for officers and personnel of the armed forces are exclusively competent for adjudicating in all administrative disputes pertaining to decisions affecting them.

Section 3: The National Defense Council

Article 197 - Composition and mandate

A National Defense Council is established, presided over by the President of the Republic and including in its membership the Speakers of the Parliament and Shura Council, the Prime Minister, the Minister of Defense, the Minister of Foreign Affairs, the Minister of Finance, the Minister of Interior, the Chief of the General Intelligence Service, the Chief of Staff of the armed forces, the Commander of the Navy, the Air Forces and Air Defense, the Chief of Operations for the armed forces and the Head of Military Intelligence.

The Council is responsible for matters pertaining to the methods of ensuring the safety and security of the country, for discussing the armed forces' budget. Its opinion must be sought in relation to draft laws on the armed forces.

Its other competencies are defined by law.

The President of the Republic may invite whoever is seen as having relevant expertise to attend the Council's meetings without having their votes counted.

Section 4: Military courts

Article 198 - Mandate and trial of civilians

The Military Judiciary is an independent judiciary that adjudicates exclusively in all crimes related to the armed forces, its officers and personnel; in crimes pertaining to military service which occur within military facilities; or crimes relating to armed forces facilities, equipment or secrets.

Civilians cannot stand trial before military courts except for crimes that harm the armed forces. The law defines such crimes and determines the other competencies of the Military Judiciary.

Members of the Military Judiciary are autonomous and cannot be dismissed. They share the immunities, securities, rights and duties stipulated for members of other judiciaries.

Section 5: The Police

Article 199 - Mandate

The police force is a statutory civil body with the President of the Republic as its Supreme Chief. It performs its duty in the service of the people, its loyalty being to the Constitution and the law, and its responsibilities to preserve order, public security and morality, to implement laws and regulations, and to safeguard the peace, dignity, rights and freedoms of citizens, all as regulated by law and in a manner that enables police personnel to carry out their duties.

Part IV: Independent Bodies and Regulatory Agencies

Chapter 1: Common provisions

Article 200 - Independence

Independent bodies and regulatory agencies that are defined in the Constitution have legal personality, neutrality, and technical, administrative and financial autonomy.

Additional independent bodies and regulatory agencies are defined by law.

These independent bodies and agencies are consulted about draft laws and regulations that relate to their fields of operation.

Article 201 - Public reports

Reports from independent bodies and regulatory agencies are presented to the President of the Republic, the Council of Representatives and Shura Council within 30 days from the date on which they are issued.

The Council of Representatives considers such reports and takes appropriate action within a period not exceeding six months from the date of receipt. The reports are presented for public opinion.

Regulatory agencies notify the appropriate investigative authorities of any evidence of violations or crime they may discover.

The foregoing is regulated by law.

Article 202 - Appointment of heads

The President of the Republic appoints the heads of independent bodies and regulatory agencies upon the approval of the Shura Council, for a period of four years, renewable once. They cannot be dismissed except with the consent of a majority of the Council's members; the same prohibitions apply to them that apply to ministers.

Article 203 - Mandate, appointment and dismissal of personnel

For the creation of each independent body or regulatory agency, a law is issued defining competencies other than those outlined in the Constitution, regulating the agency's work and stipulating the necessary securities to enable its personnel to carry out that work.

The law defines details of appointment, promotion, accountability and dismissal, and other conditions of employment, to ensure the personnel's impartiality and autonomy.

Chapter 2: Regulatory Agencies

Section 1: The National Anti-Corruption Commission

Article 204 - Mandate

The National Anti-Corruption Commission combats corruption, deals with conflicts of interest, promotes and defines the standards of integrity and transparency, develops the national strategy concerned with such matters, ensures the implementation of said strategy in coordination with other independent bodies, and supervises the concerned agencies specified by law.

Section 2: Central Auditing Organization

Article 205 - Mandate

The Central Auditing Organization has control over state funds and any other body specified by law.

Section 3: The Central Bank

Article 206 - Mandate

The Central Bank stipulates monetary, credit and banking policies, supervises their implementation, monitors the performance of the banking system, works to establish price stability, and has exclusive rights to issue currency.

The foregoing is in accordance with the state's overall economic policy.

Chapter 3: The Economic and Social Council

Article 207 - Mandate

The Economic and Social Council supports the participation of social groups in the preparation of economic, social and environmental policies, and promotes social dialogue.

The government, the Council of Representatives and the Shura Council consult the Economic and Social Council on those policies and any related draft laws.

The Council consists of at least 150 members, selected by their elected organizations of trade unions, syndicates, associations of farmers, workers and professionals, and other social groups, provided the representation of workers and farmers makes up for at least 50 percent of the Council members.

Membership of this Council may not be combined with membership of the government or either of the parliamentary chambers.

The details according to the Council is formed, its President is elected, the regulations governing its work are issued, and the means of presenting its recommendations to the state authorities are defined by law.

Chapter 4: The National Electoral Commission

Article 208 - Mandate

The National Electoral Commission is exclusively responsible for managing referenda and presidential, parliamentary and local elections, which includes the preparation of a database of voters, input on the division of constituencies, control over electoral funding and expenditure, electoral campaigns and other procedures, up to the announcements of results.

The Commission may be entrusted with supervising the elections of trade unions and other organizations.

The foregoing is regulated by law.

Article 209 - Composition and term

The National Electoral Commission is administered by a board made up of 10 members selected equally from among the deputies of the head of the Court of Cassation, the heads of the Courts of Appeal, the deputy head of the State Council, the State Affairs and Administrative Prosecution, who are to be selected by the Supreme Judicial Council and special councils depending on the circumstances from outside their board members, to be fully delegated for exclusive work at the Commission for one term of six years. The Commission's presidency belongs to its longest-serving member from the Court of Cassation.

Elections are held to renew half of the Commission members every three years.

The Commission may refer to public figures or specialists deemed to have relevant expertise in the field of elections. The Commission has an executive body.

The foregoing is organised by law.

Article 210 - Balloting and counting of referenda and elections

Voting and counting of votes in referenda and elections run by the Commission is administered by its affiliated members under the overall supervision of the Board. Members are furnished with the necessary securities that enable them to perform their role with impartiality and autonomy.

As an exceptional measure, the Commission delegates the overseeing of voting and counting of votes to members of the judiciary for at least 10 years from the date the Constitution is ratified, all as regulated by law.

Article 211 - Dispute resolution

The Supreme Administrative Court adjudicates on appeals brought against the decisions of the National Electoral Commission pertaining to referendums and parliamentary or presidential elections and their results. Appeals pertaining to local elections are brought before an administrative court.

The law regulates the procedure for appeals and the timeline for adjudication in a manner that does not disrupt the electoral process or the announcement of final results. The final results of referendums or presidential elections may not be challenged after their announcement.

In all cases, the announcement of results must take place within a period not exceeding eight days from the ballot date.

Chapter 5: Independent bodies

Section 1: The Supreme Authority for Endowment Affairs

Article 212 - Mandate

The High Authority for Endowment Affairs regulates, supervises and monitors public and private endowments, ensures their adherence to sensible administrative and economic standards, and raises awareness about endowments in society.

Section 2: The Supreme Authority for Heritage Conservation

Article 213 - Mandate

The Supreme Authority for Heritage Conservation regulates the means of protecting the cultural and architectural heritage of Egyptians, supervises its collection and documentation, safeguards its assets, and revives awareness of its contributions to human civilization.

This Authority undertakes the documentation of the 25 January revolution.

Section 3: The National Council for Education and Scientific Research

Article 214 - Mandate

The National Council for Education and Scientific Research develops the national strategy for education in all its forms and all its stages, ensures integration between the stages, promotes scientific research, develops national standards for the quality of education and scientific research, and monitors the implementation of such standards.

Section 4: Independent Press and Media Organizations

Article 215 - Mandate

The National Media Council regulates the affairs of radio, television, and printed and digital press, among others.

The Council ensures the freedom of media in all its forms, safeguards plurality, fights centralization and monopoly, protects the interests of the public, and establishes controls and regulations ensuring the commitment of media to adhere to professional and ethical standards, to preserve the Arabic language, and to observe the values and constructive traditions of society.

Article 216 - State owned media

The National Press and Media Association manages state-owned press and media institutions and undertakes the development of them and their assets to maximize their national investment value and ensure their adherence to sensible professional, administrative and economic standards.

Part V: Final and Transitional Provisions

Chapter 1: Amendments to the Constitution

Article 217 - Preliminary procedures

The amendment of one or more of the Constitution articles may be requested by the President of the Republic or the Council of Representatives. The request specifies the articles to be amended and the reasons for the amendments, and if initiated by the Council of Representatives is signed by at least five members of the Council of Representatives.

In all cases, the Council of Representatives and Shura Council debate the request within 30 days from the date of its receipt. Each council issues its decision to accept the request in whole or in part by two-thirds majority of its members.

If the request is rejected, the same amendments may not be requested again before the next legislative term.

Article 218 - Parliamentary approval and referendum

If the amendment request is approved by both chambers, each of them discusses the text of the articles to be amended within 60 days from the date of approval. If approved by a two-thirds majority of each chamber, the amendment is put to public referendum within 30 days from the date of approval.

The amendment is effective from the date on which the referendum's result is announced.

Chapter 2: General Provisions

Article 219 - Principles of Islamic Sharia

The principles of Islamic Sharia include general evidence, foundational rules, rules of jurisprudence, and credible sources accepted in Sunni doctrines and by the larger community.

Article 220 - Capital

Cairo is the capital of the state. The capital may be moved by law.

Article 221 - National flag

The national flag, the state's emblem, decorations, insignia, seal and the national anthem are defined by law.

Article 222 - Validity of existing law

Provisions stipulated by laws and regulations prior to the proclamation of this Constitution remain valid and in force. They may not be amended or repealed except in accordance with the regulations and procedures prescribed in the Constitution.

Article 223 - Promulgation of laws

Laws are published in the Official Gazette within 15 days from the date of their issuance, to be effective 30 days from the day following the date of publication, unless the law specifies a different date.

Provisions of the laws apply only from the date of their enforcement and have no retroactive effect. However, with the approval of a two-thirds majority of the members of the Council of Representatives, provisions to the contrary may be made in articles pertaining to non-criminal and non-tax-related matters.

Article 224 - Electoral system

Elections of the Council of Representatives, Shura Council and local councils are held in accordance with the system of individual candidacy, a list-based system, a combination of the two, or any other electoral system defined by law.

Article 225 - Entry into force

This Constitution is in force as of the date of announcing the public approval of it in a referendum, based on a majority of valid votes of the referendum participants.

Chapter 3: Transitional Provisions

Article 226 - Presidential term

The current presidential term comes to an end four years from the date of the President taking office. He may only be re-elected only once.

Article 227 - End of terms

Every position for which a limited term is stipulated in the Constitution or by law, whether a non-renewable or renewable once, is calculated from the date the position was assumed. The term of office also expires if the person in office reaches the retirement age as prescribed by law.

Article 228 - High Electoral Committee

The High Electoral Committee, existing at the time this Constitution comes into effect, undertakes the full supervision of the first parliamentary elections. The funds of the Committee and of the High Presidential Elections Committee are transferred to the National Electoral Commission, as soon as the latter is formed.

Article 229 - First parliamentary elections

Procedures for the first parliamentary elections begins within 60 days of this Constitution coming into effect, the first legislative term held within 10 days from the date of announcing the final result of the elections.

Article 230 - Existing Shura Council

The existing Shura Council assumes full legislative authority until the new Council of Representatives is formed. Full legislative authority will then be transferred to the Council of Representatives, until the election of a new Shura Council, which occurs within six months from the start of the Council of Representatives' session.

Article 231 - First legislative elections

The first legislative elections following the adoption of this Constitution are held in the following manner: two-thirds of the seats are to be won by a list-based electoral system and one-third by individual candidacy, with parties and independent candidates allowed to run in each.

Article 232 - Leaders of the National Democratic Party

The leadership of the dissolved National Democratic Party are banned from political work and prohibited to run for presidential or legislative elections for a period of 10 years from the date of the adoption of this Constitution. The term 'leadership' is designed to include everyone who, on 25 January 2011, was a member of the Secretariat of the Party, the Policies Committee or the Political Bureau, or anyone who was a member of the People's Assembly or the Shura Council during the two legislative terms preceding the Revolution.

Article 233 - Composition of the Supreme Constitutional Court

The Supreme Constitutional Court, after this Constitution enters into force, shall be composed of its current head and its ten most senior members. The rest of the members shall return to the posts that they occupied prior to their appointment to the Court.

Article 234 - Appeals against criminal convictions

The law on appeals of criminal convictions that is mentioned in paragraph three of Article 77 of the Constitution will apply one year after the Constitution has come into force.

Article 235 - Existing local administration system

The existing Local Administration system shall remain in place, and the system laid down in this Constitution applied gradually over the 10 years following from the date of its adoption.

Article 236 - Constitutional declarations

Constitutional declarations issued by the Supreme Council of the Armed Forces and by the President of the Republic from 11 February 2011 to the date of the adoption of this Constitution are hereby repealed. Their consequent effects remain valid and in force and may not be appealed.

* * *